



**AMPARO EN REVISION NUMERO 1248/97.
QUEJOSA: BROKER DISTRIBUCION, S.A.
DE C.V.**

**ONENTE: MINISTRO JUAN DIAZ ROMERO.
SECRETARIO: ARMANDO CORTES GALVAN.**

Vo. Bo.
MINISTRO:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al
treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

CONSIDERANDO:

VISTO, para resolver, el toca número 1248/97, relativo
al recurso de revisión interpuesto por la quejosa Broker
Distribución, sociedad anónima de capital variable, en contra
de la sentencia pronunciada por el Juez Séptimo de Distrito en
Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de
amparo número 57/97, y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el diez de febrero de
mil novecientos noventa y siete, ante el Secretario del Juzgado
Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, autorizado en turno para tal efecto, la empresa
denominada Broker Distribución, sociedad anónima de capital
variable, por conducto de su representante legal Marcos Javier
Lucio Rodríguez, solicitó el amparo y la protección de la
Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos
que a continuación se indican:

"AUTORIDADES RESPONSABLES:

- "a) H. Congreso de la Unión;
- "b) C. Presidente de la República;
- "c) C. Secretario de Gobernación;
- "d) C. Secretario de Hacienda y Crédito Público;
- "e) C. Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
- "f) C. Director del Diario Oficial de la Federación, dependiente de la Secretaría de Gobernación;
- "g) C. Administrador General de Recaudación, dependiente de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
- "h) C. Administrador Local de Recaudación de Oriente del Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"ACTOS RECLAMADOS:

- "a) Del H. CONGRESO DE LA UNION, se reclama la expedición de la Ley del Impuesto al Activo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1988, así como sus reformas contenidas en los Decretos publicados en propio Diario los días 28 de diciembre de 1989, 26 de diciembre de 1990, 20 de diciembre de 1991, 20 de julio de 1992, 3 de diciembre de 1993, 28 de diciembre de 1994 y 10 de mayo de 1996.
- "b) Del C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, se reclama la promulgación y orden de publicación del ordenamiento legal mencionado en el inciso "a) que antecede y de sus reformas.

ESTADO
SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



"c) De los CC. SECRETARIO DE HACIENDA Y
"CREDITO PUBLICO Y SECRETARIO DE
"GOBERNACION, se reclama el refrendo del
"ordenamiento legal citado en el punto a) que
"antecede y de sus reformas.

"d) De los CC. SECRETARIO DE HACIENDA Y
"CREDITO PUBLICO Y SUBSECRETARIO DE
"INGRESOS, se reclama la expedición de la
"resolución que establece para 1996 reglas de
"carácter general aplicables a los impuestos y
"derechos federales, excepto a los relacionados
"con el comercio exterior (Resolución Miscelánea
"Fiscal para 1996), así como la Primera
"Resolución que modifica a la Miscelánea Fiscal
"para 1996, publicadas en el Diario Oficial de la
"Federación de 29 de marzo y 17 de junio de
"1996, respectivamente, por cuanto a lo
"establecido en su regla 262-A.

"e) De los CC. SECRETARIO DE GOBERNACION
"Y DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA
"FEDERACION, se reclama la publicación de los
"ordenamientos legales citados en los puntos a)
"y d) que anteceden.

"f) De los CC. SECRETARIO DE HACIENDA Y
"CREDITO PUBLICO, ADMINISTRADOR
"GENERAL DE RECAUDACION Y
"ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACION DE
"ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, se reclama
"el primer acto de aplicación de los
"ordenamientos legales reclamados de

SECRETARIA DE
LA FISCALIA
AL DE ACUERDO

*"inconstitucionales, consistente en la recepción
"del pago efectivo del impuesto al activo, a través
"de las declaraciones provisionales
"correspondientes a los meses de mayo a
"diciembre de 1996 presentadas por las ahora
"quejosas (sic) en Bancrecer, S.A., el día 17 de
"enero de 1997."*

SEGUNDO. La parte quejosa relató como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes:

*"1. En el Diario Oficial de la Federación de fecha
"31 de diciembre de 1988 fue publicada la Ley del
"Impuesto al Activo, misma que fue reformada
"diversos decretos publicados en ese mismo
"Diario los días 28 de diciembre de 1989, 26 de
"diciembre de 1990, 20 de diciembre de 1991, 20
"de julio de 1992, 3 de diciembre de 1993, 28 de
"diciembre de 1994 y 10 de mayo de 1996. Las
"reformas publicadas en esta última fecha son
"las que dan lugar a la promoción del presente
"juicio de garantías.*

*"2. En el Diario Oficial de la Federación de fecha
"29 de marzo de 1996, fue publicada la resolución
"que establece para 1996 reglas de carácter
"general aplicables a los impuestos y derechos
"federales, excepto a los relacionados con el
"comercio exterior (Resolución Miscelánea para
"1996), a la cual se le incluyó la Regla 262-A a
"través de la primera resolución que modifica a la*



**"propia Miscelánea Fiscal publicada en el Diario
"Oficial de 17 de junio de 1996.**

**"3. Mediante declaraciones provisionales
"presentadas en Bancrecer, S. A., el día 17 de
"enero del año en curso, las ahora quejosas
"efectuaron el pago efectivo del impuesto al
"activo correspondiente a los meses de mayo a
"diciembre de 1996, el cual constituye el primer
"acto de aplicación de la ley de la materia
"conforme a su texto reformado en el decreto
"publicado en el Diario Oficial de la Federación
"de fecha 10 de mayo de 1996, así como de la
"Regla 262-A de la Resolución Miscelánea para
"1996, cuya inconstitucional se reclama por
"conducto de la presente demanda de garantías.**

**"4. Los ordenamientos legales que han quedado
"como reclamados en el capítulo
"correspondiente del presente ocurso, son
"violatorios de diversas garantías individuales en
"perjuicio de las ahora peticionantes (sic), por lo
"que vienen a solicitar el amparo y protección de
"la Justicia de la Unión contra dichos actos y sus
"efectos."**

TERCERO. La parte quejosa señaló como violados en su perjuicio los artículos 1º, 13, 14, 16, 28, párrafo primero, y 31, fracción IV, de la propia Constitución Federal, y expresó al efecto los siguientes conceptos de violación:

"PRIMERO. El texto de la Ley del Impuesto al
 "Activo en vigor a partir del 11 de mayo del
 "presente año es violatorio en perjuicio de mis
 "representadas de las garantías de igualdad y
 "equidad que consagran los artículos 1º, 13 y 31,
 "fracción IV, de la Constitución Política del País,
 "que establecen, respectivamente, lo siguiente:
 "'En los Estados Unidos Mexicanos todo
 "individuo gozará de las garantías que otorga
 "esta Constitución, las cuales no podrán
 "restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y
 "con las condiciones que ella misma establece;
 "que: "Nadie puede ser juzgado por leyes
 "privativas ni por tribunales especiales"; y que
 "'Son obligaciones de los mexicanos: [...] IV.
 "Contribuir para los gastos públicos, así de la
 "Federación, como del Distrito Federal o del
 "Estado y Municipio en que residan, de la manera
 "proporcional y equitativa que dispongan las
 "leyes."

"Las garantías de igualdad y equidad aludidas se
 "traducen en que varias personas, en número
 "indeterminado, que se encuentren en una
 "específica situación, tengan la posibilidad y
 "capacidad de ser titulares, cualitativamente, de
 "los mismos derechos y contar con las mismas
 "obligaciones que emanen de dicho Estado. Es
 "decir, la igualdad y la equidad entre los sujetos
 "de derecho se manifiesta en la posibilidad y en
 "la capacidad de que varias personas,



numéricamente indeterminadas, adquieran en
"similares términos los derechos y contraigan las
"obligaciones derivadas del exacto estado en
"que se hallan. Por ende, no puede considerarse
"que existe una relación igualitaria entre la
"posición concreta que guardan personas
"colocadas en una misma situación jurídica,
"cuando el poder público, para los mismos
"supuestos, les concede a cada una un trato
"diferente. Por ello, la igualdad y la equidad entre
"los sujetos es el conjunto de posibilidades y
"capacidades que les son imputables, para que
"estén en aptitud de adquirir idénticos derechos
"y obligaciones desde un punto de vista
"cualitativo, que corresponden a otras personas
"colocados en la misma situación jurídica, lo que
"desde el ángulo constitucional se traduce en
"una concepción eminentemente negativa,
"consistente en la ausencia de distinciones entre
"los individuos que se encuentran en un mismo
"plano de igualdad. El campo en el que opera la
"igualdad y equidad es muy amplio, pues no se
"establece ni se demarca por un cierto factor
"contingente o accesorio, sino que se forma por
"un fenómeno negativo inherente a los sujetos en
"sí considerados, para que no haya diferencias
"en las posibilidades y en las capacidades
"jurídicas generales, debidas a particularidades
"que puedan ostentar varias personas.

CORTE DE
LA NACIÓN
DEL 12 DE ABRIL DE 1997

"Por tratarse de una garantía constitucional, el
 "gobierno tiene el derecho o potestad jurídica
 "de exigir al Estado y a sus órganos, el respeto
 "de esa situación en que se traduce la igualdad y
 "la equidad. El propio Estado y sus órganos
 "tienen la obligación de reputar a los particulares
 "en su totalidad en un mismo plano, sin atribuir
 "distinciones y diferencias en base a elementos
 "contingentes.

"En lo que concierne a las relaciones juridico-
 "tributarias, los anteriores argumentos se
 "encuentran ratificados en la jurisprudencia de la
 "H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que a
 "continuación se transcribe:

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD
 "TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTICULO 31
 "FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. De una

"revisión a las diversas tesis sustentadas por
 "esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
 "torno al principio de equidad tributaria previsto
 "por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
 "Federal, necesariamente se llega a la conclusión
 "de que, en esencia, este principio exige que los
 "contribuyentes de un impuesto que se
 "encuentran en una misma hipótesis de
 "causación, deben guardar una idéntica situación
 "frente a la norma jurídica que lo establece y
 "regula, lo que a la vez implica que las
 "disposiciones tributarias deben tratar de manera
 "igual a quienes se encuentren en una misma



*"situación y de manera desigual a los sujetos del
 "gravamen que se ubiquen en una situación
 "diversa, implicando además, que se establezca
 "que para poder cumplir con este principio el
 "legislador no sólo está facultado, sino que tiene
 "obligación de crear categorías o clasificaciones
 "de contribuyentes, a condición de que éstas no
 "sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para
 "hostilizar a determinadas clases o universidades
 "de causantes, que se sustenten en bases
 "objetivas que razonablemente justifiquen el
 "tratamiento diferente entre una y otra categoría,
 "y que pueden responder a finalidades
 "económicas o sociales, razones de política
 "fiscal o incluso extrafiscales."*



*"Semanario Judicial de la Federación y su
 "Gaceta. Novena Época. Tomo II. Diciembre de
 "1995. Páginas 208 y 209.*

*"Es así, de acuerdo con las disposiciones
 "constitucionales transcritas al inicio de este
 "apartado y con la interpretación que sobre el
 "particular ha elaborado nuestro Máximo
 "Tribunal, como se concluye que la equidad y la
 "igualdad en materia impositiva presuponen y
 "persiguen, concomitantemente, el mismo
 "tratamiento a todas las personas obligadas al
 "pago de una contribución, cuando se
 "encuentren en idénticas situaciones jurídicas o
 "de hecho, para que con ello se conceda un trato
 "igual a los iguales y desigual a los desiguales.*

**"En consecuencia, los gravámenes que no
"respeten los principios de igualdad y de equidad
"no podrán tenerse por válidos, desde una
"perspectiva constitucional, al atribuir el mismo
"tratamiento a los desiguales o diferentes a los
"iguales.**

**"Ahora bien, la inconstitucionalidad de la Ley del
"Impuesto al Activo en su texto aplicable desde
"el 11 de mayo de año en curso se configura al
"momento en que se implantan similitudes y
"paridades en el tratamiento fiscal de sujetos
"que se encuentran en diferentes situaciones
"jurídicas y de hecho a la vez que, en forma por
"demás paradójica, también establece
"diferenciaciones entre contribuyentes que
"guardan igualdad legal y fáctica indudable, todo
"ello en franca contradicción de los artículos 1,
"13 y 31, fracción IV, de la Carta Magna, en los
"términos que a continuación se acreditan:**

**"Injustificada exclusión de deducciones: Ello es
"así, en primer lugar, pues de acuerdo con la
"reforma efectuada al artículo 6º, fracción II, de la
"Ley del Impuesto al Activo -que derogó la
"exención establecida en favor de las empresas
"que constituyen el sistema financiero-, en
"correlación con la disposición contenida en el
"artículo 5º, segundo párrafo del propio
"ordenamiento tributario, resulta en la situación
"de que no obstante que a partir del 11 de mayo
"de 1996 las empresas que integran el sistema**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTE DE
REVISION
DEL 12 DE AGOSTO DE 1997

"financiero sí son contribuyentes del impuesto al
"activo, de cualquier modo continúan
"excluyéndose como partidas deducibles para
"efectos de este impuesto las deudas que otros
"contribuyentes contraten con tales empresas o
"con su intermediación, pues es claro que ambas
"disposiciones legales otorgan un tratamiento
"inequitativo a los contribuyentes obligados al
"pago de dicha contribución, al ser innegable que
"estas últimas deudas -las no deducibles-
"también afectan la base del tributo,
"ocasionándose con esto un trato inequitativo al
"permitirse a algunos contribuyentes las
"deducciones de sus deudas y a otros no, por
"situaciones ajenas a ellos y propias de los
"acreedores, máxime si se tiene en cuenta, se
"insiste, que las empresas que constituyen el
"sistema financiero ya son contribuyentes del
"impuesto en cuestión.
"En efecto, la exclusión de las deudas
"contratadas con el sistema financiero o con su
"intermediación ocasiona un trato inequitativo,
"pues al igual que las demás deudas cuya
"deducción sí se encuentra autorizada, aquéllas
"también debieran ser consideradas como
"deducibles con el propósito de disminuir la base
"gravable del impuesto, ya que tanto unas como
"las otras afectan a la utilidad ficta e hipotética
"originada en la tenencia de activos objeto del
"tributo y, por ende, no existe razón alguna que

"justifique la exclusión de las que sean
 "contratadas con el sistema financiero o con su
 "intermediación, sobre todo que, como se señaló
 "con anterioridad, a partir del 11 de mayo de 1996
 "las citadas empresas perdieron el privilegio de
 "la exención que les concedía el artículo 6º,
 "fracción II, de la ley de la materia.

"Por ello, pues, es claro que si, por un lado, se
 "permite la deducción de las deudas contratadas
 "con empresas residentes en el país o con
 "establecimientos permanentes ubicados en
 "México de residentes en el extranjero, y no la de
 "las deudas que hubiesen sido contraídas con el
 "sistema financiero o con su intermediación, no
 "obstante que estas últimas ya son
 "contribuyentes del impuesto al activo, se está
 "haciendo una distinción injustificada entre
 "deudas que siempre afectan la utilidad ficta
 "originada en la tenencia de activos objeto del
 "tributo, por causas que no dependen
 "directamente de la voluntad o de la actividad de
 "los contribuyentes, sino de circunstancias que
 "les son por completo ajenas, como lo es la
 "calidad de sus acreedores.

"Se insiste: en la especie es claro que existe el
 "otorgamiento de un tratamiento desigual a los
 "contribuyentes que se encuentran en un mismo
 "plano de igualdad, pues mientras a unos se les
 "permite la deducción de las deudas que afectan
 "su utilidad ficta e hipotética, a los otros no se



les autoriza a tomar la propia deducción, no obstante que la realidad es que la ganancia mínima presunta de estos últimos también se encuentra afectada con las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación.

Sobre el particular, es importante que Usía tenga en consideración que la inconstitucionalidad que se aduce en el artículo 5º, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo -agravada con la derogación de la fracción II del artículo 6º de la ley- ya ha sido confirmada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P.XLV/95 que a continuación se transcribe:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS

ACTIVO. EL ARTICULO 5º DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo viola el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional al exceptuar de la autorización de deducir las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, a aquellas que hubieren sido contratadas con el sistema financiero o con su intermediación pues estas deudas también afectan la base del tributo, ocasionándose con esto un trato desigual a iguales al permitirse a unos contribuyentes las

"deducciones de sus deudas y a otros no por
 "situaciones ajenas a ellos y propias de los
 "acreedores y sin que pueda considerarse que tal
 "distinción de deudas se justifica por el hecho de
 "que, de permitirse su deducción, no se pagaría
 "el impuesto por ese concepto, ya que dicho
 "adeudo no es el objeto del impuesto y si bien
 "como activo del acreedor constituiría parte de la
 "base para determinar su ganancia mínima
 "presunta objeto del gravamen, no puede
 "considerarse que por el hecho de que el artículo
 "6º de la ley exente del pago del impuesto a las
 "empresas que componen el sistema financiero
 "deba ser el deudor quien cubra el impuesto por
 "la ganancia que tal activo le generó a su
 "acreedor, pues ello significaría hacer recaer el
 "pago del tributo en los contribuyentes por una
 "ganancia ajena que en ellos implica un pasivo,
 "lo que lejos de justificar la excepción de
 "deducción de tal tipo de deudas, corrobora su
 "inconstitucionalidad."

"Semanario Judicial de la Federación y su
 "Gaceta. Novena Epoca. Tomo II. Agosto de 1995.
 "Páginas 63 y 64.

"De acuerdo con lo anterior, desde el punto de
 "vista constitucional lo conducente hubiera sido
 "que al tiempo en que el Congreso de la Unión
 "derogó con efectos a partir del 11 de mayo de
 "1996 la exención contenida en el artículo 6º,
 "fracción II, de la Ley del Impuesto al Activo al



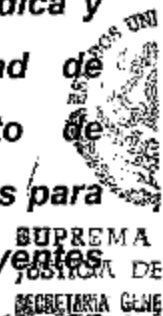
"mismo tiempo hubiera reformado su artículo 5º,
"segundo párrafo a fin de permitir que todos los
"contribuyentes puedan deducir las deudas
"contratadas con el sistema financiero o con su
"intermediación. Al no haberse hecho de esta
"manera, la conclusión es que el impuesto al
"activo a cargo de mis mandantes es
"francamente inconstitucional.

"b) Tratamiento privilegiado a arrendadores:
"Asimismo, la infracción de los artículos 1º, 13 y
"31, fracción IV, de la Constitución Federal se
"actualiza cuando en el artículo 1º, primer
"párrafo, in fine de la Ley del Impuesto al Activo,
"reformado en el decreto publicado en el Diario
"Oficial de la Federación del 10 de mayo de 1996,
"se establece lo siguiente:

"[...] Las personas distintas de las señaladas en
"este párrafo, que otorguen el uso o goce
"temporal de bienes inmuebles que se utilicen en
"la actividad de otro contribuyente de los
"mencionados en este párrafo, están obligadas al
"pago del impuesto por su activo fijo y terrenos
"por los que obtengan ingresos a los que se
"refiere el Capítulo III del Título IV y los artículos
"133, fracción XIII y 148-A, de la Ley del Impuesto
"sobre la Renta."

"[El énfasis es añadido; este tipo de ingresos se
"refieren al arrendamiento y, en general, al
"otorgamiento del uso o goce temporal de bienes
"inmuebles a título oneroso].

"Lo anterior es así, por un lado, en virtud de que
 "gravar cierto tipo de sujetos en consideración al
 "destino que dan a los inmuebles de su
 "propiedad --el arrendamiento y el otorgamiento
 "oneroso del uso o goce de tales bienes a otros
 "contribuyentes--, con exclusión de otras
 "personas que, aunque siendo propietarias de la
 "misma clase de bienes, no los arriendan ni
 "conceden su uso o goce temporal y oneroso a
 "esos otros contribuyentes, representa un trato
 "desigual a sujetos que en realidad se
 "encuentran en una idéntica situación jurídica y
 "de hecho, cual es la mera propiedad de
 "inmueble. Por ello, el establecimiento de
 "diferenciaciones entre unos y otros sujetos para
 "la determinación de los contribuyentes
 "obligados al pago del impuesto al activo, en
 "base a un criterio carente de índices objetivos y
 "de equidad, es decir, tan sólo a partir del destino
 "que se dé a los bienes de su propiedad, sin
 "tomar en cuenta que lo que la lógica y
 "constitucionalmente es relevante es la calidad
 "de propietarios de tales bienes, da lugar a que
 "los ordenamientos legales reclamados sean
 "conculcatorios de las garantías individuales
 "indicadas al inicio de este apartado.
 "Pero aún, acorde con el nuevo texto legal del
 "precepto anteriormente transcrito, resulta que
 "tanto el Capítulo III, del Título IV como los
 "artículos 133, fracción XIII y 148-A de la Ley del





**"Impuesto sobre la Renta, se refieren únicamente
"a los ingresos de las personas físicas que
"correspondan al otorgamiento, a título oneroso,
"del uso o goce temporal de bienes inmuebles a
"otros contribuyentes del impuesto al activo,
"todo lo cual actualiza la transgresión de las
"garantías constitucionales en comento por los
"siguientes motivos:**

**"i) Porque injustificadamente se excluye de este
"supuesto a las personas morales que no son
"contribuyentes del impuesto al activo y que de
"cualquier modo arriendan u otorgan, a Título
"oneroso, el uso o goce temporal de bienes
"inmuebles;**



CORTE DE
LA FACION
DEL DE ACUERDO

**"ii) Porque al hacerse remisión al Capítulo III del
"Título IV y a los artículos 133, fracción XIII y
"148-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en
"forma inexplicable sólo se incluyen actos
"onerosos arrendamiento y en general,
"otorgamiento del uso o goce temporal de
"inmuebles, no así los que sean de carácter
"gratuito como el comodato, por ejemplo; y**

**"iii) Porque en el primer párrafo del artículo
"primero de la ley impugnada de inconstitucional,
"de manera caprichosa se excluye del rango de
"contribuyentes a las personas físicas (y
"morales) que otorguen el uso o goce temporal
"de bienes muebles, no obstante que estos
"también pueden, de inicio, catalogarse como
"activo fijo" para efectos del propio**

"ordenamiento tributario, pero que por la
"veleidosa voluntad del legislador federal no
"quedan comprendidos en el precepto legal de
"que se trata.

"c) Tasa única del 1.8%: Por otra parte, la
"inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al
"Activo resulta de la circunstancia de que en su
"artículo primero se ratifica la aplicación
"uniforme a todos los contribuyentes de una tasa
"única del 1.8%, sin atender a distingo alguno y a
"consideraciones tales como su capacidad
"económica y el volumen que cada uno tenga.

"Respecto de impuestos directos, esto es,
"aquellos que gravan la riqueza de los
"gobernados y sus manifestaciones -como es el
"caso del impuesto al activo-, en estricto apego a
"los preceptos constitucionales mencionados en

"las tarifas de las contribuciones que deben ser
"establecidas de modo variable y progresivo,
"considerando precisamente la capacidad
"contributiva de los particulares, para así gravar
"más a quien tenga un mayor patrimonio y menos
"a quien posea uno menor. Por lo tanto, si el
"impuesto al activo establece una sola tasa del
"1.8% para todos los impuestos normativos y
"para todos los sujetos pasivos, dicho tributo
"resulta palmariamente inequitativo al estatuir un
"tratamiento igualitario a contribuyentes que
"entre sí guardan claros rangos de disparidad,
"como lo es la circunstancia de cada uno de ellos



"tiene un diferente patrimonio, representado por
 "sus activos. Lo conducente desde una
 "perspectiva constitucional, en respeto de las
 "garantías de igualdad y de equidad invocadas al
 "inicio de este apartado, hubiera sido que en la
 "Ley del Impuesto al Activo se estableciese una
 "tarifa progresiva que afectara en menor medida
 "a quienes su capacidad económico-contributiva
 "fuera inferior, que otros cuyo volumen de
 "activos fuese superior.

"En esta tesitura, pues, acreditada la violación de
 "los artículos 1º, 13 y 31, fracción IV, de la Ley
 "Fundamental de la Nación, lo conducente es que
 "la Justicia Federal otorgue a mis poderdantes el
 "amparo y protección constitucionales que
 "reclaman.

COPIA
 21
 EMB. DE AGENCIA

SEGUNDO. Establece el artículo 1º de la
 "Constitución Política del País que: "En los
 "Estados Unidos Mexicanos todo individuo
 "gozará de las garantías que otorga esta
 "Constitución, las cuales no podrán restringirse
 "ni suspenderse, sino en los casos y con las
 "condiciones que ella misma establece". A su
 "vez, el artículo 14 constitucional dispone que:
 "'Nadie podrá ser privado de la vida, de la
 "libertad o de sus propiedades, posesiones o
 "derechos, sino mediante juicio seguido ante los
 "tribunales previamente establecidos, en el que
 "se cumplan las formalidades esenciales del
 "procedimiento y conforme a las leyes expedidas

"con anterioridad al hecho". Por su parte, el
 "artículo 16 de la Carta Magna preceptiva que:
 ""Nadie puede ser molestado en su persona,
 "familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en
 "virtud de mandamiento escrito de la autoridad
 "competente, que funde y motive la causa legal
 "del procedimiento".

"En los términos, la Ley Suprema consagra en
 "favor de los gobernados las garantías de
 "igualdad y seguridad jurídica, mismas que en
 "materia tributaria se encuentran precisadas en
 "el artículo 31, fracción IV, que dispone: "Son
 "obligaciones de los mexicanos: [...] IV
 "Contribuir para los gastos públicos, así de la
 "Federación, como del Distrito Federal o del
 "Estado y Municipio en que residan, de la manera
 "proporcional y equitativa que dispongan las
 "leyes".

"El análisis y exégesis de los preceptos
 "constitucionales transcritos, permite concluir
 "que el establecimiento de gravámenes por parte
 "del Estado se encuentra sometido a tres
 "requisitos básicos, que son:

""i) Que dichas contribuciones se encuentren
 "consignadas en una ley, primordialmente en lo
 "que hace a sus elementos esenciales: objeto,
 "sujetos, base gravable y tasa o tarifa, así como
 "todos aquellos factores relacionados con ellos,
 "que permitan su determinación, para que de
 "esta forma no quede a la sola voluntad de la



"autoridad administrativa su imposición y
"cuantificación.

"ii) Que esos tributos sean proporcionales y
"equitativos, estableciendo tarifas adecuadas a la
"capacidad económica de los obligados, para que
"los mismos no resulten exorbitantes respecto al
"objeto gravado, y dando igual trato a los sujetos
"que se encuentren en idénticas situaciones
"jurídicas y de hecho.

"iii) Que sean destinados a cubrir el gasto
"público del Estado."

"Esto ha sido reconocido por el H. Pleno de la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
"siguiente jurisprudencia:

"IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE
"LOS. De acuerdo con el artículo 31, fracción IV,
"de la Carta Magna, para la validez constitucional
"de un impuesto se requiere la satisfacción de
"tres requisitos fundamentales; primero, que sea
"establecido por ley; segundo, que sea
"proporcional y equitativo, y tercero, que se
"destine al pago de los gastos públicos. Si falta
"alguno de estos tres requisitos, necesariamente
"el impuesto será contrario a lo estatuido por la
"Constitución General [...]."

"Apéndice al Semanario Judicial de la
"Federación 1917-1995. Tomo I. Jurisprudencia
"número 173. Páginas 173 y 174.

"Los alcances de la garantía de legalidad en
"materia tributaria exigen que la imposición de

"contribuciones deba hacerse mediante leyes
 "que formal y materialmente posean las
 "características como tales, es decir, que sean
 "emitidas por el Poder Legislativo y que se
 "encaminen a regular una serie indeterminada e
 "indefinida de situaciones. En esta forma, es el
 "Congreso de la Unión el único que puede
 "establecer cargas fiscales a los particulares, a
 "través de disposiciones generales, abstractas e
 "impersonales.

"El fin que se persigue con la exigencia
 "constitucional de que los tributos y sus
 "elementos esenciales -objeto, sujetos, base
 "gravable y tasa o tarifa- necesariamente se
 "instituyan en una ley expedida por el Congreso

"Federal, mediante mandatos de carácter general,
 "es la de garantizar a los gobernados un máximo

"de seguridad jurídica, proscribiendo cualquier
 "arbitrariedad de los funcionarios que integran la
 "administración pública. Por igualdad de razón,
 "la forma y los términos en que se
 "individualizarán, determinarán o calcularán,
 "según sea el caso, los elementos esenciales de
 "los gravámenes, será a través de ordenamientos
 "legales que tengan las cualidades que se han
 "referido con anterioridad, para evitar a los
 "contribuyentes la incertidumbre, la imprevisión
 "y la arbitrariedad en su cuantificación y en su
 "cobro. Por consiguiente, los elementos
 "fundamentales de las contribuciones y el



"procedimiento que, en un momento, se debe
"aplicar para determinarlas, tienen que
"consignarse en una ley expedida por el Poder
"Legislativo cuyas disposiciones sean generales,
"abstractas e impersonales, pues de no ser así el
"tributo respectivo devendría inconstitucional.
"Esa es la razón por la que el Presidente de la
"República, a través de disposiciones
"reglamentarias o de cualquier otro tipo de
"acuerdos o decretos que contengan
"disposiciones generales, abstractas e
"impersonales, está constitucionalmente
"impedido para modificar alguno de los
"elementos esenciales de los tributos que han
"sido fijados por el Congreso de la Unión, pues
"ello, además, sería violatorio del artículo 28,
"primer párrafo, del Documento Fundamental.

"En concordancia con lo anterior, el H. Pleno de
"la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
"sustentado la tesis jurisprudencial que a
"continuación se transcribe:

"IMPUESTOS, BASES PARA DETERMINAR EL
"MONTO DE LOS. LA LEY DEBE SEÑALARLAS.

"La determinación del monto de los impuestos
"debe ser hecha en la misma ley que los
"establece o, cuando menos, ésta debe fijar las
"bases generales necesarias para que las
"autoridades encargadas de su aplicación
"puedan hacer la fijación del monto del impuesto.
"De no ser así, se infringe el principio de

**"proporcionalidad y equidad en materia
"impositiva que establece el artículo 31, fracción
"IV, de la Constitución Federal."**

**"Apéndice al Semanario Judicial de la
"Federación 1917-1995. Tomo I. Jurisprudencia
"número 161. Página 164.**

**"Es de apuntarse que el señalamiento del objeto
"de los tributos debe hacerse expresamente en la
"ley que los contempla, en tanto que el de los
"sujetos, de la base gravable y de la tarifa pueden
"realizarse en el propio ordenamiento, o bien ser
"determinables por principios ciertos no**

**"expuestos a la sola voluntad de la autoridad que
"los liquidará y cobrará o de alguna otra
"autoridad o persona (incluyendo al titular del
"Poder Ejecutivo), sino exclusivamente a la del
"Congreso de la Unión. Los tres últimos factores**

**"pueden depender de un hecho presente o futuro
"que condicione la delimitación de los sujetos de
"la base o de la tasa, mas nunca al querer de una
"persona o grupo individualizado, pues de lo
"contrario se provocaría un estado de absoluta
"incertidumbre jurídica. Lo anterior significa que
"tales elementos no pueden establecerse según
"el simple criterio de la autoridad administrativa,
"como lo sería un reglamento expedido por el
"Presidente de la República o un diverso acuerdo
"o decreto emitido por el propio funcionario o por
"otra autoridad administrativa, puesto que de
"otra manera se permitiría que fuesen ellos los**



que determinasen quiénes son los sujetos obligados al pago de las contribuciones, cuál la base gravable y cuál la cuota o tarifa aplicable, situación que en nuestro régimen constitucional es completamente inadmisibles, como lo ha reconocido nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia antes transcrita. Se insiste: la creación de los tributos y la indicación de los elementos básicos, así como los procedimientos que deben seguirse, en su caso, para precisarlos, debe hacerse mediante una ley expedida por el Poder Legislativo en uso de sus facultades legislativas y por conducto de disposiciones de carácter general, abstracto e impersonal, sin posibilidad alguna de que el Presidente de la República o cualquier otra autoridad administrativa puedan modificar o anular la aplicación de alguno de dichos elementos.

CORTE DE LA NACION
BO. DE AGUERO

Ahora bien, en la especie resulta que el sistema del impuesto al activo, instituido a través de las reformas a la ley de la materia publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de mayo de 1996, así como de la Regla 262-A de la Resolución Miscelánea para 1996, es violatorio de las garantías individuales invocadas al inicio de este apartado, según se demuestra a continuación:

a) Resolución Miscelánea no puede establecer sujetos pasivos: La regla 262-A, adicionada en

"la primera resolución que modifica a la
"miscelánea fiscal para 1996, publicada en el
"Diario Oficial de la Federación del 17 de junio
"del año en curso, establece lo siguiente:

"Para los efectos de lo establecido por el
"artículo 1º, primer párrafo, de la Ley del
"Impuesto al Activo, las personas distintas a las
"personas físicas que realicen actividades
"empresariales y de las personas morales
"residentes en México, así como a las residentes
"en el extranjero que tengan un establecimiento
"permanente en el país, que otorguen el uso o
"goce temporal de bienes inmuebles que se
"utilicen en la actividad de los mencionados
"contribuyentes, están obligadas a pagar el
"impuesto establecido en dicha ley, únicamente
"por esos bienes." (Énfasis añadido).

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE JUSTICIA

"En tal forma, del análisis comparativo que se
"efectúe del artículo 1º, primer párrafo, de la ley
"impugnada y de la regla 262-A antes transcrita,
"fácilmente podrá apreciarse que en
"contradicción con las garantías individuales en
"cita, las autoridades fiscales responsables han
"ampliado la gama de sujetos pasivos
"originalmente señalados por el Congreso de la
"Unión, conforme a lo siguiente:

"i) Porque en dicha regla se incluyen a las
"personas morales ("personas distintas a las
"personas físicas") como contribuyentes del
"impuesto al activo en los casos en que otorguen



"el uso o goce temporal de inmuebles a otros
"contribuyentes; el artículo 1º, primer párrafo, de
"la ley de la materia únicamente establece como
"sujetos pasivos a las personas físicas;

"ii) Porque la regla 262-A comprende el
"otorgamiento del uso o goce temporal de
"inmuebles en forma gratuita, como el comodato,
"por ejemplo, a diferencia de lo establecido en la
"Ley del Impuesto al Activo, que al remitir al
"Capítulo III del Título IV y a los artículos 133,
"fracción XIII, y 148-A de la Ley del Impuesto
"sobre la Renta, solamente abarca el
"otorgamiento del uso o goce de inmuebles a
"título oneroso (arrendamiento); y



"iii) Porque la propia regla 262-A amplía el
"otorgamiento del uso o goce temporal a toda
"clase de inmuebles, en tanto que el artículo 1º,
"primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo
"únicamente alude a los inmuebles consistentes
"en "activo fijo y terrenos".

"b) Indefinición del objeto gravado: Por otro lado,
"en lo que hace al objeto gravado previsto en la
"Ley del Impuesto al Activo, el señalamiento de
"que el mismo lo constituye el "activo de los
"sujetos obligados al pago del impuesto
"respectivo", es sumamente vago e impreciso, a
"la vez de que carece de una definición legal que
"lo sustente, ya que en el texto de la ley nunca se
"precisa qué debe considerarse como "activo" de
"los sujetos pasivos, ni tal definición es dable

"encontrarla en un diverso ordenamiento legal
 "expedido por el Congreso Federal. En contra no
 "valdría sostener qué concepto del término
 "activo es proporcionado por la técnica contable,
 "toda vez que desde el ángulo estrictamente
 "constitucional las definiciones contables en
 "nada resultan aplicables para la fijación y
 "precisión de uno de los elementos esenciales de
 "las contribuciones, pues ello únicamente puede
 "hacerse mediante leyes emitidas por el Poder
 "Legislativo Federal.

"Al igual, tampoco sería válido argumentar que
 "en sí el objeto gravado del impuesto al activo se
 "infiere de las fracciones II y III del artículo 2º de
 "la ley respectiva, en las que se hace referencia a
 "los activos fijos, gastos y cargos diferidos y a
 "los terrenos, ya que, en la forma acreditada en
 "este apartado, el principio de legalidad que rige
 "en materia tributaria ordena que el objeto
 "gravado por cualquier impuesto tiene que
 "encontrarse específica y plenamente
 "determinado en el ordenamiento legal
 "correspondiente y nunca llegarse a él por medio
 "de inferencias o inducciones, puesto que si este
 "procedimiento es utilizado por las autoridades
 "fiscales federales, la aplicación de inferencias o
 "inducciones no encontraría límite objetivo
 "alguno, en franca afectación de los intereses
 "jurídicos tutelados por las garantías
 "constitucionales anteriormente invocadas.





CORTE DE
LA NACIÓN
AL SE ACOGIDOR

"Del mismo modo, la indefinición e imprecisión
"del objeto gravado por la Ley del Impuesto al
"Activo que origina su inconstitucionalidad, se
"patentiza en el hecho de que, en el caso de los
"activos consistentes en terrenos, la fracción III
"del artículo 2º del cuerpo legal en cita determina
"que, para el cálculo de la base gravable, se
"considerará el monto original de la inversión de
"los mismos. Sin embargo, resulta que, acorde
"con los artículos 41, 42 y 44 de la Ley del
"Impuesto sobre la Renta, los terrenos no se
"incluyen en el concepto de inversiones y, por
"ende, respecto de ellos no es dable computar el
"monto original de la inversión, con la
"consecuencia única y perjudicial para la ahora
"quejosa de que, por ese supuesto —el de la
"fracción III del artículo 2º de la Ley del Impuesto
"al Activo—, el objeto del tributo no está
"legalmente definido ni delimitado objetivamente
"en cuanto a sus alcances.
"Asimismo, la violación al principio de legalidad
"que impera en materia tributaria en lo
"concierne al objeto gravado por el impuesto
"al activo, se reitera en el artículo 4º de la ley que
"lo instituye, al establecer que, "entre otros", se
"consideran activos financieros el efectivo en
"caja, las inversiones en títulos de crédito, las
"cuentas y documentos por cobrar, así como los
"intereses devengados en favor y no cobrados.
"En efecto, cuando el texto legal incluye el

"término "entre otros" para determinar uno de los
 "conceptos que conforman el objeto gravado, lo
 "que en realidad hace es fijar de manera
 "imprecisa e incierta ese elemento esencial del
 "impuesto, al no establecer un límite objetivo a la
 "definición que a los activos financieros
 "corresponde, con la repercusión de que los
 "sujetos pasivos quedan en la incertidumbre
 "sobre la forma y términos en que calcularán
 "esos activos, así como la grave e inevitable
 "contingencia de que las autoridades
 "administrativas sean las que fijen los elementos
 "que deben incluirse en la frase "entre otros",
 "para calcular los activos financieros.

"d) (sic) Indeterminación de la base gravable: Por
 "otro lado, en lo que atañe a la base gravable de
 "la gabela en cuestión, la inconstitucionalidad de
 "la Ley del Impuesto al Activo deviene de la
 "circunstancia de que el procedimiento
 "instaurado para su cálculo en los artículos 2º y
 "3º, es sumamente confuso y requiere de la
 "aplicación de elementos técnicos con que no
 "cuentan los contribuyentes, tales como la
 "aplicación de los factores de actualización a que
 "se hace mención en el artículo 3º del propio
 "cuerpo legal y que resultan de la aplicación de
 "índices fijados arbitrariamente por el Banco de
 "México. Para concluir inexorablemente que el
 "impuesto al activo es violatorio de las garantías
 "individuales mencionadas al inicio del presente



apartado, es suficiente el análisis que se realice
"de los artículos 2° y 3° de la ley de la materia, de
"cuyo estudio se desprende que el procedimiento
"para cuantificar la base gravable de la
"contribución es embrollado e indiscernible,
"originando así que los sujetos pasivos queden
"de plano imposibilitados para determinar ellos
"mismos la base gravable del impuesto al activo.
"Más grave es lo anterior, si se tiene en cuenta
"que para aplicar los factores de actualización en
"los términos de los artículos 2° y 3°, la parte
"quejosa tiene que utilizar índices dados a
"conocer por el Banco de México, respecto de los
"cuales ella no tiene certidumbre sobre su
"objetividad; a más de que, en el caso de que tal
"institución financiera no los proporcione,
"resultará que los contribuyentes no puedan
"calcular la base gravable del tributo de
"referencia.
"Lo anterior es tan patente, que cuando la
"fracción III del artículo 2° de la Ley del Impuesto
"al Activo dispone que, en tratándose de
"terrenos, para el cálculo de la base gravable
"debe tenerse en cuenta el monto original de la
"inversión de cada uno de ellos, de plano
"imposibilita a los sujetos pasivos el cómputo de
"la base gravable de la contribución, ya que,
"como se argumentó con antelación, en los
"términos de los artículos 41, 42 y 44, de la Ley
"del Impuesto sobre la Renta, en el caso de los

"terrenos no hay monto original de la inversión,
"al no ser los mismos uno de los conceptos que
"fiscalmente integran las inversiones de los
"contribuyentes.

"Del mismo modo, la transgresión a las garantías
"constitucionales mencionadas resulta cuando
"en el artículo 3º, cuarto párrafo, de la Ley del
"Impuesto al Activo se determina que los
"inventarios tienen, en primer término, que
"valuarse conforme a los "principios de
"contabilidad generalmente aceptados", pues
"esto significa que en ese aspecto la base
"gravable del impuesto será cuantificada
"tomando en consideración elementos cuyos
"límites no son proporcionados ni fijados por el
"Poder Legislativo Federal, sino simplemente se
"basan en conceptos totalmente abstractos,

"imprecisos y subjetivamente fijados por una
"entidad, persona o grupo de personas no
"identificadas en ese precepto y que, sin género
"de duda, carecen de un carácter
"constitucionalmente reconocido que les permita
"establecer, como si fueran el Congreso de la
"Unión, "principios de contabilidad" cuya
"finalidad es la de calcular la base gravable del
"impuesto al activo. Desde una perspectiva
"puramente constitucional, es inadmisibile que el
"Poder Legislativo delegue en una entidad,
"persona o grupo de personas (por lo demás
"nunca especificadas), la posibilidad de instituir





"principios en materia tributaria para determinar
"algún elemento esencial de las contribuciones,
"en concreto la base gravable de la gabela en
"cuestión.

"En este orden de ideas, siendo evidente que
"tanto la Ley del Impuesto al Activo, en su texto
"aplicable a partir del 11 de mayo del año en
"curso, como la regla 262-A de la Resolución
"Miscelánea para 1996, infringen en perjuicio de
"la ahora peticionante las garantías tuteladas por
"los artículos 1º, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Ley
"Suprema de la Nación, lo procedente es que la
"Justicia de la Unión le conceda el amparo y
"protección constitucionales que solicita.



"TERCERO. La Ley del Impuesto al Activo en su
"texto vigente a partir del 11 de mayo de 1996 es
"violatorio en perjuicio de mis mandantes de las
"garantías de proporcionalidad y equidad de las
"contribuciones que consagra el artículo 31,
"fracción IV, de la Constitución Federal, cuando
"en ella se ratifica la presunción legal, que no
"admite prueba en contrario (presunción juris et
"de jure), que los bienes que integran el activo de
"los contribuyentes siempre producen una
"utilidad ficta e hipotética que, en forma
"complementaria al impuesto sobre la renta, debe
"quedar gravada con la tasa del 1.8% sobre el
"valor de los bienes.

"En efecto, de acuerdo con el precepto
"constitucional antes invocado, la garantía de

"proporcionalidad exige que todos los
 "gravámenes sean fijados de acuerdo con la
 "capacidad económica de los contribuyentes,
 "para las personas que obtengan ingresos
 "elevados tributen en forma cualitativamente
 "superior a los de medianos y reducidos
 "recursos. Por su parte, el principio de equidad
 "se traduce en la igualdad ante la ley tributaria de
 "todos los sujetos pasivos de un mismo tributo,
 "con el propósito de que todos ellos reciban,
 "entre otros aspectos, un tratamiento idéntico en
 "lo concerniente a hipótesis de causación,
 "acumulación de ingresos gravables,
 "deducciones permitidas y plazos de pago,
 "pudiendo únicamente variar las tarifas
 "tributarias aplicables si a través de la variación
 "se consigue que los contribuyentes tributen de
 "acuerdo con su capacidad económica.



"Lo anterior ha sido reconocido por la H.
 "Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
 "jurisprudencia que a continuación se transcribe:
 ""IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
 "DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la
 "Constitución, establece los principios de
 "proporcionalidad y equidad en los tributos. La
 "proporcionalidad radica, medularmente, en que
 "los sujetos pasivos deben contribuir a los
 "gastos públicos en función de su respectiva
 "capacidad económica, debiendo aportar una
 "parte justa y adecuada de sus ingresos,



utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de

"ingresos gravables, deducciones permitidas,
 "plazos de pago, etc., debiendo únicamente
 "variar las tarifas tributarias aplicables de
 "acuerdo con la capacidad económica de cada
 "contribuyente, para respetar el principio de
 "proporcionalidad antes mencionado. La equidad
 "tributaria significa, en consecuencia, que los
 "contribuyentes de un mismo impuesto deben
 "guardar una situación de igualdad frente a la
 "norma jurídica que lo establece y regula."

"Apéndice al Semanario Judicial de la
 "Federación 1917-1995. Tomo I. Jurisprudencia
 "número 170. Páginas 171 y 172.

"Ahora bien, del contenido de los
 "ordenamientos reclamados
 "inconstitucionales se concluye que el impuesto
 "al activo es una contribución complementaria
 "del impuesto sobre la renta. Ello se corrobora
 "con las diferentes disposiciones legales
 "contenidas en dichos cuerpos legales, en
 "específico los artículos 2-A, 6°, 8° y 9°, de la ley
 "de la materia, y también con la exposición de
 "motivos que de la propia ley fue sometida al
 "Congreso de la Unión por el Presidente de la
 "República, que en lo conducente señala lo
 "siguiente:

"La presente iniciativa incluye el
 "establecimiento con vigencia propia de la Ley
 "del Impuesto al Activo Neto de las Empresas, la
 "cual tiene por objeto incorporar un nuevo



"impuesto federal complementario del impuesto
"sobre la renta [...].

"Como ya quedó apuntado, el impuesto es
"complementario al impuesto sobre la renta a las
"actividades empresariales, por lo que se
"propone establecer que una cantidad
"equivalente a este último impuesto cubierto
"como pago provisional o como impuesto al
"ejercicio, se pueda acreditar a los pagos
"provisionales o al impuesto del ejercicio sobre
"activos netos, respectivamente, pudiendo
"también acreditarse contra el nuevo impuesto
"en los tres ejercicios siguientes, con lo cual se
"logra que los contribuyentes del impuesto sobre
"la renta que por este gravamen hubieran pagado
"y paguen una cantidad cuando menos igual al
"nuevo impuesto que resulte a su cargo, no vean
"incrementada su carga impositiva [...].



"El impuesto que se propone de ninguna forma
"implicará una carga administrativa adicional
"para los contribuyentes, ya que los elementos
"necesarios para determinar la base del
"impuesto, se obtienen básicamente de una
"determinación que tiene que hacer para calcular
"el impuesto sobre la renta a su cargo, por lo que
"se evitan molestias innecesarias a los
"particulares o elementos nuevos de control de
"sus operaciones y mucho menos duplicidades o
"aumento de registros en su contabilidad [...].

*"Finalmente, debe decirse que como se ha
"venido comentando, los elementos de
"determinación de la base del nuevo impuesto
"coinciden con elementos que se consideran en
"la determinación del impuesto sobre la renta, se
"considera innecesario repetir conceptos y
"procedimientos precisados y analizados
"ampliamente en la Ley del Impuesto sobre la
"Renta, razón por la cual se hace una remisión
"expresa a los mismos [...]" (Énfasis añadido).*

*"De ello resulta, pues, que el impuesto al activo
"es un tributo que normalmente no produce
"afectaciones económicas a los contribuyentes
"pues si se parte del hecho de que los
"contribuyentes obligados a su pago deben
"obtener una utilidad ficta por la cual tienen que
"cubrir el impuesto sobre la renta, el derecho al
"acreditamiento que de esta última contribución
"se permite en el artículo 9° de la ley impetrada
"de inconstitucional permite afirmar que los
"sujetos pasivos del impuesto al activo no verán,
"en principio, incrementada su carga impositiva,
"teniendo ellos, inclusive, derecho a la
"devolución de las cantidades que hubieran
"pagado por concepto de impuesto al activo,
"cuando el impuesto sobre la renta efectivamente
"pagado sea superior.*

*"Lo anterior pone de manifiesto que la ley
"reclamada parte de la ficción legal de que todos
"los sujetos pasivos, sin excepción alguna,*



obtienen una utilidad por la sola tenencia de
"activos afectos a la realización de actividades
"que a su vez son gravadas en el impuesto sobre
"la renta. Ello permite inferir que el objeto del
"impuesto al activo, conforme al verdadero
"sentido de su establecimiento y su
"estructuración legal, lo constituye la utilidad
"ficta e hipotética originada por la tenencia de
"activos destinados a actividades objeto del
"impuesto sobre la renta, tal como lo ha
"reconocido el H. Pleno de la Suprema Corte de
"Justicia de la Nación en la tesis de
"jurisprudencia número 11/1996, que a
"continuación se transcribe:

LOS VOTANTES
CORTES DE
LA NACION
DEL 26 DE AGOSTO DE 1996

"ACTIVO, IMPUESTO AL. EL ANALISIS DE LA
"CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS
"DE LA LEY QUE LO REGULA EXIGE
"CONSIDERAR QUE SU OBJETO RADICA EN
"LOS ACTIVOS CONCURRENTES A LA
"OBTENCION DE UTILIDADES, COMO SIGNO DE
"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, ASI COMO QUE
"ELLO SE ENCUENTRA VINCULADO A SUS
"FINES FISCALES (CONTRIBUTIVO Y DE
"CONTROL) Y A LOS EXTRAFISCALES DE
"EFICIENCIA EMPRESARIAL. Del contenido de
"los artículos 25, 28 y 31, fracción IV, de la
"Constitución y, específicamente, de los artículos
"1º, 6º, 9º y 10º, de la Ley del Impuesto al Activo
"de las Empresas (Diario Oficial de la Federación
"de 31 de diciembre de 1988) y de la exposición

"de motivos de la iniciativa correspondiente,
"resulta que para examinar la constitucionalidad
"de los preceptos de este cuerpo legal es
"imprescindible considerar que, si bien de la
"literalidad de su artículo 1º, el objeto de la
"contribución radica en el "activo" de las
"empresas, de los demás preceptos que integran
"el sistema del tributo, se infiere que dicho objeto
"se encuentra íntimamente vinculado, a que
"dichos activos sean susceptibles de concurrir a
"la obtención de utilidades, signo de capacidad
"contributiva que el legislador necesariamente
"debe tomar en cuenta como presupuesto
"esencial de toda contribución y que, además
"del fin estrictamente fiscal de recaudar recursos
"para los servicios públicos que exige la fracción
"IV del artículo 31 de la Constitución, persigue la
"finalidad fiscal de contar con un medio eficaz de
"control en el pago que por impuesto sobre la
"renta corresponda a los sujetos pasivos, así
"como la finalidad extrafiscal de estimular la
"eficiencia de los mismos en el desarrollo de sus
"actividades económicas."
"Así, pues, son los activos de los contribuyentes
"los que integran la base del impuesto al activo, y
"es a través de la aplicación de la tasa del 1.8%
"prevista en el primer párrafo del artículo 2º de la
"ley respectiva, como se obtiene el importe de
"este tributo. Esto significa que los activos de
"los sujetos pasivos son los que constituyen la



"medida o el instrumento de que se vale el
"legislador federal para determinar la utilidad
"ficta objeto del impuesto reclamado.

"Consecuentemente, cabe considerar que el
"impuesto al activo es un impuesto personal,
"complementario al impuesto sobre la renta y
"cuyo objeto es gravar la utilidad ficta que
"hipotéticamente se origina por la tenencia de
"activos destinados a actividades que, a su vez,
"son gravadas por la Ley del Impuesto sobre la
"Renta. Por ello, en principio vale concluir que el
"impuesto al activo no incrementa la carga
"impositiva de los contribuyentes, en virtud del
"derecho de acreditamiento previsto en el
"artículo 9° de la ley de la materia.

En este orden de ideas, pues, la transgresión del
"artículo 31, fracción IV, de la Constitución
"Federal se actualiza al momento de que, en
"virtud de la imputación de una utilidad ficta e
"hipotética a cargo de los contribuyentes y del
"derecho de acreditamiento que sólo a algunos
"de ellos beneficia, el impuesto al activo deviene
"de desproporcionado e inequitativo por las
"razones siguientes:

"a) Utilidades fictas e hipotéticas (no reales): Lo
"anterior es así, en primer término, porque la
"imputación de una utilidad ficta a cargo de los
"contribuyentes presupone, de manera
"dogmática y conforme al solo cálculo mental e
"imaginario del legislador federal, que todos los

"contribuyentes, y en especial las empresas, en
 "forma permanente y uniforme deberán percibir
 "una utilidad que para efectos del impuesto
 "sobre la renta sea equivalente al 1.8% del tributo
 "impugnado de inconstitucional, con
 "independencia de si las condiciones
 "prevalecientes en el mercado y en la economía
 "nacional deriven en resultados adversos para
 "ellas. Así, por ejemplo, pudiera resultar que en
 "épocas de una fuerte recesión económica, como
 "la que actualmente atraviesa el país, o bien por
 "una reducción en las actividades de las
 "empresas o por incremento en los costos de
 "producción, los contribuyentes no obtengan
 "utilidades reales afectas al pago del impuesto
 "sobre la renta; empero, debido a una mera
 "ficción legal establecida en la Ley del Impuesto
 "al Activo, esos contribuyentes de cualquier
 "modo estarán obligados a pagar la gabela
 "impetrada de inconstitucional "como si en
 "verdad" hubieran obtenido esas utilidades.
 "Digresionalmente cabe señalar que si existen
 "utilidades reales y efectivas, los contribuyentes
 "tendrán que pagar el impuesto sobre la renta
 "que resulte.
 "Es innegable que al amparo de las garantías
 "individuales invocadas al inicio de este
 "apartado, en tratándose de los llamados
 "impuestos directos (los que gravan la riqueza de
 "los gobernados o sus manifestaciones), si no





149

"existe una utilidad real y efectiva para los
"contribuyentes, entonces no hay una razón
"constitucionalmente válida que soporte el
"establecimiento de contribuciones directas o
"complementarias sobre utilidades determinadas
"de manera ficticia e hipotética por el Congreso
"de la Unión, sea bajo el concepto de impuesto
"sobre la renta o de impuesto al activo. Por
"ende, si el tributo impugnado en el presente
"juicio de garantías grava la utilidad ficta e
"hipotética de los sujetos pasivos, deberá
"entenderse que lo que en realidad se está
"gravando son utilidades inexistentes de los
"contribuyentes, con lo cual se medra de manera
"trascendente y ruinoso su patrimonio, pues
"deberán pagar el impuesto al activo con
"recursos pecuniarios que no provienen de
"actividades por las cuales obtuvieron pérdidas
"para efectos del impuesto sobre la renta.
"Más aún, conforme al sistema del impuesto
"reclamado de inconstitucional, la imputación de
"una utilidad ficta e hipotética a cargo de los
"contribuyentes le impide demostrar la
"inexistencia de una utilidad real por la que sí
"debieran pagar el impuesto sobre la renta, de lo
"que se colige que el legislador federal en ningún
"momento atiende a la capacidad contributiva
"real de los sujetos pasivos, sino solamente a
"una ficta e hipotética, equivalente a un
"porcentaje unilateral y arbitrariamente fijado por

"el Congreso de la Unión, del valor de los
 "activos. En otros términos: al tiempo en que el
 "legislador federal se desentiende por completo
 "de la capacidad contributiva real de los sujetos
 "pasivos y la sustituye por una utilidad ficta, se
 "aparta por completo de lineamientos exigidos
 "por las garantías constitucionales de
 "proporcionalidad de los tributos y del criterio
 "jurisprudencial anteriormente transcrito, puesto
 "que en la especie no se respeta el principio de
 "que el impuesto al activo deba pagarse
 "conforme a la capacidad económica real de los
 "contribuyentes. Peor aún, la
 "inconstitucionalidad aquí aducida se agrava con
 "el hecho de que la imputación de una utilidad
 "ficta a cargo de los sujetos pasivos, tiene como
 "sustento una presunción juris et de jure, que
 "como tal no admite prueba en contrario.
 "En adición a lo antes expuesto, es importante
 "que su señoría tenga en consideración la
 "posibilidad de que esta presunción carezca de
 "un sustento válido que la justifique, pues la
 "influencia de múltiples factores de la realidad
 "económica puede propiciar que esa utilidad ficta
 "sea inexistente y, por consiguiente, que nunca
 "sea efectivamente obtenida por los
 "contribuyentes. De ahí que si los
 "ordenamientos legales en cita no prevén la
 "posibilidad de que los interesados desvirtúen la
 "presunción de que se trata, la violación del

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SUPREMA
 JUSTICIA D
 SECRETARIA GE



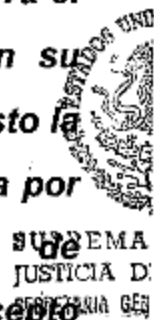
"principio de proporcionalidad consagrado en el
"artículo 31, fracción IV, constitucional se
"configura por el hecho de que la causación del
"impuesto al activo en ningún momento atiende a
"la capacidad tributaria real de los sujetos
"pasivos obligados a su pago, sino a una utilidad
"hipotética cuya imputación a los gobernados no
"admite prueba en contrario.

"Así la presunción juris et de jure que se ratifica
"en el texto de la Ley del Impuesto al Activo
"reformado a partir del 11 de mayo de 1996,
"puede llevar al extremo, carente de una
"justificación constitucionalmente válida, que
"empresas con bienes muebles e inmuebles
"destinados a una actividad empresarial que no
"generen riqueza afecta al pago del impuesto
"sobre la renta, de cualquier manera sufran el
"impacto de un gravamen imaginario ideado por
"el Congreso de la Unión, cuyo único efecto es
"que el mismo no incida sobre una riqueza
"inexistente, sino en última instancia sobre el
"valor de los propios activos, pues serán éstos
"con los contribuyentes deberán afrontar el pago
"del impuesto reclamado inconstitucional. En
"otros términos, ante una ganancia presunta
"generada por la sola tenencia de activos, sin
"consideración alguna sobre la existencia de
"ganancias reales por parte de los
"contribuyentes, el resultado final será que ellos
"tendrán que afectar sus propios activos



"(vendiéndolos, dándolos en garantía, etcétera)
 "para allegarse recursos económicos que les
 "permitan librarse de toda responsabilidad en el
 "pago del impuesto al activo. Al parecer de las
 "ahora quejas, esta situación es de plano
 "inadmisible a la luz de las garantías
 "constitucionales invocadas al inicio de este
 "apartado.

"b) Sistema de acreditamiento: Por otra parte, la
 "inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al
 "Activo se configura en razón de la
 "desproporcionalidad e inequidad que conlleva el
 "derecho de acreditamiento establecido en su
 "artículo 9°, pues siendo el objeto del impuesto la
 "utilidad ficta que hipotéticamente se origina por
 "la tenencia de activos, el sistema de
 "acreditamiento previsto en dicho precepto
 "origina que contribuyentes que efectivamente
 "tengan ese tipo de utilidad no paguen el
 "impuesto al activo, mientras que otros
 "contribuyentes que en realidad no tengan
 "utilidad alguna sí tendrán que pagarlo, de donde
 "se sigue que los sujetos pasivos que tengan
 "menor capacidad contributiva soportarán la
 "carga impositiva, en tanto que los que tengan
 "una mayor capacidad no lo harán, todo lo cual
 "actualiza la desproporcionalidad e inequidad del
 "impuesto al activo, al no atender a la capacidad
 "tributaria de los contribuyentes y al conceder un
 "trato igual a los desiguales y desigual a los





"iguales. En contra de esta afirmación no valdría
"sostener que ese derecho de acreditamiento se
"ha establecido en forma general en favor de
"todos los contribuyentes, puesto que, al final de
"cuentas, su aprovechamiento no es general, ya
"que no todos ellos podrán hacer uso del mismo,
"sino sólo los sujetos pasivos que declaren
"utilidades en el impuesto sobre la renta y no los
"que no las reporten.

"La anterior afirmación ha sido respaldada por la
"H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
"siguiente tesis: "ACTIVO. EL ARTICULO 9º DE
"LA LEY QUE REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA
"LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y
"EQUIDAD TRIBUTARIA (REFORMAS Y
"ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO
"OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 28 DE
"DICIEMBRE DE 1989). De conformidad con lo
"establecido en el artículo 9º de la Ley del
"Impuesto al Activo de las Empresas los
"contribuyentes podrán acreditar contra el
"impuesto del ejercicio una cantidad equivalente
"al impuesto sobre la renta efectivamente
"pagado, lo que significa que si un contribuyente
"tiene ingresos o utilidades podrán realizar tal
"acreditamiento e, inclusive, si los mismos llegan
"a la ganancia mínima presunta objeto del
"impuesto al activo, no verán incrementada su
"carga impositiva, mientras que aquéllos que no
"tengan utilidades o resientan pérdidas

COPIA DE
EL ACUERDO

"soportarán la carga impositiva, pues no tendrán
 "cantidad alguna que acreditar y la ley no prevé
 "la posibilidad de desvirtuar la presunción del
 "tributo. De lo anterior se infiere que el precepto
 "egal citado viola los principios de
 "proporcionalidad y equidad tributaria
 "consagrados en el artículo 31, fracción IV,
 "constitucional pues, consistiendo el primero de
 "ellos, en que los causantes deben contribuir al
 "gasto público en función de su respectiva
 "capacidad contributiva, el precepto legal citado
 "hace recaer el pago del impuesto en quienes no
 "tiene tal capacidad o la tienen en menor medida
 "y libera de la carga impositiva a quienes tienen
 "mayor capacidad tributaria, lo que da como
 "consecuencia también la transgresión del
 "principio de equidad que exige trato igual a los
 "iguales y desigual a los desiguales, pues, de esa
 "forma, se da trato igual a los iguales y desigual
 "a los desiguales. "

"Semanario Judicial de la Federación y su
 "Gaceta. Novena Epoca. Tomo II. Agosto de 1995.
 "Tesis P.XLVI/95. Página 64.

"c) Tasa única es desproporcionada: Al tenor de
 "la fracción IV del artículo 31 de la Constitución
 "Federal, la imposición de contribuciones a cargo
 "de los particulares queda sujeta al requisito de
 "que las mismas sean proporcionales y
 "equitativas, con lo cual se propende a que haya
 "una conveniente progresividad en la cuantía de



"los tributos respecto de la riqueza de los sujetos
"obligados, así como una necesaria mesuración
"entre el objeto y la base de los gravámenes,
"relación que precisamente debe guardar un
"justo equilibrio para evitar que los mismos sean
"exorbitantes y ruinosos. En estos términos, se
"respetan dos de los aspectos de la garantía de
"proporcionalidad consagrada por la fracción IV
"del artículo 31 de la Ley Fundamental: uno, que
"no se arruine la capacidad económica y
"contributiva de los gobernados; y dos, que
"exista una razonable tarifa sobre la base
"gravable.

"Sobre el particular, el H. Pleno de la Suprema
"Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado la
"jurisprudencia que a continuación se transcribe:

RTE DE
1. 1023
ACUERDO

"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS.
"NATURALEZA. El impuesto requiere ser
"proporcional y esa proporción, para ser justa, se
"fundará, en primer término, en el ingreso del
"contribuyente, punto de partida para aquilatar
"su capacidad contributiva y poder significarse
"que si aquél obtiene mayores ingresos, más alto
"tendrá que ser el impuesto que llegará a
"satisfacerse, correspondiendo al legislador y a
"su obra inmediata, esto es, la ley, fijar esa
"proporción [...]. Estos "criterios de
"progresividad" son con justeza la
"proporcionalidad de que trata la fracción IV del
"artículo 31 de la Constitución de México, si se

*"tiene en cuenta que la proporción impositiva es
"en relación inmediata con la capacidad
"contributiva del obligado a satisfacer el tributo y
"a las necesidades requeridas para solventar los
"gastos públicos de la Nación, de modo que si
"mayor es la capacidad contributiva, mayor será
"también la cuota a cubrir, que en su
"progresividad encuentra su justa realización
"tributaria y su adecuada proporción." (Énfasis
"añadido).*

*"Apéndice al Semanario Judicial de la
"Federación 1917-1995. Tomo I. Jurisprudencia
"número 387. Páginas 358 a 361.*

*"En este sentido, pues, para que los tributos
"respeten el principio de proporcionalidad
"invocado, es requisito constitucional ineludible
"el que su pago se realice en razón de la
"aplicación de tarifas diferentes y progresivas*

*"En materia de impuestos directos, esto es, de
"aquellos que gravan la riqueza y sus
"manifestaciones, lo anterior encuentra su
"máxima representación, puesto que será a
"través de tasas escalonadas y progresivas como
"en mejor forma se alcanzará la justicia tributaria,
"para que así participen en mayor medida
"quienes tengan un patrimonio superior que otro
"con uno inferior.*

*"Sin embargo, contrariando la garantía de
"proporcionalidad de la fracción IV del artículo 31
"de la Constitución Federal, las reformas a la Ley*



"del Impuesto al Activo publicadas en el Diario
"Oficial de la Federación de fecha 10 de mayo de
"1996, ratifican la aplicación en perjuicio de mi
"mandante de una tasa única del 1.8%, lo cual
"conlleva a que los sujetos obligados tengan que
"enterar ese impuesto de manera
"desproporcionada e injusta, pues en forma
"cualitativa todos ellos deben pagar una misma
"cantidad del impuesto al activo, con
"independencia de la mayor o menor riqueza que
"se encuentre representada con sus activos. De
"conformidad con la jurisprudencia transcrita
"con anterioridad en el presente apartado, en el
"supuesto de los impuestos directos, como es el
"debatido en este juicio de garantías, el
"establecimiento de tarifas fijas es violatorio del
"artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.

CORTE DE
EJECUCION
FEDERAL DE ACUERDO

Por todo lo expuesto a lo largo del presente
"apartado, es incuestionable que el sistema
"impositivo ratificado en la Ley del Impuesto al
"Activo a través de las reformas publicadas en el
"Diario Oficial de la Federación del 10 de mayo de
"1996 es violatorio del artículo 31, fracción IV,
"constitucional, todo lo cual hace que la Justicia
"de la Unión deba conceder a las ahora quejas
"el amparo y protección constitucionales que
"reclaman.

"CUARTO. Del mismo modo, el artículo 1º de la
"Ley del Impuesto al Activo en su texto vigente a
"partir del 11 de mayo de 1996 es violatorio en

"perjuicio de mis representadas de las garantías
 "de legalidad y seguridad jurídica tuteladas en
 "los artículos 16 y 31, fracción IV, de la
 "Constitución Política del País, al haberse
 "emitido por el Congreso Federal en uso de una
 "facultad que no le corresponde, puesto que la
 "posibilidad de instituir el tributo cuya
 "inconstitucionalidad se reclama compete
 "exclusivamente al Poder Legislativo de las
 "entidades federativas, para su aprovechamiento
 "total por parte de las haciendas municipales,
 "acorde con el artículo 124 de la Carta Magna,
 "relacionado con los numerales 73, fracciones VII
 "y XXIX, 115, fracción IV, apartado a), 117,
 "fracciones IV a VII, y 118, de la propia Ley
 "Fundamental.

SUPREM.
 JUSTICIA
 SECRETARIA

"La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación,
 "antes de la reforma al artículo 115
 "constitucional, de 3 de febrero de 1983,
 "determinó en la jurisprudencia número 172,
 "intitulada: "IMPUESTOS. SISTEMA
 "CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA MATERIA
 "FISCAL. COMPETENCIA ENTRE LA
 "FEDERACION Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
 "PARA DECRETARLOS" (Apéndice al Semanario
 "Judicial de la Federación 1917-1995, tomo I,
 "página 173), que la competencia entre la
 "Federación y los Estados para imponer
 "contribuciones, se delimita a través de un



sistema complejo, cuyas premisas fundamentales son las siguientes:

"a) Concurrencia contributiva de la Federación y las entidades federativas en la mayoría de las fuentes de ingresos (artículos 73, fracción VII, y 124 constitucionales).

"b) Limitaciones a la facultad impositiva de los Estados, mediante la reserva expresa y concreta de determinadas materias a la Federación (artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Federal).

"c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de las entidades federativas (artículos 117, fracciones IV a VII, y 118 constitucionales).

"Sin embargo, a la luz del actual texto del artículo 115 de la Constitución de la República, dicha jurisprudencia es insuficiente, toda vez que se requiere que las premisas fijadas en ellas sean ampliadas, para que las mismas no sólo se determinen desde la particular perspectiva de la Federación como en ella se hace, sino que también se resuelva el problema de la atribución de competencia impositiva entre las esferas de gobierno involucradas -Federación y entidades federativas- desde el ángulo de los Estados, e incluso desde el de los municipios, que también necesitan de una hacienda (patrimonio) para cumplir las funciones públicas que les conciernen.

1. CUESTION DE
DE INICIACION
ANTE EL JUEZ

"Por lo tanto, en la actualidad es preciso
 "establecer como premisa fundamental
 "correlativa a la que nuestro Máximo Tribunal
 "indicó para limitar la competencia de los
 "Estados, a partir de lo dispuesto en el artículo
 "124 de la Constitución General de la República,
 "que existen limitaciones a la facultad impositiva
 "de la Federación, porque hay reserva expresa y
 "concreta de determinadas materias a las
 "entidades federativas, tanto para conformar las
 "propias haciendas estatales como las
 "municipales. Debe destacarse que la intención
 "del Poder Revisor de la Constitución, al llevar a
 "efecto la reforma al artículo 115 de la Norma
 "Fundamental del 3 de febrero de 1983, fue
 "precisamente la de establecer una redistribución
 "de competencias en materia hacendaria entre la
 "Federación, Estados y Municipios.



"En efecto, el artículo 115 de la Constitución
 "Política del País, en su texto vigente a partir de
 "1983, en su parte conducente prescribe que:

"Los Estados adoptarán, para su régimen
 "interior, la forma de gobierno republicano,
 "representativo, popular, teniendo como base de
 "su división territorial y de su organización
 "política y administrativa el municipio libre,
 "conforme a las bases siguientes: [...].

"IV. Los Municipios administrarán libremente su
 "hacienda, la cual se formará de los rendimientos
 "de los bienes que les pertenezcan, así como de



"las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles."

"(Enfasis añadido).

"En la forma expresada en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a diversos preceptos constitucionales, entre ellas al artículo 115, remitida por el Presidente de la República al Congreso Constituyente Permanente, la normatividad introducida en lo referente a las haciendas municipales, tiene como finalidad que la autonomía municipal logre su realización plena a través de una segura percepción de ingresos suficientes para consolidar su patrimonio, entre los cuales se encuentran los de naturaleza tributaria, estableciendo, entre otras cosas, una nueva distribución de competencias en materia fiscal entre la Federación, Estados y Municipios.

"Tales objetivos se desprenden, con meridiana claridad, de la exposición de motivos arriba aludida, la cual en lo conducente, establece:

"La descentralización exige un proceso decidido y profundo, aunque gradual, ordenado y eficaz



"de la revisión de competencias constitucionales
 "entre Federación, Estados y Municipios;
 "proceso que deberá analizar las facultades y
 "atribuciones actuales de las autoridades
 "federales, y de las autoridades locales y
 "municipales, para determinar cuáles pueden
 "redistribuirse para un mejor equilibrio entre las
 "tres instancias del gobierno constitucional.

"Estamos convencidos que la redistribución de
 "competencias que habremos de volver al
 "municipio todas aquellas atribuciones
 "relacionadas con la función primordial de esta
 "institución [...].

"Dentro de estos grandes lineamientos, como
 "consecuencia de los estudios realizados y como
 "corolario de la intensa consulta popular
 "efectuada, consideramos como medida
 "fundamental para robustecer el municipio,
 "piedra angular de nuestra vida republicana y
 "federal, hacer algunos cambios al artículo 115
 "de la Constitución, tendientes a vigorizar su
 " hacienda, su autonomía política y, en lo general,
 "aquellas facultades que de una u otra manera,
 "paulatina pero constantemente habían venido
 "siendo absorbidas por Estados y la Federación
 "[...].

"Por ende, en este renglón, fundamental para la
 "subsistencia y desarrollo de los municipios,
 "consignamos en la fracción IV de la Iniciativa, en
 "primer término, como concepto originario del



"artículo 115, la libre administración de su
"hacienda por parte de los municipios; pero, por
"otra parte, en una fórmula de descentralización,
"de correcta redistribución de competencia en
"materia fiscal, estimamos conveniente asignar a
"las comunidades municipales los impuestos o
"contribuciones, inclusive con tasas adicionales,
"que establezcan los Estados sobre la propiedad
"inmobiliaria, así como de su fraccionamiento,
"división, consolidación, traslado y mejora y las
"que tengan por base el cambio de valor de los
"inmuebles [...]"

"Derechos del Pueblo Mexicano. Cámara de
"Diputados del Congreso de la Unión, tomo XI,
"México 1985, páginas 282-286.

CORTE EN
DE LA UNIÓN.

ALCALDE DE GUAYMAS

"En tal sentido, si el artículo 115 constitucional
"garantiza a los municipios que sólo éstos
"perciban las contribuciones previstas en el
"inciso a) de su fracción IV, esa garantía es
"oponible tanto a la Federación como a las
"entidades federativas, sin excepción alguna,
"aunque las últimas con la variante de que son
"ellas las que cuentan con la facultad legislativa
"exclusiva para imponerlas. De este modo, se
"asegura a los Municipios que la Federación y los
"Estados nunca podrán establecer en su propio
"favor los tributos de que se trata, porque de
"diversa manera se afectaría substancialmente a
"las haciendas municipales, lo que precisamente
"procura evitar el artículo 115 de la Carta Magna.

**"Es tan claro el sentido de este dispositivo, que
"en el penúltimo párrafo de su fracción IV se
"consigna que:**

**"Las leyes federales no limitarán la facultad de
"los Estados para establecer las contribuciones a
"que se refieren los incisos a) y c), no
"establecerán exenciones o subsidios respecto
"de las mencionadas contribuciones, en favor de
"personas físicas o morales, ni de instituciones
"oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio
"público de la Federación, de los Estados o de
"los Municipios estarán exentos de dichas
"contribuciones."**

**"Así, la conclusión única que se deriva de la
"interpretación lógica y sistemática de los
"preceptos constitucionales citados, la cual
"como premisa fundamental para delimitar la
"competencia tributaria en el sistema federal
"mexicano, es que las contribuciones
"contempladas en el inciso a) de la fracción IV
"del numeral 115 de la Constitución Federal, y en
"específico las que recaigan sobre la propiedad
"inmobiliaria, exclusivamente pueden ser
"establecidas por las legislaturas de las
"entidades federativas, pero siempre en favor de
"los Municipios. De ahí precisamente que el
"impuesto predial sea un tributo de tipo estatal y
"no federal.**

**"Frente a ello, es incuestionable que la
"Federación tiene limitadas sus facultades**





"impositivas para establecer contribuciones
"sobre los conceptos enlistados en el dispositivo
"indicado, porque existe reserva expresa y
"concreta de esas materias a los Estados, en
"garantía de la seguridad y consolidación de las
"haciendas municipales, y por consiguiente,
"cualesquiera de esas gabelas que sea instituida
"por la Federación, será palmariamente
"inconstitucional, al provenir de un órgano
"incompetente para esos efectos.

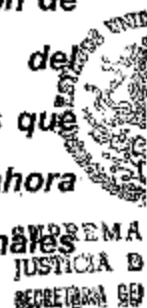
"Ahora bien, en los términos de los
"ordenamientos legales reclamados de
"inconstitucionales, el impuesto al activo tiene
"como objeto gravado precisamente el "activo"
"de los sujetos pasivos. De conformidad con el
"artículo 2° de la ley que instituye dicho tributo,
"se infiere que entre los últimos se comprenden
"los terrenos y los activos fijos, y a su vez, entre
"los últimos se incluyen a las construcciones, en
"términos de los numerales 42, segundo párrafo,
"y 44, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la
"Renta, a la que remite el artículo 14 de la Ley del
"Impuesto al Activo.

"Para ello, atento al artículo 750, fracción I, del
"Código Civil para el Distrito Federal, de
"aplicación en la especie por disposición de los
"numerales 1° del propio ordenamiento y 5° del
"Código Fiscal de la Federación, como los
"terrenos y las construcciones son bienes
"inmuebles y su adquisición constituye la



**"propiedad inmobiliaria de los sujetos pasivos,
"en el presente caso el Poder Legislativo Federal
"es incompetente para establecer sobre tales
"inmuebles el tributo cuya inconstitucionalidad
"se invoca, al ser éste de la exclusiva atribución
"impositiva de los Estados y siempre en
"provecho de los municipios, acorde con el
"artículo 115, fracción IV, inciso a), de la
"Constitución General de la República, según ha
"quedado argumentado y acreditado a lo largo
"del presente apartado.**

**"En esta tesitura, siendo evidente la violación de
"los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, del
"Documento Fundamental, lo conducente es que
"la Justicia de la Unión conceda a la ahora
"quejosa el amparo y protección constitucionales
"que reclama."**



CUARTO. Por auto del doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda de garantías, ordenó su registro con el número 57/97 y, seguido el juicio por sus trámites legales, dictó sentencia, que autorizó el ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, la cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes:

**"PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio
"de garantías, respecto de los actos reclamados
"al Secretario de Hacienda y Crédito Público,**



**"Subsecretario de Ingresos, Administrador
"General de Recaudación y Administrador Local
"de Recaudación del Oriente del Distrito Federal
"en términos del considerando segundo y tercero
"de esta resolución.**

**"SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y
"PROTEGE a BROKER DISTRIBUCION, S. A. de
"C. V., en contra de los actos reclamados al
"Congreso de la Unión, Presidente de la
"República, Secretario de Gobernación y Director
"del Diario Oficial de la Federación, en términos
"del considerando cuarto de la presente
"sentencia."**

QUINTO. Inconformes con la sentencia anterior, la parte
quejosas y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en
representación del Presidente de la República, y en su
ausencia el Procurador Fiscal de la Federación, interpusieron
sendos recursos de revisión mediante escrito que presentaron
ante el Juez de Distrito del conocimiento, el que los remitió
junto con el expediente de amparo relativo a esta Suprema
Corte de Justicia.

Por auto del dieciséis de mayo de mil novecientos
noventa y siete, el Presidente de este Alto Tribunal admitió los
recursos de revisión y ordenó dar al Procurador General de la
República la intervención que a su representación corresponde.

El Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló el pedimento número II/155/97, en el sentido de que se confirme la sentencia recurrida.

Mediante proveído del trece de junio de mil novecientos noventa y siete, el Presidente de este Supremo Tribunal ordenó turnar los autos al Ministro Juan Díaz Romero para que formulara el proyecto de resolución correspondiente; por proveído del día veinticuatro siguiente, tuvo a la parte quejosa adhiriéndose a la revisión interpuesta a nombre del Titular del Ejecutivo Federal y ordenó reintegrar el asunto al Ministro nombrado como ponente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de los mencionados recursos de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que se interpusieron en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se reclamaron, entre otros actos, la Ley del Impuesto al Activo expedida por el Congreso de la Unión y en esta instancia subsiste el problema de constitucionalidad planteado.



Suprema
Corte de
Justicia de
la Nación
Secretaría de



Cabe destacar que en la demanda de garantías también se reclama la Resolución que establece para mil novecientos noventa y seis reglas de carácter general aplicables a los impuesto y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, actualmente conocida como "Resolución Miscelánea Fiscal para 1996", así como la primera resolución que modifica esa miscelánea, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, del veintinueve de marzo y diecisiete de junio de mil novecientos noventa y seis, concretamente su regla 262-A, cuyo conocimiento en grado de revisión es competencia originaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno; sin embargo en virtud de que esa regla contiene una disposición complementaria de lo dispuesto por el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en relación con la categoría de contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes, que es materia de esta revisión en términos de lo expuesto en el párrafo precedente, con el propósito de observar en su integridad la cuestión jurídica debatida y observar la garantía de celeridad en el proceso tutelada por el artículo 17 de la Constitución General de la República, este Tribunal Pleno estima conveniente ejercitar la facultad de atracción para conocer de los mencionados actos, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 84, fracción III, de la Ley de Amparo.

SEGUNDO. La sentencia recurrida se sustentó en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO. Son ciertos los actos que se reclaman del Congreso de la Unión, Presidente

"de la República, Secretario de Gobernación y
 "Director del Diario Oficial de la Federación
 "consistentes, respectivamente, en la expedición,
 "promulgación, refrendo y publicación, de la Ley
 "del Impuesto al Activo publicada en el Diario
 "Oficial de la Federación del treinta y uno de
 "diciembre de mil novecientos noventa y ocho,
 "así como de sus diversas reformas.

"Pese a que el Subsecretario de Ingresos de la
 "Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al
 "rendir su informe con justificación que obra a
 "fojas setenta y seis de autos, niega los actos
 "que se le atribuyen, deben tenerse por ciertos
 "los actos que se le reclaman consistentes en la
 "expedición de la Resolución que establece para
 "mil novecientos noventa y seis Reglas de
 "carácter general aplicables a los Impuestos
 "Federales excepto a los relacionados con el
 "Comercio Exterior (Resolución Miscelánea
 "Fiscal para mil novecientos noventa y seis), así
 "como la Primera Resolución que modifica a la
 "Miscelánea Fiscal para mil novecientos noventa
 "y seis, publicadas en el Diario Oficial de la
 "Federación, los días veintinueve de marzo y
 "diecisiete de junio de mil novecientos noventa y
 "seis, por cuanto a lo establecido en su regla
 "262-A, toda vez que de la lectura de tales
 "resoluciones se advierte que fue dicha autoridad
 "quien los emitió en ausencia del Secretario de
 "Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario





"del Ramo, y de conformidad con el artículo 11
"de la Ley de Amparo, es autoridad responsable
"la que materialmente dicta, promulga, expide,
"publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley
"o el acto reclamado, por lo que si fue dicha
"autoridad quien materialmente expidió y
"suscribió dichos ordenamientos, a ella
"corresponde el carácter de responsable aun
"cuando lo haya hecho en ausencia del titular."

"Es aplicable al caso, por analogía, la tesis
"jurisprudencial número noventa y nueve, visible
"a fojas setenta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al
"Semanario Judicial de la Federación de mil
"novecientos noventa y cinco, rubro:
"AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE
"CARACTER LA QUE EMITE EL ACTO
"RECLAMADO NO SU SUPERIOR
"JERARQUICO."

"Asimismo son ciertos los actos que se
"reclaman del Secretario de Gobernación y
"Director del Diario Oficial de la Federación,
"consistentes en la publicación de la resolución
"anteriormente descrita.

"SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados
"al Secretario de Hacienda y Crédito Público,
"consistentes en el refrendo otorgado a la Ley
"del Impuesto al Activo así como sus reformas,
"toda vez que al rendir su informe con
"justificación expresamente los niega y de la
"lectura de los propios ordenamientos se



"advierte que dicha autoridad no tuvo
"intervención en su elaboración.

"Pese a que al rendir su informe con justificación
"el Secretario aludido, los acepta, no pueden
"tenerse por ciertos los actos que se les
"reclaman, consistentes en la expedición de la
"Resolución que establece para mil novecientos
"noventa y seis reglas de carácter general
"aplicables a los impuestos y derechos federales,
"excepto a los relacionados con el comercio
"exterior (Resolución Miscelánea Fiscal para mil
"novecientos noventa y seis), así como la
"Primera Resolución que modifica a la
"Miscelánea Fiscal para mil novecientos noventa
"y seis, publicadas en el Diario Oficial de la
"Federación los días veintinueve de marzo y
"diecisiete de junio de mil novecientos noventa y
"seis, respectivamente, por cuanto a lo
"establecido en su Regla 262-A, toda vez que de
"la lectura de tales ordenamientos se advierte
"que fueron expedidos por diversa autoridad.

"Por lo que procede sobreseer al respecto con
"fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la
"Ley de Amparo.

"No son ciertos los actos que se reclaman del
"Secretario de Hacienda y Crédito Público,
"Administrador General de Recaudación y
"Administrador Local de Recaudación del Oriente
"del Distrito Federal, consistentes en la
"recepción de pagos provisionales del impuesto





"al activo correspondientes a los meses de mayo
"a diciembre de mil novecientos noventa y seis,
"pues además de que dichas autoridades
"expresamente lo niegan al rendir sus informes
"justificados que obran a fojas ochenta y siete,
"setenta y ocho y setenta y cuatro de autos, de
"las documentales que obran a fojas veintisiete
"se advierte que la propia quejosa presentó su
"declaración del referido pago provisional el
"diecisiete de enero de mil novecientos noventa y
"siete a través de una institución bancaria
"(Bancomer, S. A.).



"TERCERO. Previo al estudio del fondo del
"amparo, procede analizar las causales de
"improcedencia alegadas por las partes o que
"este juzgado advierta de oficio, de conformidad
"con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de
"Amparo.

"Independientemente de las causales de
"improcedencia esgrimidas por las responsables
"este juzgado advierte que respecto del artículo
"5º de la Ley del Impuesto al Activo y de la
"Resolución que establece para mil novecientos
"noventa y seis, Reglas de carácter general
"aplicable a los Impuestos y Derechos Federales,
"excepto a los relacionados con el Comercio
"Exterior (Resolución Miscelánea Fiscal para mil
"novecientos noventa y seis), así como la
"Primera Resolución que modifica a la
"Miscelánea Fiscal para mil novecientos noventa

"y seis, por cuanto hace a la adición en su Regla
"262-A, se surte la causal de improcedencia
"prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley
"de Amparo, por lo siguiente:

"La referida Regla 262-A, establece: "Regla 262-
"A. Para los efectos de lo establecido por el
"artículo 1º, primer párrafo de la Ley del Impuesto
"al Activo, las personas distintas a las personas
"físicas que realicen actividades empresariales y
"de las personas morales residentes en México,
"así como a las residentes en el extranjero que
"tengan un establecimiento permanente en el
"país, que otorguen el uso o goce temporal de
"bienes inmuebles que se utilicen en la actividad
"de los mencionados contribuyentes, están
"obligados a pagar el impuesto establecido en
"dicha ley, únicamente por esos bienes.



"Como puede verse, dicha disposición está
"dirigida a las personas físicas o morales que
"otorguen el uso o goce temporal de inmuebles
"que se utilicen en actividad empresarial del
"arrendatario. Asimismo, y por lo que hace al
"artículo 5º de la ley combatida que permite la
"deducción de determinado tipo de deudas y que
"excluye las contratadas con empresas que
"pertenezcan al sistema financiero o con su
"intermediación, la quejosa no acredita que haya
"contratado este tipo de deudas de las que no se
"permite su deducción. Luego entonces, no se
"ubica dentro de los supuestos que regula la



"adición a la Regla combatida y el artículo 5º de
"la Ley del Impuesto al Activo y, por tanto,
"procede sobreseer al respecto, con fundamento
"en el artículo 74, fracción III, al actualizarse la
"causal prevista en el artículo 73, fracción V,
"ambos de la Ley de Amparo.

"Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial
"número ciento setenta y ocho, visible a fojas
"ciento setenta y ocho, Tomo I, del Apéndice al
"Semanario Judicial de la Federación de mil
"novecientos diecisiete a mil novecientos
"noventa y cinco, rubro: "INTERES JURIDICO.
"EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA
"LEY SIN HABERLO ACREDITADO. VULNERA
"LOS PRINCIPIOS DE INSTANCIA DE PARTE
"AGRAVIADA Y DE RELATIVIDAD DE LOS
"EFECTOS DE LA SENTENCIA."



"CUARTO. Son fundados y suficientes para
"conceder el amparo y protección de la Justicia
"Federal solicitados, los argumentos aducidos
"por la parte quejosa, en su segundo y tercer
"conceptos de violación, en el sentido de que el
"artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo, viola
"en su perjuicio el principio de proporcionalidad
"tributario contenido en el artículo 31, fracción IV,
"de la Constitución Federal.

"Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte
"de Justicia de la Nación ha sustentado, en forma
"reiterada, el criterio de que por proporcionalidad
"tributaria debe entenderse que el gravamen se

"fije de acuerdo con la capacidad económica de
 "cada sujeto pasivo, para que las personas que
 "obtienen ingresos elevados tributen en forma
 "cualitativamente superior a los de medianos y
 "reducidos recursos. Por su parte, el principio de
 "equidad significa la igualdad ante la ley
 "tributaria de todos los sujetos pasivos de un
 "mismo tributo, los que en tal condición deben
 "recibir un tratamiento idéntico en lo
 "concerniente a hipótesis de causación,
 "acumulación de ingresos gravables,
 "deducciones permitidas, plazos de pago,
 "pudiendo únicamente variar las tarifas
 "tributarias aplicables, si a través de tal variación
 "se consigue que los contribuyentes tributen de
 "acuerdo con su capacidad económica, para
 "respetar el principio de proporcionalidad.
 "Asimismo, es necesario señalar que el impuesto
 "al activo grava la ganancia mínima presunta
 "originada en la tenencia de activos destinados a
 "actividades empresariales. Luego entonces, al
 "ser ésta la naturaleza del impuesto combatido,
 "debe estimarse que se quebranta el principio de
 "proporcionalidad tributaria consagrado en el
 "artículo 31, fracción IV, de la Constitución
 "Federal, en razón de que partiendo de esa
 "ganancia mínima, no se prevé la posibilidad de
 "desvirtuar esta presunción de rendimiento
 "mínimo, lo que da lugar a que el tributo no sea
 "acorde con la capacidad contributiva de los

SUPREMA
 JUSTICIA I
 SECRETARIA GI



"sujetos pasivos del impuesto, al encontrarse
"obligados a cubrir el impuesto quienes no hayan
"tenido esa ganancia mínima que se presume.

"Lo anterior es así, ya que el artículo 9º del
"ordenamiento impugnado, antes transcrito,
"otorga el derecho a acreditar contra el impuesto
"al activo del ejercicio una cantidad equivalente
"al impuesto sobre la renta pagado en el mismo.

"Por consiguiente, en virtud del derecho al
"acreditamiento del impuesto sobre la renta
"efectivamente pagado que concede a los
"contribuyentes el numeral de referencia, los
"sujetos pasivos que tengan esta ganancia
"mínima no verán incrementada su carga
"impositiva, ya que a este rendimiento mínimo se

"le aplica la tasa del impuesto sobre la renta, la
"cantidad pagada por este impuesto corresponde

"al impuesto al activo de las empresas que se
"determina aplicándole la tasa del uno punto
"ocho por ciento al valor de los activos de las
"empresas, lo que lleva a concluir que si el
"contribuyente acredita el impuesto sobre la
"renta cubierto, no tendrá que cubrir cantidad
"alguna por concepto del impuesto al activo.

"Por lo anterior, se afirma que la ley del impuesto
"al activo grava la ganancia mínima presunta
"originada por la tenencia de activos destinados
"a actividades empresariales y que tienen,
"además el fin recaudatorio propio de los
"tributos, el objetivo de controlar la evasión

COPIA DE
E LA DECISION
GENERAL DE ACUERDO

"fiscal, ya que a través de dicho tributo
"reclamado se ocasiona que los contribuyentes
"que no hayan declarado en impuesto sobre la
"renta esa ganancia mínima, deberá cubrir el
"impuesto al activo por la misma.

"Empero, tal ganancia puede no darse en la
"realidad por varios factores económicos, esto
"es, puede no declararse con motivo de que en
"realidad no se obtuvo y no por fines de evasión
"fiscal y, por tanto, al no contemplarse en la ley
"reclamada la posibilidad de desvirtuar dicha
"presunción de ganancia mínima, se viola el
"principio de proporcionalidad tributaria.

"En estas condiciones, aquéllos que tengan ese
"rendimiento mínimo no pagarán el impuesto,
"mientras que quienes no lo tengan sí tendrán
"que cubrirlo, lo que se traduce en quienes
"tengan menor capacidad contributiva soportarán
"la carga impositiva y quienes tengan mayor
"capacidad no lo harán, lo que implica la
"desproporcionalidad señalada al no atenderse a
"la capacidad tributaria de los sujetos pasivos
"del impuesto, así como también se infringe el
"principio de equidad al darse un trato igual a los
"desiguales y desigual a los iguales, sin que sea
"óbice a lo anterior la finalidad de controlar la
"evasión fiscal que persigue el impuesto
"reclamado, pues, por una parte, ello no exime al
"órgano legislativo de cumplir con los principios
"de proporcionalidad y equidad que establece el





"precepto 31, fracción IV, de la Constitución General de la República y, por otra, si se hubiera dispuesto la posibilidad de desvirtuar la presunción de rendimiento mínimo se hubiera superado la desproporcionalidad e inequidad aludidas, lo que no se contrapone con el objetivo de control mencionado, pues únicamente se permitiría que quienes no hubieran declarado esa ganancia mínima porque efectivamente no las hubieran obtenido, no vieran tampoco incrementada su carga impositiva, lo que no podrán desvirtuar quienes no hubieran declarado utilidades para evadir el cumplimiento de sus obligaciones.

En esta tesitura, es inconcuso que la ley reclamada sí da un trato desigual a los contribuyentes del impuesto en ella contenido, ya que no todos podrán hacer uso del derecho de acreditamiento, sino aquellos que han declarado utilidades en el impuesto sobre la renta, lo que se deriva en un trato igual a desiguales y desigual a los iguales.

Así es, el texto del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, establecía: "Artículo 9º. Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto del ejercicio una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta efectivamente pagado

"en el mismo, en los términos del Título II, o del
 "Capítulo VI del Título IV, de la ley de la materia.
 "El impuesto que resulte después del
 "acreditamiento, será el impuesto a pagar
 "conforme a esta ley. Cuando en el ejercicio se
 "determine impuesto sobre la renta por acreditar
 "en una cantidad que exceda al impuesto al
 "activo del ejercicio, los contribuyentes podrán
 "solicitar la devolución de las cantidades
 "actualizadas que hubieran pagado en el
 "impuesto al activo, en algunos de los tres
 "ejercicios anteriores, siempre que dichas
 "cantidades no se hubieran devuelto con
 "anterioridad. La devolución a que se refiere este
 "párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la
 "diferencia entre ambos impuestos. El impuesto
 "sobre la renta por acreditar a que se refiere esta
 "ley será el efectivamente pagado. El impuesto al
 "activo efectivamente pagado en alguno de los
 "tres ejercicios inmediatos anteriores a que se
 "refiere el segundo párrafo de este artículo se
 "actualizará por el periodo comprendido desde el
 "sexto mes del ejercicio en el cual el impuesto
 "sobre la renta exceda al impuesto al activo.
 "Los contribuyentes de esta ley no podrán
 "solicitar la devolución del impuesto sobre la
 "renta pagado en excesos en los siguientes
 "casos:
 "I. Cuando en el mismo ejercicio, el impuesto
 "establecido en esta ley sea igual o superior a





"dicho impuesto. En este caso el impuesto sobre
"la renta pagado por el que se podría solicitar la
"devolución por resultar en exceso, se
"considerará como pago del impuesto al activo
"del mismo ejercicio.

"II. Cuando su acreditamiento dé lugar a la
"devolución del impuesto establecido en esta ley,
"en los términos del segundo párrafo de este
"artículo.

"Cuando el contribuyente no efectúe el
"acreditamiento en un ejercicio, pudiendo
"haberlo hecho conforme a este artículo, perderá
"el derecho a hacerlo.

"El derecho al acreditamiento, previsto en este
"artículo es personal del contribuyente y no
"podrá ser transmitido a otra persona, ni como
"consecuencia de fusión."

COPIA DE
LA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL

"Por su parte, el artículo 9º de la Ley del
"Impuesto al Activo que se encuentra en vigor,
"publicado en el Diario Oficial de la Federación
"del veintiocho de diciembre de mil novecientos
"noventa y cuatro, establece:

"Artículo 9º. Los contribuyentes podrán
"acreditar contra el impuesto del ejercicio una
"cantidad equivalente al impuesto sobre la renta
"que les correspondió en el mismo, en los
"términos de los Títulos II o II-A, o del Capítulo VI
"del Título IV, de la ley de la materia.

"Adicionalmente, los contribuyentes podrán
"acreditar contra el impuesto del ejercicio, la

"diferencia que resulte de cada uno de los tres
 "ejercicios inmediatos anteriores conforme al
 "siguiente procedimiento y hasta por el monto
 "que no se hubiera acreditado con anterioridad.
 "Esta diferencia será la que resulte de disminuir
 "al impuesto sobre la renta causado, siempre que
 "este último sea menor y ambos sean del mismo
 "ejercicio. Para estos efectos, el impuesto sobre
 "la renta causado en cada uno de los tres
 "ejercicios citados deberá disminuirse con las
 "cantidades que hayan dado lugar a la
 "devolución del impuesto al activo conforme al
 "cuarto párrafo de este artículo. Los
 "contribuyentes también podrán efectuar el
 "acreditamiento a que se refiere este párrafo
 "contra los pagos provisionales del impuesto al
 "activo. El impuesto que resulte después de los
 "acreditamientos a que se refieren los párrafos
 "anteriores, será el impuesto a pagar conforme a
 "esta ley. Cuando el ejercicio, el impuesto sobre
 "la renta por acreditar en los términos exceda al
 "impuesto al activo del ejercicio, los
 "contribuyentes podrán solicitar la devolución de
 "las cantidades actualizadas que hubieran
 "pagado en el impuesto al activo, en los diez
 "ejercicios inmediatos anteriores, siempre que
 "dichas cantidades no se hubieran devuelto con
 "anterioridad. La devolución a que se refiere este
 "párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la
 "diferencia entre ambos impuestos. El impuesto



sobre la renta por acreditar a que se refiere esta ley será el efectivamente pagado. Las diferencias del impuesto sobre la renta que resulten en los términos del segundo párrafo y el impuesto al activo efectivamente pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, se actualizarán por el periodo comprendido desde el sexto mes del ejercicio al que corresponda el pago del impuesto sobre la renta o el impuesto al activo, respectivamente, hasta el sexto mes del ejercicio por el que se efectúe el acreditamiento a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, o del ejercicio en el cual el impuesto sobre la renta exceda al impuesto al activo, según se trate. Los contribuyentes de esta ley no podrán solicitar la devolución del impuesto sobre la renta pagado en exceso en los siguientes casos:

I. Cuando en el mismo ejercicio, el impuesto establecido en esta ley sea igual o superior a dicho impuesto sobre la renta pagado por el que se podrá solicitar la devolución por resultar en exceso, se considerará como pago del impuesto al activo del mismo ejercicio, hasta por el monto que resulte a su cargo en los términos de esta ley, después de haber efectuado el acreditamiento del impuesto sobre la renta a que se refieren el primero y segundo párrafos de este artículo. Los contribuyentes podrán

COMISIÓN DE
1/ REVISION
DIA 12 AGOSTO 1997

"solicitar la devolución de la diferencia que no se
"considere como pago del impuesto al activo del
"mismo ejercicio en los términos de esta
"fracción.

"II. Cuando su acreditamiento dé lugar a la
"devolución del impuesto establecido en esta ley,
"en los términos del cuarto párrafo de este
"artículo. En este caso, el impuesto sobre la renta
"pagado en exceso cuya devolución no proceda
"en los términos de esta fracción se considerará
"como impuesto al activo para efecto de este
"artículo. Cuando el contribuyente no efectúe el
"acreditamiento o solicite la devolución en un
"ejercicio pudiéndolo haber hecho conforme a
"este artículo, perderá el derecho a hacerlo en
"ejercicios posteriores. Los contribuyentes
"podrán también acreditar contra los pagos
"provisionales que tengan que efectuar en el
"impuesto al activo, los pagos provisionales del
"impuesto sobre la renta. Cuando en la
"declaración del pago provisional el
"contribuyente no pueda acreditar la totalidad del
"impuesto sobre la renta efectivamente pagada,
"el remanente lo podrá acreditar contra los
"siguientes pagos provisionales. Las personas
"morales que tengan en su activo acciones
"emitidas por sociedades residentes en el
"extranjero podrán acreditar contra el impuesto
"al activo, el impuesto sobre la renta pagado en
"el extranjero por dichas sociedades, hasta por el





"monto que resulte conforme a lo previsto en el
 "segundo párrafo del artículo 6° de la Ley del
 "Impuesto mencionado. Los derechos al
 "acreditamiento y a la devolución previstos en
 "este artículo son personales del contribuyente y
 "no podrán ser transmitidos a otra persona ni
 "como consecuencia de fusión. En el caso de
 "escisión, estos derechos se podrán dividir entre
 "la sociedad escidente y las escindidas, en la
 "proporción en que se divida el valor del activo
 "de la escidente en el ejercicio en que se
 "efectúa la escisión, determinado éste después
 "de haber efectuado la disminución de las
 "deudas deducibles en los términos del artículo
 "5° de esta ley."



COPIA DE
 DE LA FISCALIA
 ALFAR DE AGUASCALIENTES

"Ahora bien, del texto de los artículos transcritos,
 se advierte que el artículo 9°, de la Ley del
 "Impuesto al Activo de las Empresas, publicado
 "en el Diario Oficial de la Federación del 28 de
 "diciembre de 1989, se preveía la posibilidad de
 "que los contribuyentes en el ejercicio
 "acreditaran contra este impuesto una cantidad
 "equivalente al impuesto sobre la renta
 "efectivamente pagado, lo que quiere decir, que
 "si en un resultado fiscal a una empresa le
 "correspondía y pagaba por concepto del
 "impuesto sobre la renta \$50.00 (cincuenta pesos
 "00/100 M. N.), si por ese mismo ejercicio le
 "podiera corresponder pagar \$50.00 (cincuenta
 "pesos 00/100 M.N.) de impuesto al activo de las

"empresas, el contribuyente tenía derecho de
 "hacer uso de ese acreditamiento y no pagar el
 "impuesto que nos ocupa; esto es, si al
 "contribuyente le resultaba impuesto a cargo en
 "renta, esa cantidad la podía acreditar contra el
 "impuesto al activo de las empresas; en cambio,
 "si no le resultaba cantidad a pagar por concepto
 "de renta, entonces tendría que cubrir el
 "impuesto al activo que le resultare a cargo por la
 "sola tenencia de sus activos. Lo que significa
 "que si a un contribuyente no le resultaba
 "impuesto a cargo del impuesto sobre la renta
 "por no haber tenido utilidades en el ejercicio,
 "tendría que pagar impuesto por el rendimiento
 "mínimo presunto que el valor de sus activos le
 "debía generar, o bien, cuando el impuesto sobre
 "la renta, fuere menor al impuesto al activo, el
 "impuesto a pagar sería esa diferencia, lo cual
 "conduce a que quienes no obtuvieran utilidades
 "y por lo mismo no pagaran impuesto sobre la
 "renta, o que habiéndolos tenido, fueren en
 "menor medida que el valor de sus activos,
 "tendrían que soportar la carga impositiva del
 "impuesto que nos ocupa, lo que se traduce en
 "hacerlo recaer en quienes menos capacidad
 "contributiva tengan y con ello un trato desigual
 "a iguales por no prever el artículo en comento
 "la posibilidad de que los contribuyentes que no
 "obtuvieron utilidades en impuesto sobre la renta
 "desvirtuaran esa ganancia mínima presunta, que





"se supone, le produce la sola tenencia de sus
"activos.

"Ahora bien, con las reformas realizadas, en el
"texto del artículo 9º en vigor de la Ley del
"Impuesto al Activo, vigente a partir del primero
"de enero de mil novecientos noventa y cinco, se
"establece además del acreditamiento arriba
"comentado, un acreditamiento adicional para
"que los contribuyentes de este impuesto pueda
"acreditar la diferencia que les resulte en
"impuesto sobre la renta en cada uno de los tres
"ejercicios inmediatos anteriores, siempre y
"cuando el impuesto al activo que les
"correspondió haya sido menor a renta y
"cualquiera de esos tres ejercicios; y para el
"caso de que hubiere habido devolución del
"impuesto al activo en cualquiera de esos tres
"ejercicios inmediatos anteriores, tal cantidad
"deberá disminuirse cuando se efectúe el
"acreditamiento.

FOR S DE
LA 7ª CION
AL DE ACUERDO

"Como puede verse, el artículo vigente, a
"diferencia del texto anterior prevé el
"acreditamiento del impuesto sobre la renta
"contra el impuesto al activo, siempre que el
"primero resultare mayor, hasta por tres
"ejercicios inmediatos anteriores y siempre y
"cuando tal diferencia no haya sido devuelta o
"acreditada con anterioridad; a más de que ahora
"prevé la posibilidad de solicitar cuando el
"impuesto sobre la renta sea mayor al impuesto

"al activo, su devolución actualizada hasta por
"diez ejercicios inmediatos anteriores.

"Sin embargo, el que el legislador, en el texto
"actual, haya previsto un acreditamiento
"adicional del impuesto al activo hasta por los
"tres ejercicios inmediatos anteriores, con ello,
"no se subsana la inconstitucionalidad del texto
"anterior, ya que, continúa sin establecer la
"posibilidad de que los contribuyentes puedan
"demostrar que no obtuvieron la ganancia
"mínima presunta, que se supone les reditúa el
"tener activos y por la que precisamente se
"encuentran obligados a cubrir el impuesto que
"nos ocupa, esto es, los contribuyentes no tienen
"oportunidad de demostrar cuando no obtuvieron
"utilidades en el ejercicio y que por tanto
"pagaron impuesto sobre la renta, que la sola
"tenencia de sus activos no les genera
"rendimiento o ganancia alguna, haciendo recaer
"entonces la carga impositiva en quienes no
"tuvieron utilidades y por tanto menos capacidad
"contributiva que otros que sí tuvieron utilidades,
"dándose así también un trato igual a desiguales.
"Por todo lo anteriormente expuesto, debe
"concluirse que el artículo en estudio, respecto
"del acreditamiento del impuesto adolece de los
"mismos vicios de constitucionalidad que el
"texto anterior, respecto del cual el Pleno de la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación en
"sesión del seis de abril de mil novecientos





COFE
EXCELENCIA
EL SEÑOR AGENTE

"noventa y cinco, al resolver el amparo en
"revisión número A.R. 107/92, ya se pronunció,
"dando origen a la tesis cuyo tenor literal es el
"siguiente: "ACTIVO. EL ARTICULO 9º DE LA LEY
"QUE REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS
"PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y
"EQUIDAD TRIBUTARIA (REFORMAS Y
"ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO
"OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 28 DE
"DICIEMBRE DE 1989). De conformidad con lo
"establecido en el artículo 9º de la Ley del
"Impuesto al Activo de las Empresas los
"contribuyentes podrán acreditar contra el
"impuesto del ejercicio una cantidad equivalente
"al impuesto sobre la renta efectivamente
"pagado, lo que significa que si un contribuyente
"tiene ingresos o utilidades podrán realizar tal
"acreditamiento e, inclusive, si los mismos llegan
"a la ganancia mínima presunta objeto del
"impuesto al activo, no verán incrementada su
"carga impositiva, mientras que aquellos que no
"tengan utilidades o resientan pérdidas
"soportarán la carga impositiva, pues no tendrán
"cantidad alguna que acreditar y la ley no prevé
"la posibilidad de desvirtuar la presunción del
"tributo. De lo anterior se infiere que el precepto
"legal citado viola los principios de
"proporcionalidad y equidad tributarios
"consagrados en el artículo 31, fracción IV,
"constitucional pues, consistiendo el primero de

"ellos, en que los causantes deben contribuir al
 "gasto público en función de su respectiva
 "capacidad contributiva, el precepto legal citado
 "hace recaer el pago del impuesto en quienes no
 "tienen tal capacidad o la tienen en menor
 "medida y libera de la carga impositiva a quienes
 "tienen mayor capacidad tributaria, lo que da
 "como consecuencia también la transgresión del
 "principio de equidad que exige trato igual a los
 "iguales y desigual a los desiguales, pues, de esa
 "forma, se da trato igual a los iguales y desigual
 "a los desiguales"; "ACTIVO. ESTE IMPUESTO
 "QUEBRANTA EL PRINCIPIO DE
 "PROPORCIONALIDAD AL NO PREVER LA
 "POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA
 "PRESUNCION DE GANANCIA MINIMA OBJETO
 "DEL GRAVAMEN. Siendo el objeto del impuesto
 "al activo la ganancia o rendimiento mínimo
 "presunto originado en la tenencia de activos
 "destinados a actividades empresariales, es claro
 "que al no prever la ley la posibilidad de
 "desvirtuar esta presunción de ganancia mínima,
 "quebranta el principio de proporcionalidad
 "tributaria, pues ocasiona que el gravamen no
 "sea acorde con la capacidad contributiva de los
 "sujetos pasivos del impuesto al encontrarse
 "obligados a cubrirlo también quienes no hayan
 "tenido la ganancia mínima que se presume. "
 "Al haber resultado fundados los conceptos de
 "violación analizados, relativos a la





"desproporcionalidad del sistema del impuesto al activo impugnado por no contemplar la posibilidad de desvirtuar la presunción de ganancia mínima objeto del tributo y, por ende, por la forma en la que está establecido el derecho al acreditamiento, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en contra de la Ley del Impuesto al Activo, por lo que resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación alegados en contra de artículos específicos de la ley combatida, en virtud de que su análisis no variaría el sentido de esta sentencia."

OR
A 7
EL JUEZ

TERCERO. Los agravios formulados en representación del Presidente de la República, son del tenor siguiente:

"PRIMERO. Violación a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por inobservancia de los mismos.

"Se causa el agravio que se hace valer, toda vez que el A quo hizo un indebido análisis de la mecánica general de causación del impuesto al activo, al considerar que dicho tributo grava una presunta ganancia mínima, sin posibilidad de desvirtuar la presunción de la misma, con lo que se concluye que el mismo resulta desproporcional.

"Del análisis de los artículos 1º y 2º del ordenamiento legal declarado inconstitucional

"por el juez del conocimiento, se desprende
"claramente que los contribuyentes están
"obligados al pago del impuesto al activo "por el
"activo que tengan", por lo que no hay razón
"jurídica válida para concluir que el tributo se
"paga por una "ganancia mínima presunta."

"En el caso que nos ocupa, el legislador planteó
"la necesidad de establecer un tributo que
"fungiera como control del impuesto sobre la
"renta, ya que a través de mecanismos evasivos
"o elusivos, tales como los llamados "precios de
"transferencia" (por medio de los cuales
"empresas generadoras de utilidades las
"transfieren a otras que nos las producen), la
"mayoría de contribuyentes con actividades
"empresariales reportaba pérdida fiscal en el
"impuesto sobre la renta, aún y cuando contaba
"con activos para generar dichas utilidades.

"En tal sentido, al establecer los elementos
"esenciales del tributo y para considerar que el
"impuesto sería igual al resultado de aplicar la
"tasa del 1.8% sobre la base gravable del valor de
"los activos, siendo la tenencia de dichos activos
"su objeto, el legislador diseñó el impuesto al
"activo a partir de la utilidad que generan los
"activos productivos de una empresa, calculado
"sobre un porcentaje que permitiera la existencia
"de utilidades suficientes para cubrir el ISR. Para
"llegar a este último resultado, la tasa del
"impuesto se calculó contablemente con base en





"un rendimiento del 5.5% que debe generar todo
"activo productivo.

"De esta manera, para evitar nuevos esquemas
"elusivos fue necesario gravar no sólo a las
"empresas por sus activos, sino a quienes les
"proporcionaban dichos activos, aunque no
"fueran empresas, ya que a través de
"mecanismos de planeación fiscal y con la
"finalidad de no ver gravados sus activos, ciertas
"empresas "colocaban" fuera de su patrimonio
"para ser arrendados por personas físicas o
"morales no empresarias. Asimismo, mediante
"reformas al régimen de este impuesto, y con la
"finalidad de no afectar a los arrendadores no
"empresarios, se permitió que el valor de los
"activos arrendados fuera determinado dentro de
"la base gravable de la empresa arrendataria y no
"en la del arrendador, quien quedaba libre de
"toda obligación fiscal.

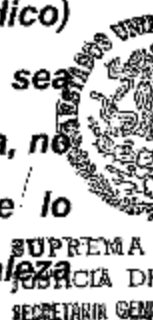
"Sin embargo, lo anterior no implica que el
"tributo en cuestión grave, como lo señala el A
"quo una ganancia ficta o utilidad presunta, en
"virtud de que en ninguna de sus partes la ley en
"comento contiene dicha aseveración, lo cual
"sería suficiente para desestimar los argumentos
"del juzgador, además de que la ley expresa con
"absoluta claridad que el objeto del impuesto lo
"es la simple tenencia y su base gravable lo es su
"valor. En este sentido, no deben confundirse los
"razonamientos técnicos relativos a la causación

PORTAL DE
LA FISCALIA
1 de mayo de 2001

"del tributo que nos ocupa con el análisis jurídico
 "de los elementos esenciales del mismo, pues
 "de dicho estudio se desprende que el hecho de
 "la detentación de activos se traduce, con
 "absoluta certeza, en un signo de riqueza,
 "circunstancia que no constituye una presunción
 "sino un hecho real y concreto, pues de otra
 "manera, tratándose de presunciones o ficciones,
 "no sería posible aplicar ajustes, actualizaciones,
 "deducciones e incluso el acreditamiento con el
 "impuesto sobre la renta.

"En este orden de ideas, el hecho (real y jurídico)
 "de que el impuesto al activo sea
 "complementario" del impuesto sobre la renta, no
 "significa que sea "accesorio", ya que de lo
 "contrario, sí gozaría de la misma naturaleza
 "jurídica de éste. En este caso, si el tributo en
 "cuestión es sólo complementario y no accesorio
 "del impuesto sobre la renta, no puede
 "jurídicamente seguir la suerte de este último
 "impuesto. En otras palabras, se trata de
 "contribuciones diferentes y, por lo mismo, en su
 "análisis de validez constitucional no debe
 "confundirse la naturaleza de su interrelación.

"Por lo anterior, la resolución del A quo, en el
 "sentido de que se viola el principio de
 "proporcionalidad al no prever la posibilidad de
 "desvirtuar la presunción de ganancia mínima,
 "supuesto objeto del gravamen, y
 "consecuentemente no tomar la capacidad





"económica de los contribuyentes, carecen de
"soporte jurídico por las razones apuntadas,
"pues la contribución declarada inconstitucional
"no grava la supuesta "presunción de ganancia
"mínima". Aún mas, la "posibilidad de
"desvirtuarla", a que se refiere el A quo sí
"resultaría jurídicamente ineficaz, pues en caso
"de demostrarse que las pérdidas declaradas son
"improcedentes, tendría que modificarse la
"utilidad fiscal en el impuesto sobre la renta.

"Al respecto, cabe aclarar que el acreditamiento
"establecido por el artículo 9º de la Ley del
"Impuesto al Activo de las Empresas no
"contraviene precepto constitucional alguno,
"toda vez que no se grava la ganancia mínima
"presunta del contribuyente sino el valor de sus
"activos, por lo que con él se pretende evitar un
"doble pago de impuestos sobre los beneficios
"económicos de un contribuyente, y al mismo
"tiempo, impedir que mediante mecanismos de
"planeación fiscal, los particulares evadan el
"pago de dicho impuesto al esconder sus
"utilidades mediante la obtención de activos.

"SEGUNDO. Violación de lo dispuesto por los
"artículos 77, 78 y demás relativos de la Ley de
"Amparo, por indebido análisis por parte del juez
"del conocimiento de la naturaleza del decreto
"promulgatorio de la ley que modifica a las
"diversas de los impuestos sobre la renta, al
"activo, especial sobre producción y servicios y

CORTE DE
REVISION
DE LA ACUERDO

"federal de derechos, concluyendo el juzgador
"que dicho ordenamiento contraviene la garantía
"de equidad consagrada en el artículo 31,
"fracción IV, constitucional, lo cual es totalmente
"infundado.

"En este sentido, cabe señalar que nuestro
"Máximo Tribunal de Justicia ha establecido que
"el principio de equidad de las contribuciones se
"satisface cuando la ley tributaria otorga el
"mismo tratamiento a los contribuyentes que se
"ubican en la misma situación fáctica o jurídica,
"es decir, dentro de la misma categoría o grupo
"de contribuyentes considerados por la norma, y
"no se establecen discriminaciones
"distinciones a título individual.

"Atendiendo a lo anterior, resulta aplicable el
"criterio sustentado por el H. Pleno de la
"Suprema Corte de Justicia que en su parte
"conducente dice:

"...Es equitativo el tributo referido, porque
"cumple con el requisito, que pueden anunciarse
"en el sentido de que no se hallan en la misma
"obligación quienes se encuentran en
"situaciones jurídicas diferentes..."

"Informe del Presidente de la Suprema Corte de
"Justicia de la Nación al terminar el año de 1970,
"Pleno, página 293 y 294.

"De lo transcrito se desprende que los impuestos
"deben ser equitativos, en el sentido de que den
"a los contribuyentes iguales el mismo trato,



"pero la noción misma de equidad supone que,
"cuando en la misma hipótesis de causación se
"encuentren contribuyentes desiguales, reciban
"un trato desigual. En otras palabras, los
"contribuyentes de un mismo impuesto pueden
"ser iguales entre sí o desiguales. Al respecto,
"debe prevenirse contra el sofisma de considerar
"que por ser contribuyentes de un mismo
"impuesto todos son iguales; pues ^{ello}
"conduciría a la inequidad derivada de ignorar las
"desigualdades propias de las ^{diversas}
"actividades, ingresos o circunstancias de los
"contribuyentes.

CORTE DE
JURISDICCION
FISCAL

"En efecto, los impuestos deben ser equitativos
"en el sentido de que den a los contribuyentes
"iguales el mismo trato; pero la noción misma de
"equidad supone que, cuando dentro de la misma
"hipótesis de causación se encuentren
"contribuyentes desiguales, reciban un trato
"desigual. En otras palabras, los contribuyentes
"de un impuesto pueden ser iguales entre sí o
"desiguales, y atendiendo a esa igualdad o
"desigualdad es como se deberá aplicar el
"tratamiento fiscal, propio para cada uno de
"esos grupos, debiéndose, para cumplir con el
"principio de igualdad, aplicar el mismo
"tratamiento para todos aquellos contribuyentes
"que presten las mismas características o
"condiciones, lo cual en modo alguno se

"traduciría en el sentido de que se debe aplicar el
"mismo tratamiento fiscal a personas distintas.

"De lo anterior se desprende que habría una
"inequidad si dentro de la misma categoría o
"grupo de contribuyentes se establecieran
"diferencias a título particular, de manera que
"hubiera cargas fiscales o excepciones sólo para
"algunos, y no para los demás que se encuentren
"en las mismas circunstancias, lo cual no ocurre
"cuando se distingue a los contribuyentes del
"mismo impuesto por grupos homogéneos con
"características propias fijadas de manera
"general, abstracta y permanente.

"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha
"resuelto al respecto lo siguiente:

"...la equidad permite al poder público tomar en
"consideración... las posibilidades económicas y
"sociales de cada causante y de cada grupo de
"causantes... pues según la equidad deben
"tratarse desigualmente las situaciones
"desiguales, lo que es muy útil y conveniente en
"un país como el nuestro en que existen
"diferencias económicas muy notables entre los
"diferentes sectores y clases
"socioeconómicas..."

"Informe rendido por el Presidente de la Suprema
"Corte de Justicia al terminar el año de 1971,
"Primera Parte, Pleno, página 263.

"A mayor abundamiento y de lo antes expuesto
"se puede señalar que el quejoso no demuestra



"en forma cabal que en la especie exista una
"violación a la garantía de equidad, resultando
"aplicable al caso la tesis relacionada del
"Tribunal Pleno, visible a fojas 153 de la
"compilación correspondiente a 1917-1988, que a
"la letra dice:

"IMPUESTOS, DESPROPORCIONALIDAD Y
"FALTA DE EQUIDAD DE LOS. DEBE
"PROBARSE. Si la demanda de amparo en su
"integridad y del recurso de revisión interpuesto
"por el quejoso no se desprende que el mismo
"probara fehacientemente que el impuesto que
"reclama fuera desproporcionado e inequitativo,
"y por ello ruinoso para él, no basta el simple
"dicho del quejoso en tal sentido, sino que debe
"probarlo y, al no hacerlo, procede confirmar la
"sentencia recurrida que niega el amparo."

"Al respecto, cabe aclarar que el precepto
"declarado inconstitucional de ninguna manera
"deviene inequitativo, pues no trata en forma
"desigual a los iguales. En efecto, el principio de
"equidad de las contribuciones se cumple
"cuando la ley otorga el mismo tratamiento a los
"contribuyentes que se ubican en la misma
"situación fáctica o jurídica, es decir, en la misma
"categoría o grupo de contribuyentes
"considerados por la norma, y no establece
"discriminaciones o distinciones a título
"individual.

"De acuerdo con lo anterior, la equidad de los
 "impuestos consiste en dar el mismo trato a
 "sujetos pasivos iguales y un trato diferente a
 "sujetos desiguales, lo que implica que los
 "contribuyentes de un mismo impuesto pueden
 "ser iguales o desiguales. En este sentido,
 "resulta erróneo considerar que por ser
 "contribuyentes de un mismo impuesto todos
 "ellos son iguales, pues lo cierto es que dentro
 "de los sujetos pasivos de un mismo tributo
 "existen diversas categorías de contribuyentes,
 "desiguales por razón de actividad, ingresos o
 "circunstancias propias.

"En este sentido, al establecer el precepto que
 "los contribuyentes están obligados al pago del
 "impuesto por el activo y aquéllos que podrán
 "acreditarlo, no implica inequidad alguna, pues
 "determina un trato igual a los iguales y desigual
 "a los desiguales, pues si bien es cierto que los
 "destinatarios del ordenamiento impugnado son
 "los contribuyentes del impuesto al activo,
 "también lo es que entre ellos existen diversas
 "categorías de contribuyentes que los hacen
 "ubicarse en situaciones fácticas o jurídicas
 "diversas, además de que el precepto de
 "referencia no establece distinciones o
 "discriminaciones a título individual.

"De esta guisa, es infundada la afirmación del A
 "quo en el sentido de que el precepto da un
 "tratamiento desigual a los iguales, pues como

ESTADO
 SUPLEN
 JUSTICIA
 SECRETARIA



"ya se señaló, dentro de los contribuyentes del
"impuesto al activo existen diversas categorías
"de contribuyentes a quienes, en razón de su
"diferente situación jurídica, se les da un
"tratamiento también distinto.

"Al respecto, cabe recalcar que el A quo omitió
"realizar el estudio adecuado del precepto en
"cuestión, pues se limitó a expresar en su
"resolución que tal ordenamiento es inequitativo
"porque da un tratamiento desigual a los iguales,
"situación que no es correcta, pues como ya se
"expuso, si bien los destinatarios de los
"contribuyentes del impuesto al activo, también
"lo es que entre ellos existen diversas categorías
"de contribuyentes en razón de las cuales
"pueden recibir, según las circunstancias, un
"tratamiento diferente, sin incurrir por ello en
"inequidad, de manera que en el caso que nos
"ocupa, no se da un tratamiento igual a los
"iguales.

"Efectivamente, como ya se ha mencionado los
"artículos 1º y 2º de la Ley del Impuesto al Activo,
"señalan cuál es el objeto de este impuesto y
"cómo se conforma su base gravable, de lo que
"se sigue que el texto de la tesis señalada por el
"A quo en la resolución que por esta vía se
"combate confunde abiertamente al objeto del
"impuesto con los razonamientos económicos
"tenidos en cuenta para su implantación en el
"sistema fiscal nacional.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
A CORTE DE
DE FISCALIA
JURISDICCION DE ACUERDOS

"Ahora bien, no atenta contra el principio de
 "equidad el hecho de que aquellos
 "contribuyentes que hayan efectuado el pago del
 "impuesto sobre la renta podrán acreditar ese
 "pago contra el impuesto al activo, lo que les
 "permite su deducción, situación que no sucede
 "en contrario, es decir que los contribuyentes
 "que no hayan tenido ganancia en el ejercicio
 "fiscal de que se trate y hayan declarado en
 "ceros el impuesto sobre la renta, tendrán que
 "realizar el pago del impuesto al activo, ello en
 "virtud de que este es complementario de aquél.
 "En esta situación, y suponiendo sin conceder de
 "que fuera cierto lo manifestado por el A quo, en
 "la resolución que se combate, si estaríamos
 "ante un tributo transgresorio del principio de
 "proporcionalidad, ya que podría disminuir el
 "impuesto al activo a aquellos contribuyentes
 "que tampoco pagaron el impuesto sobre la
 "renta, y viceversa, esto es, que los que
 "efectuaron el impuesto sobre la renta tendrían
 "igualmente la obligación de pagar el impuesto al
 "activo, sin darles el derecho de acreditarlo uno
 "con otro, lo que provocaría una violación a la
 "capacidad contributiva de los particulares, de
 "donde se pone de manifiesto lo erróneo del
 "argumento vertido por el A quo.
 "En este sentido, el acreditamiento establecido
 "por el artículo 9° de la Ley del Impuesto al
 "Activo no controvierte precepto constitucional

SUPREM.
 JUSTICIA
 SECRETARIA G



**"alguno, toda vez que no se grava la ganancia
"mínima presunta del contribuyente sino el valor
"de sus activos, como ya se ha acreditado a lo
"largo del presente recurso de revisión."**

CUARTO. La quejosa, en su recurso de revisión, expresó los siguientes agravios:

**"PRIMERO. En el considerando tercero de la
"sentencia de fecha 8 de abril de 1997, el C. Juez
"A quo sostiene la improcedencia del juicio de
"amparo interpuesto por las ahora recurrente,
"conforme al razonamiento siguiente.**



**"[...] Previo al estudio del fondo del amparo,
"procede analizar las causales de improcedencia
"alegadas por las partes o que este juzgado
"advierta de oficio, de conformidad con el último
"párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."**

**"Independientemente de las causales de
"improcedencia esgrimidas por las responsables,
"este juzgado advierte que respecto del artículo
"5º de la Ley del Impuesto al Activo y de la
"resolución que establece para mil novecientos
"noventa y seis reglas de carácter general
"aplicable a los impuestos y derechos federales,
"excepto a los relacionados con el comercio
"exterior (Resolución Miscelánea Fiscal para mil
"novecientos noventa y seis), así como la
"primera resolución que modifica a la Miscelánea
"Fiscal para mil novecientos noventa y seis, por**

"cuanto a la adición en su regla 262-A, se surte la
"causal de improcedencia prevista en la fracción
"V del artículo 73 de la Ley de Amparo por los
"siguientes:

"La referida regla 262-A, establece: "Regla 262-A.
"Para los efectos de lo establecido por el artículo
"1º, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al
"Activo, las personas distintas a las personas
"físicas que realicen actividades empresariales y
"de las personas morales residentes en México,
"así como a las residentes en el extranjero que
"tengan un establecimiento permanente en el
"país, que otorguen el uso o goce temporal de
"bienes inmuebles que se utilicen en la actividad
"de los mencionados contribuyentes, están
"obligados a pagar el impuesto establecido en
"dicha ley, únicamente por esos bienes."

"Como puede verse, dicha disposición está
"dirigida a las personas físicas o morales que
"otorguen el uso o goce temporal de inmuebles
"que se utilicen en actividades empresariales de
"otro contribuyente y, en el caso, la quejosa no
"acredita ser sujeto de la misma, dado que no
"demuestra que otorgue el uso o goce temporal
"de inmuebles y que éstos además se utilicen en
"la actividad empresarial del arrendamiento.
"Asimismo, y por lo que hace el artículo 5º de la
"ley combatida que permite la deducción de
"determinado tipo de deudas y que excluye las
"contratadas con empresas que pertenezcan al



"sistema financiero o con su intermediación, la
 "quejosa no acredita que haya contratado este
 "tipo de deudas de las que no se permite su
 "deducción. Luego entonces, no se ubica dentro
 "de los supuestos que regula la adición a la
 "regla combatida y el artículo 5º de la Ley del
 "Impuesto al Activo y, por tanto, procede
 "sobreser al respecto, con fundamento en el
 "artículo 74, fracción III, al actualizarse la causal
 "prevista en el 73, fracción V, ambos de la Ley de
 "Amparo.



CORTE DE
 LA NACION
 AL EL ACUERDO

"Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial
 "número ciento setenta y ocho, visible a fojas
 "ciento setenta y ocho, Tomo I, del Apéndice al
 "Semanao Judicial de la Federación de mil
 "novecientos diecisiete a mil novecientos
 "noventa y cinco, rubro: "INTERES JURIDICO,
 "EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA
 "LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA
 "LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE
 "AGRAVIADA" Y DE RELATIVIDAD DE LOS
 "EFECTOS DE LA SENTENCIA."

"La sentencia dictada por el C. Juez Séptimo de
 "Distrito en Materia Administrativa del Primer
 "Circuito que ahora se recurre, deviene de ilegal
 "al momento que coarta a los gobernados la
 "posibilidad de impugnar sistemas normativos
 "que considere inequitativos, al momento que no
 "permite que se hagan comparaciones entre el
 "sistema impositivo del impuesto al activo que se

"le aplica a la quejosa y el sistema que le da
"ventajas indebidas a otros sujetos, bajo el
"argumento de que a las quejosas no se les
"aplican las normas que consideran
"inequitativas.

"Así las cosas, la ilegalidad de la sentencia
"recurrida se actualiza al momento que en
"contravención de lo dispuesto por los artículos
"76, 77 y 78, de la Ley de Amparo se realiza un
"indebido análisis de los conceptos de violación
"planteados por mí autorizante en la demanda
"inicial de garantías y se sobresee el juicio de
"amparo en cuanto a la regla 262-A de la primera
"resolución que modifica a la Miscelánea Fiscal
"para 1996.



"En primer lugar, debe tomarse en consideración
"que el precepto legal especificado en el párrafo
"que antecede nunca fue de manera aislada, sino
"como parte integrante del sistema normativo del
"Impuesto al activo.

"Por otra parte, resulta particularmente grave el
"criterio seguido por el C. Juez A quo al dictar la
"sentencia que por esta vía se recurre, cuando
"argumenta que "la quejosa no acredita ser
"sujeto de la misma, dado que no demuestra que
"otorgue el uso o goce temporal de inmuebles y
"que éstos además se utilicen en la actividad
"empresarial del arrendatario", y en
"consecuencia permite que se introduzcan
"inconstitucionalidades en los sistemas



"impositivos (dirigidos a sujetos diversos a las
"quejas), sin que los gobernados se puedan
"defender.

"Así las cosas, la legislación podría resultar
"inconstitucional a capricho del legislador o del
"ejecutivo, siempre y cuando primero promulgara
"una ley perfectamente válida, y después le
"introdujera modificaciones inconstitucionales
"dirigidas a sujetos diversos de los que podrían
"impugnarla.

COORTE DE
LA NACION
GEN. DE ACUERDOS

"Abundando en lo anterior, sólo resta agregar
"que al momento que mi autorizante impugnó la
"totalidad de las normas integrantes del sistema
"normativo del impuesto al activo vigente a partir
"del 11 de mayo de 1996, por considerar que el
"efecto combinado de las mismas da como
"resultado un sistema inconstitucional, sólo
"necesitaban acreditar el primer acto de
"aplicación del sistema que se le estaba
"aplicando para considerar que resulta
"procedente el juicio de amparo. Mi autorizante
"acreditó debidamente la aplicación del sistema
"normativo del impuesto al activo vigente a partir
"del 11 de mayo de 1996, al momento que en
"debido tiempo y forma exhibió como prueba las
"declaraciones que realizó por el pago del
"impuesto al activo.

"En resumen, la ahora recurrente reclama como
"inconstitucionales las normas integrantes del
"sistema normativo del impuesto al activo que se

"le aplican (tan es así que las mismas están
 "obligadas al pago del propio impuesto),
 "disposiciones legales que deben ser
 "comparadas con las disposiciones contenidas
 "en el propio sistema que le dan ventajas
 "indebidas a diversos sujetos con las mismas
 "cualidades que las ahora recurrentes,
 "resultando que existe un sistema inequitativo.
 "La inequidad de un sistema normativo, sólo se
 "puede analizar cuando se toma en
 "consideración el conjunto de las normas que lo
 "integran, y nunca cuando éstas se analizan de
 "manera aislada.

"Por lo anteriormente expuesto, al quedar
 "acreditada la ilegalidad de la sentencia
 "recurrida, lo procedente es que esa H. Suprema

"Corte de Justicia de la Nación así lo aprecie,
 "concediendo en consecuencia a mi autorizante
 "el amparo y protección que solicita de la
 "Justicia Federal, también en contra de la regla
 "262-A de la Resolución Miscelánea para 1996,
 "misma que también forma parte del sistema
 "normativo del impuesto al activo que fue
 "declarado inconstitucional en la sentencia que
 "se recurre.

"SEGUNDO. Por otra parte, la sentencia resulta
 "ilegal al momento que no reconoce a mi
 "autorizante el derecho de impugnar el artículo 5º
 "de la Ley del Impuesto al Activo, aún y cuando



"demostró que se le aplicó el sistema normativo
"impugnado.

"En este sentido, importa reiterar que en su
"escrito inicial de garantías, mi autorizante
"claramente señala que los actos reclamados se
"resumen en la impugnación del sistema del
"impuesto al activo vigente a partir del 11 de
"mayo de 1996, cuya estructura es diferente al
"sistema que de la propia contribución ⁷ fue
"aplicable hasta el 10 de mayo del mismo año,
"básicamente por las reformas a la propia ley
"introducidas a través del Decreto ⁸ publicado en
"el Diario Oficial de la Federación de ese día.

COORTE DE
LA NACION
EN LA ACUSACIÓN

"Lo anterior obliga a concluir que la forma en
"que se encuentra estructurado el impuesto
"reclamado de ⁹ inconstitucional, es
"completamente diferente al sistema que de la
"propia contribución estuvo vigente hasta el 10
"de mayo de 1996, lo que le permite impugnar
"cualquier precepto del nuevo sistema que de
"alguna forma le puede causar agravio.

"En relación con las ideas antes expuestas,
"resulta aplicable el criterio sustentado por el H.
"Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
"Nación que se desarrolla en la jurisprudencia
"que a continuación se transcribe:

"AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACION A
"LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS
"PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERES
"JURIDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN

"SIDO APLICADOS, ASI COMO AQUELLOS QUE
 "REGULAN EL SISTEMA ESPECIFICO DENTRO
 "DEL QUE SE UBICA. La aplicación a la parte
 "quejosa de determinados preceptos de la ley
 "cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de
 "amparo, demuestra su interés jurídico para
 "combatir tales preceptos, así como aquéllos
 "que, por la íntima relación que guardan sus
 "disposiciones, puedan resultarle aplicables
 "como consecuencia, es decir, todos aquéllos
 "que regulen el sistema específico dentro del que
 "se ubique. Sin embargo, esto no significa que
 "tenga, necesariamente, interés jurídico para
 "combatir todo el cuerpo legal que contiene los
 "preceptos que le fueron aplicados, pues el
 "mismo puede regular hipótesis diversas, como
 "podrían ser impuestos diferentes o
 "contribuyentes diversos que se rigen por otro
 "sistema, o bien hipótesis excluyentes entre sí,
 "de manera tal que la aplicación de determinados
 "preceptos implique, precisamente, la
 "imposibilidad de aplicación de otros
 "dispositivos del mismo ordenamiento legal."

"Así también resulta relevante traer a colación el
 "criterio también sustentado por el H. Pleno de la
 "Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
 "siguiente tesis:

"'ACTIVO, IMPUESTO AL. LA LEY QUE LO
 "ESTABLECE CONTIENE DISPOSICIONES
 "RELACIONADAS ENTRE SI, LO QUE DA LUGAR



COORTE DE
LA NACION
DEL DE ACUERDO

"A QUE QUIENES SE ENCUENTRAN EN LOS
"SUPUESTOS DE SU AUTOAPLICACION,
"TENGAN INTERES JURIDICO EN RECLAMAR
"CUALQUIERA DE LOS PRECEPTOS QUE
"REGULAN EL SISTEMA ESPECIFICO PREVISTO
"PARA LA CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE
"QUE SE DEMOSTRO TENER. Cuando se reclama
"la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al
"Activo por considerarla autoaplicativa con su
"sola vigencia, no es menester que el gobernado
"se sitúe dentro de cada una de las hipótesis que
"la misma contempla en su articulado, sino que
"basta que se ubique de manera general en la
"hipótesis de ser contribuyente del impuesto que
"se regula, para que esté en aptitud legal de
"combatir cada uno de los preceptos que puedan
"serle aplicables según el régimen específico
"previsto para la categoría de contribuyente que
"demostró tener, toda vez que por la íntima
"relación que guardan sus disposiciones, por ese
"solo hecho, se encuentra obligado a acatar el
"sistema que establece, desde la iniciación de la
"vigencia de la ley.
"En este orden de ideas, debe concluirse que en
"virtud de que se ha realizado una reforma
"jurídica al sistema del impuesto al activo a partir
"del 11 de mayo de 1996, que cambió
"substancialmente la estructura normativa que
"de dicha gabela estuvo vigente hasta el 10 de
"mayo de 1996, se debe reconocer el derecho de

"mi autorizante para impugnar cualquier norma integrante del sistema que le cause algún agravio."

QUINTO. En la revisión adhesiva la parte quejosa hace valer los siguientes agravios:

"PRIMERO. La Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó recurso de revisión en el juicio de garantías en que se actúa, argumentando que la sentencia dictada por el C. Juez A quo le causa agravio, toda vez que se realizó un indebido análisis de la mecánica general de causación del impuesto al activo, al considerar que dicho tributo grava una presunta ganancia mínima, sin posibilidad de desvirtuar la presunción de la misma, con lo que se concluye que el mismo resulta desproporcionado.

"En los agravios desarrollados por la autoridad, se trata de demostrar que el impuesto al obligar a los contribuyentes únicamente en términos de los artículos 1º y 2º "por el activo que tengan", y que por esa razón no se puede concluir que el tributo se paga por una ganancia mínima presunta.

"Sin embargo, la propia autoridad recurrente en el cuarto párrafo de la segunda foja del recurso al que se adhiere mi autorizante por conducto



"del presente escrito, reconoce que el legislador,
"al establecer los elementos esenciales del
"tributo y para considerar que el impuesto sería
"igual al resultado de aplicar la tasa del 1.8%
"sobre la base gravable de los activos, siendo la
"tenencia de dichos activos su objeto, se "diseñó
"el impuesto al activo a partir de la utilidad que
"generan los activos productivos de una
"empresa, calculando sobre un porcentaje que
"permitiera la existencia de utilidades suficientes
"para cubrir el ISR. Para generar este último
"resultado, la tasa del impuesto se calculó
"contablemente con base en un rendimiento del
"5.5% que debe generar todo activo productivo."

SECRETARÍA DE
JUSTICIA
CORTÉ DE
LA NACIÓN
DEL DE ACUERDO

"(Enfasis añadido)
"La autoridad trata de argumentar que el
"impuesto al activo no grava una utilidad mínima
"presunta, en virtud de que la ley de la materia no
"contiene esa aseveración en ninguna de sus
"partes, sin embargo, de la exposición de
"motivos que de la propia ley fue sometida al
"Congreso de la Unión por el Presidente de la
"República, de las explicaciones que dan las
"autoridades fiscales, y de la interpretación que
"ha realizado el H. Pleno de la Suprema Corte de
"Justicia de la Nación, se desprende con
"meridiana claridad que el objeto del Impuesto al
"Activo, conforme al verdadero sentido de su
"establecimiento y su estructuración legal, lo
"constituye la utilidad ficta e hipotética originada

"por la tenencia de activos destinados a
"actividades objeto del impuesto sobre la renta.

"En este orden de ideas, resulta aplicable la tesis
"de jurisprudencia número 11/1996 sustentada
"por H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
"la Nación que a continuación se transcribe:

"**"ACTIVO. IMPUESTO AL. EL ANALISIS DE LA
"CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS
"DE LA LEY QUE LO REGULA EXIGE
"CONSIDERAR QUE SU OBJETO RADICA EN
"LOS ACTIVOS, CONCURRENTES A LA
"OBTENCION DE UTILIDADES, COMO SIGNO DE
"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, ASI COMO QUE
"ELLO SE ENCUENTRA VINCULADO A SUS
"FINES FISCALES (CONTRIBUTIVO Y DE
"CONTROL) Y A LOS EXTRAFISCALES DE
"EFICIENCIA EMPRESARIAL.** Del contenido de

"los artículos 25, 28 y 31, fracción IV, de la
"Constitución y, específicamente, de los artículos
"1º, 6º, 9º y 10º, de la Ley del Impuesto al Activo
"de las Empresas (Diario Oficial de la Federación
"de 31 de diciembre de 1988) y de la exposición
"de motivos de la iniciativa correspondiente
"resulta que para examinar la
"inconstitucionalidad de los preceptos de este
"cuerpo legal es imprescindible considerar que,
"si bien de la literalidad de su artículo 1º, el
"objeto de la contribución radica en el "activo"
"de la empresas, de los demás preceptos que
"integran el sistema del tributo, se infiere que





ORTE DE
CION
L. DE GUERRA

"dicho objeto se encuentra íntimamente
"vinculado, a que dichos activos sean
"susceptibles de concurrir a la obtención de
"utilidades, signo de capacidad contributiva que
"el legislador necesariamente debe tomar en
"cuenta como presupuesto esencial de toda
"contribución y que, además, del fin
"estrictamente fiscal de recaudar recursos para
"los servicios públicos que exige la fracción IV
"del artículo 31 de la Constitución, persigue la
"finalidad fiscal de contar con un medio eficaz de
"control en el pago que por impuesto sobre la
"renta corresponda a los sujetos pasivos, así
"como la finalidad extrafiscal de estimular la
"eficiencia de los mismos en el desarrollo de sus
"actividades económicas.

"Por lo anterior, al quedar acreditado que el
"verdadero objeto de la Ley del Impuesto al
"Activo es la ganancia mínima presunta que
"supuestamente deben obtener las empresas por
"la tenencia de activos, y en virtud de que la ley
"de la materia no da oportunidad al contribuyente
"de desvirtuar esa presunción, lo conducente es
"que se concluya que la sentencia recurrida
"contiene un razonamiento correcto en lo que a
"este punto se refiere.

"SEGUNDO. Por otra parte, el recurso de revisión
"interpuesto por la autoridad responsable, trata
"de argumentar que la sentencia recurrida resulta
"ilegal al momento que declara que el precepto

**"declarado inconstitucional deviene inequitativo
"al momento que da un tratamiento igual a los
"desiguales.**

**"Resultan infundados los argumentos
"expresados por la autoridad recurrente, al
"momento que la sentencia dictada por el C. Juez
"Séptimo de Distrito en Materia Administrativa
"contiene los argumentos suficientes para
"demostrar la violación al artículo 31, fracción IV,
"de la Constitución Federal, que se contiene en
"los preceptos declarados inconstitucionales.**

**"Lo anterior es así, en virtud de que el
"razonamiento desarrollado por el C. Juez en la
"sentencia recurrida es preciso señalar que el
"tratamiento igual que se le da a los sujetos
"deriva de la circunstancia de que los preceptos
"impugnados de la Ley del Impuesto al Activo
"dejan la carga contributiva a los sujetos que no
"obtienen utilidades (y por tanto tienen una
"menor capacidad contributiva), y se abstiene de
"gravar a aquéllos que sí obtienen utilidades.**

**"Además el criterio sostenido por el juez ahora
"recurrido, se encuentra debidamente respaldado
"por el criterio sustentado por el H. Pleno de la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación en
"sesión de 6 de abril de 1995 al resolver el
"amparo en revisión número 107/92, dando
"origen a las tesis cuyos rubros establecen lo
"siguiente: "ACTIVO. EL ARTICULO 9º DE LA LEY
"QUE REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
SUPREMA
CORTES DE JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



"PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y
"EQUIDAD TRIBUTARIA (REFORMAS Y
"ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO
"OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 28 DE
"DICIEMBRE DE 1989)." y "ACTIVO. ESTE
"IMPUESTO QUEBRANTA EL PRINCIPIO DE
"PROPORCIONALIDAD AL NO PREVER LA
"POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA
"PRESUNCION DE GANANCIA MINIMA OBJETO
"DEL GRAVAMEN.", mismas que fueron
"transcritas en el considerando cuarto de la
"sentencia ahora recurrida.



CORTE DE
LA NACION
AL DE ACUERDO

"Por todo lo antes expuesto, siendo evidente la
"legalidad de la sentencia emitida con fecha 8 de
"abril de 1997, en la parte que concede a mi
"autorizante el amparo y protección de la Justicia
"de la Unión, lo conducente es que la misma sea
"confirmada en ese sentido."

SEXTO. En principio, es pertinente considerar que de la lectura integral de los escritos mediante los que la parte quejosa y el Presidente de la República, en su carácter de autoridad responsable, interpusieron sus respectivos recursos de revisión, así como de la que corresponde a la revisión adhesiva que también la quejosa hizo valer, se desprenden algunos argumentos íntimamente relacionados que ameritan un estudio conjunto y otros que por su naturaleza se excluyen, por lo que en esta ejecutoria se hará un examen que seguirá un orden conceptual, que no necesariamente respetará aquél en

que los agravios aparecen propuestos por las partes, sino el que permita la lógica y la vinculación de los planteamientos.

También es importante tener en cuenta que en la demanda de amparo, la quejosa realiza afirmaciones genéricas en cuanto a que reclama todas las disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo hasta su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, así como la Resolución Miscelánea Fiscal para mil novecientos noventa y seis y la primera modificación a ésta; sin embargo, de la lectura integral de esa demanda se desprende con claridad que sólo precisa tal impugnación en relación con los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, párrafo segundo, y 9º, de esa ley, y con la regla 262-A de la citada resolución, siendo la nota común de las argumentaciones expuestas en los conceptos de violación, que atacan el establecimiento mismo del impuesto al activo, pues a través de ellos se aduce, por una parte, que en la determinación de algunos de los elementos esenciales de ese tributo se infringen los principios constitucionales que deben regir a las contribuciones y, por otra, que el Congreso de la Unión carece de facultades para establecer tal impuesto.

Asimismo, debe tenerse presente que de la sentencia recurrida se desprende lo siguiente:

En el considerando segundo, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por una parte, en relación con los actos atribuidos al Secretario



de Hacienda y Crédito Público, que se hicieron consistir en el
refrendo al decreto en que se promulgó la Ley del Impuesto al
Activo, así como a sus reformas; la expedición de la resolución
que establece para mil novecientos noventa y seis reglas de
carácter general aplicables a los impuestos y derechos
federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior
"Resolución Miscelánea Fiscal para 1996", así como la primera
resolución que la modificó, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, respectivamente del veintinueve de marzo y
diecisiete de junio de mil novecientos noventa y seis, por
cuanto hace a lo establecido en la Regla 262-A; y en la
recepción de las declaraciones de pago provisional del
impuesto al activo correspondientes a los meses de mayo a
diciembre de mil novecientos noventa y seis. Por otra, en
virtud del acto atribuido al Administrador General de
Recaudación y al Administrador Local de Recaudación Oriente
del Distrito Federal, ambos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, que se hizo consistir en la recepción de las
mencionadas declaraciones de pago.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
JEFES DE SECCIÓN

A su vez, en el considerando tercero, el resolutor federal
decretó el sobreseimiento en relación con los actos vinculados
con el artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo y con los
relacionados con la regla 262-A de la aludida resolución
miscelánea fiscal y su modificación.

En el considerando cuarto, el Juez de Distrito estimó
fundados los conceptos de violación relativos a que el artículo
9º de la Ley del Impuesto al Activo, viola el principio de
proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31,

fracción IV, de la Constitución Federal, por no contemplar la posibilidad de desvirtuar "la presunción de ganancia mínima presunta objeto del tributo", lo que le condujo a sostener la inconstitucionalidad del sistema del impuesto al activo y a otorgar al respecto la protección de la Justicia Federal, sin tener que analizar los conceptos de violación relativos a los demás preceptos legales impugnados.

SEPTIMO. De acuerdo con las premisas de estudio antes precisadas, debe señalarse que del escrito de revisión de la quejosa e incluso, de la revisión adhesiva que también hizo valer, se desprende que no formula ningún agravio en contra del sobreseimiento decretado por el juzgador de amparo en el considerando segundo de su fallo, en lo atinente, por una parte a los actos atribuidos al Secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en el refrendo al decreto en que se promulgó la Ley del Impuesto al Activo, así como a sus reformas; y en la recepción de las declaraciones de pago provisional del impuesto al activo correspondientes a los meses de mayo a diciembre de mil novecientos noventa y seis. Por otra, en cuanto al acto atribuido al Administrador General de Recaudación y al Administrador Local de Recaudación Oriente del Distrito Federal, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se hizo consistir en la recepción de las mencionadas declaraciones de pago.

Lo anterior aunado a la circunstancia de que sobre el particular no se actualiza la existencia de queja deficiente que suplir de acuerdo con lo establecido por el artículo 76 bis de la



de Amparo, conduce a la conclusión de que tal determinación debe tenerse firme.

OCTAVO. En cambio, respecto del sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia de mérito, la quejosa formula diversos planteamientos en su recurso de revisión, de los que son materia de examen competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tocantes al artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo.

Sobre el particular, el Juez de Distrito sostuvo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no acredita que tal precepto legal afecte su interés jurídico, porque no demostró encontrarse en la hipótesis que establece, es decir, que tenga deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación.

En contra de tal consideración, la quejosa argumenta, en el identificado como segundo agravio de su escrito de revisión, que la circunstancia de ser contribuyente del impuesto al activo le permite impugnar cualquier precepto legal que regule el sistema del tributo, que de alguna forma le pueda causar agravio, como sucede respecto del artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo, de acuerdo con las tesis que invoca y transcribe, cuyos rubros dicen: "AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACION A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASI COMO

AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECIFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA." y "ACTIVO, IMPUESTO AL. LA LEY QUE LO ESTABLECE CONTIENE DISPOSICIONES RELACIONADAS ENTRE SI, LO QUE DA LUGAR A QUE QUIENES SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE SU AUTOAPLICACION, TENGAN INTERES JURIDICO EN RECLAMAR CUALQUIERA DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECIFICO PREVISTO PARA LA CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE QUE SE DEMOSTRO TENER."

Es infundado el agravio sintetizado y para ilustrar esta aseveración, es necesario tener en consideración que la quejosa alega en vía de conceptos de violación, que la precisada disposición legal es violatoria de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, al prohibir la deducción de deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, colocando a los sujetos pasivos del impuesto en una situación desigual, porque los distingue en función de la calidad de su acreedor.

Como es fácil de apreciar, la promovente del juicio de garantías pretende cuestionar la constitucionalidad del artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto a la imposibilidad de restar de sus activos los pasivos adquiridos con las empresas que componen el sistema financiero o su intermediación.



Ahora bien, el citado artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"ARTICULO 5º. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, la deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa de factoraje financiero. Y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión el pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este impuesto.

~~No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación."~~

De esta disposición legal se desprende que autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor del activo en el ejercicio y les prohíbe deducir aquéllas que tengan contratadas con el sistema financiero o su intermediación.

Estas premisas conducen a la convicción de que a efecto de acreditar plenamente el interés jurídico para reclamar en el juicio de garantías el artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, con motivo de un acto concreto de

aplicación, no sólo es necesario acreditar que se es sujeto pasivo de dicha contribución y afirmar que no se le permite deducir las deudas que tiene contratadas con el sistema financiero, sino también, demostrar este último hecho.

Para avalar tal postura es necesario reconocer que existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales sujeto, objeto, base y tasa; requieren cálculos básicos que no necesitan un mayor detalle en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo y sobre la renta.

SUPREMA
JUSTICIA D
SECRETARIA GE

En consecuencia, podría decirse que existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquéllas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate, para incluirla de una manera



congruente con los elementos esenciales sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.

En este caso se encuentra el artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, que establece la imposibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero puesto que las reglas que rigen a los elementos esenciales de la contribución se establecen en diversos preceptos legales siendo que la posibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, si bien atañe al cálculo de la base gravable, es una variable que no se da en todos los contribuyentes del impuesto, sino sólo en aquéllos que tienen contratadas esa clase de deudas; por ende, el amparo que eventualmente se llegara a conceder, en caso de que así procediera, produciría el efecto de permitir a la quejosa la deducción de las aludidas deudas, sin que con ello quede eximido de pagar el tributo, pues el vicio de inconstitucionalidad planteado no alcanza la totalidad del sistema impositivo sino sólo una variable que se aplica a la base.

En ese orden de ideas, no basta que la quejosa demuestre ser contribuyente del impuesto al activo para reclamar la inconstitucionalidad de una de sus variables, sino que resulta indispensable que demuestre ubicarse en la hipótesis legal que la prevé, de lo contrario, retomando el asunto en análisis, podría darse el caso de que el quejoso tuviera en su poder un amparo inútil, de no tener al momento de su promoción deudas contratadas con el sistema financiero, con lo que el amparo no conseguiría un fin restitutorio sino de mera planeación fiscal al permitirle en el futuro contratar esa

clase de deudas que podrá hacerlas deducibles, lo que es contrario a la naturaleza del juicio de garantías.

Lo expuesto lleva a concluir que tratándose de elementos variables de la contribución, es necesario que se demuestre estar dentro de las hipótesis legales; por tanto, como en la especie la quejosa no demostró tener deudas contratadas con el sistema financiero, procede sobreseer en el juicio de amparo por falta de interés jurídico, respecto del artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo.

Se corrobora lo precedente, si se tiene en consideración el criterio contenido en la tesis 3ª.CXXXI/91, consultable en la página 21, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII-septiembre, Octava Epoca, Tercera Sala, cuyo rubro es **"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL, LOS EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO, FIRME POR NO HABER SIDO IMPUGNADO, RESPECTO DEL ARTICULO 5º DE LA LEY QUE ESTABLECE ESTE IMPUESTO SON EXCLUSIVAMENTE LOS DE PERMITIR AL QUEJOSO LA DEDUCCION DEL VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS EN MONEDA NACIONAL CONCERTADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO O SU INTERMEDIACION"**, en el cual claramente se establece que el efecto de la concesión de la protección constitucional sólo consiste en permitirle a la parte quejosa la deducción del valor promedio de las deudas en moneda nacional concertadas con el sistema financiero mexicano o su intermediación; luego, se infiere que para acreditar el interés jurídico que le asiste al gobernado para reclamar el artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto



Activo, en cuanto establece la prohibición de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, con motivo de un acto de aplicación, es necesario demostrar que se ubica dentro de ese supuesto, lo cual no aconteció en la especie.

Las consideraciones que anteceden revelan que respecto del artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, efectivamente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, por no haber demostrado la quejosa que tiene deudas contratadas con el sistema financiero lo que conduce a confirmar el sobreseimiento que sobre el particular se decretó en la sentencia recurrida.

CORTE DE
LA NACION
10 DE ENERO DE 1998

NOVENO. Como antes se precisó, en el considerando tercero de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito también decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos vinculados con la regla 262-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1996, al estimar que al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que esa disposición administrativa no está dirigida a la categoría de contribuyentes a que pertenece la quejosa.

Sobre el particular, la quejosa expone, en el identificado como primer agravio de su escrito de revisión, que esa regla contiene una disposición que forma parte del sistema del impuesto al activo y que, por tanto, tiene interés jurídico para reclamarla conjuntamente con ese sistema.

Es sobre el conocimiento de tal aspecto que en el considerando primero del presente fallo, este Tribunal Pleno determinó pertinente ejercitar la facultad de atracción, dado que se encuentra íntimamente vinculado con la procedencia del juicio de amparo en relación con el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en lo referente a la categoría de contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de bienes a otro contribuyente.

Antes de abordar el tópico en comento, es necesario dejar asentado que en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causas de improcedencia debe realizarse oficiosamente, lo que implica que pueden y deben analizarse en cualquiera de las instancias del juicio de garantías, las aleguen o no las partes, lo que autoriza a que en este recurso de revisión se examine de oficio la procedencia del juicio constitucional, incluso respecto de aquellos actos que en la sentencia recurrida se haya tenido por tácitamente actualizada.

Precisado lo anterior, es menester transcribir lo que establecen el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, de acuerdo con la reforma del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, y la modificada regla 262-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1996:

"ARTICULO 1º. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas



"al pago del impuesto al activo, por el activo que
"tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las
"residentes en el extranjero que tengan un
"establecimiento permanente en el país, están
"obligadas al pago del impuesto por el activo
"atribuible a dicho establecimiento. Las personas
"distintas a las señaladas en este párrafo, que
"otorguen el uso o goce temporal de bienes que
"se utilicen en la actividad de otro contribuyente
"de los mencionados en este párrafo, están
"obligadas al pago del impuesto, únicamente por
"esos bienes. (...)"



CORTE DE
LA NACION
REDA DE ACUERDO

"Regla 262-A. Para los efectos de lo establecido
"por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley del
"Impuesto al Activo, las personas distintas a las
"personas físicas que realicen actividades
"empresariales y de las personas morales
"residentes en México, así como a las residentes
"en el extranjero que tengan un establecimiento
"permanente en el país, que otorguen el uso o
"goce temporal de bienes inmuebles que se
"utilicen en la actividad de los mencionados
"contribuyentes, están obligados a pagar el
"impuesto establecido en dicha ley, únicamente
"por esos bienes."

Es importante destacar que respecto del artículo 1º,
párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en el

apartado b) del identificado como primer concepto de violación, la quejosa expuso lo siguiente:

a) **Tratamiento privilegiado a arrendadores:** Así mismo, la infracción de los artículos 1º, 13 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal se actualiza cuando en el artículo 1º, primer párrafo, in fine de la Ley del Impuesto al Activo, reformado en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de mayo de 1996, se establece lo siguiente:

"[...] Las personas distintas de las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto por su activo fijo y terrenos por los que obtengan ingresos a los que se refiere el Capítulo III del Título IV y los artículos 133, fracción XIII y 148-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta."

"[El énfasis es añadido; este tipo de ingresos se refieren al arrendamiento y, en general, al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles a título oneroso]."

"Lo anterior es así, por un lado, en virtud de que gravar cierto tipo de sujetos en consideración al destino que dan a los inmuebles de su propiedad —el arrendamiento y el otorgamiento oneroso del uso o goce de tales bienes a otros contribuyentes—, con exclusión de otras



"personas que, aunque siendo propietarias de la
"misma clase de bienes, no los arriendan ni
"conceden su uso o goce temporal y oneroso a
"esos otros contribuyentes, representa un trato
"desigual a sujetos que en realidad se
"encuentran en una idéntica situación jurídica y
"de hecho, cual es la mera propiedad de
"inmueble. Por ello, el establecimiento de
"diferenciaciones entre unos y otros sujetos para
"la determinación de los contribuyentes
"obligados al pago del impuesto al activo, en
"base a un criterio carente de índices objetivos y
"de equidad, es decir, tan sólo a partir del destino
"que se dé a los bienes de su propiedad, sin
"tomar en cuenta que lo que la lógica y
"constitucionalmente es relevante es la calidad
"de propietarios de tales bienes, da lugar a que
"los ordenamientos legales reclamados sean
"conculcatorios de las garantías individuales
"indicadas al inicio de este apartado.
"Pero aún, acorde con el nuevo texto legal del
"precepto anteriormente transcrito, resulta que
"tanto el Capítulo III del Título IV como los
"artículos 133, fracción XIII y 148-A, de la Ley del
"Impuesto sobre la Renta, se refieren únicamente
"a los ingresos de las personas físicas que
"correspondan al otorgamiento, a título oneroso,
"del uso o goce temporal de bienes inmuebles a
"otros contribuyentes del impuesto al activo,
"todo lo cual actualiza la transgresión de las

**"garantías constitucionales en comento por los
"siguientes motivos:**

**"i) Porque injustificadamente se excluye de este
"supuesto a las personas morales que no son
"contribuyentes del impuesto al activo y que de
"cualquier modo arriendan u otorgan, a Título
"oneroso, el uso o goce temporal de bienes
"inmuebles;**

**"ii) Porque al hacerse remisión al Capítulo III del
"Título IV y a los artículos 133, fracción XIII y
"148-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en
"forma inexplicable sólo se incluyen actos
"onerosos -arrendamiento y en general
"otorgamiento del uso o goce temporal de
"inmuebles-, no así los que sean de carácter
"gratuito como el comodato, por ejemplo; y**

**"iii) Porque en el primer párrafo del artículo
"primero de la ley impugnada de inconstitucional,
"de manera caprichosa se excluye del rango de
"contribuyentes a las personas físicas (y
"morales) que otorguen el uso o goce temporal
"de bienes muebles, no obstante que éstos
"también pueden, de inicio, catalogarse como
""activo fijo" para efectos del propio
"ordenamiento tributario, pero que por la
"veleidosa voluntad del legislador federal no
"quedan comprendidos en el precepto legal de
"que se trata."**





Con relación a la regla 262-A de la comentada resolución Miscelánea, la quejosa expuso, en el apartado a) del segundo concepto de violación de su demanda de garantías, los siguientes argumentos:

a) **Resolución Miscelánea no puede establecer sujetos pasivos:** La regla 262-A, adicionada en la primera resolución que modifica a la Miscelánea Fiscal para 1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio del año en curso, establece lo siguiente:

COPIA DE
LA RESOLUCION
DEL 17 DE JUNIO DE 1996

"Para los efectos de lo establecido por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, las personas distintas a las personas físicas que realicen actividades empresariales y de las personas morales residentes en México, así como a las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles que se utilicen en la actividad de los mencionados contribuyentes, están obligadas a pagar el impuesto establecido en dicha ley, únicamente por esos bienes." (Enfasis añadido).

"En tal forma, del análisis comparativo que se efectúe del artículo 1º, primer párrafo, de la ley impugnada y de la regla 262-A antes transcrita, fácilmente podrá apreciarse que en contradicción con las garantías individuales en cita, las autoridades fiscales responsables han

**"ampliado la gama de sujetos pasivos
"originalmente señalados por el Congreso de la
"Unión, conforme a lo siguiente:**

**"i) Porque en dicha regla se incluyen a las
"personas morales ("personas distintas a las
"personas físicas") como contribuyentes del
"impuesto al activo en los casos en que otorguen
"el uso o goce temporal de inmuebles a otros
"contribuyentes; el artículo 1º, primer párrafo, de
"la ley de la materia únicamente establece como
"sujetos pasivos a las personas físicas;**

**"ii) Porque la regla 262-A comprende el
"otorgamiento del uso o goce temporal de
"inmuebles en forma gratuita, como el comodato,
"por ejemplo, a diferencia de lo establecido en la
"Ley del Impuesto al Activo, que al remitirse al
"Capítulo III del Título IV y a los artículos 133,
"fracción XIII, y 148-A, de la Ley del Impuesto
"sobre la Renta, solamente abarca el
"otorgamiento del uso o goce de inmuebles a
"título oneroso (arrendamiento); y**

**"iii) Porque la propia regla 262-A amplía el
"otorgamiento del uso o goce temporal a toda
"clase de inmuebles, en tanto que el artículo 1º,
"primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo
"únicamente alude a los inmuebles consistentes
"en "activo fijo y terrenos."**

De las anteriores precisiones se desprende con claridad
que la quejosa pretende cuestionar la constitucionalidad del



regimen establecido para una de las categorías de sujetos del impuesto al activo a que hace mención el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, como es la de personas físicas o morales, residentes en México, que otorguen el uso o goce temporal de bienes a otros contribuyentes, categoría en la que no demostró encontrarse ubicada.

En efecto, como ya se precisó en el considerando octavo de esta ejecutoria, de autos aparece demostrado que la quejosa se ubica en la primera de las categorías de contribuyentes que señala el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, es decir, la de ser una sociedad mercantil que realiza actividades empresariales residentes en México, según la constancia de la escritura pública de su constitución que exhibió, y que, incluso, con ese carácter ha presentado diversas declaraciones provisionales y la definitiva, correspondientes al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis; pero no acreditó en el juicio de amparo otorgar el uso o goce temporal de bienes a otro contribuyente; luego, ninguna invasión a su esfera jurídica resulta por virtud de lo dispuesto en cuanto a una diversa categoría de contribuyente que no demostró tener.

Es aplicable al respecto, el criterio sustentado en el considerando octavo de esta ejecutoria en cuanto a que en virtud de que la Ley del Impuesto al Activo establece diversas categorías de contribuyentes, que enuncia en su artículo 1º, el interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo las disposiciones relacionadas con alguna de ellas, precisa de la

demostración de que el quejoso se encuentra en la categoría que impugna, pues de esta forma acredita que el sistema relativo le obliga a actuar en determinado sentido y, por ende, que invade su esfera jurídica.

Por tanto, no estando demostrado que la quejosa se encuentre ubicada en la categoría de sujetos del tributo que otorgan el uso o goce temporal de bienes a otro contribuyente, es inconcuso que carece de interés jurídico para impugnar las disposiciones relativas al sistema que rige a esa categoría, como son, entre otras, el artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo y la regla 262-A de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 1996", y su modificación, por lo que la respectiva reclamación constitucional es improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA FEDERACION

En las condiciones relatadas, respecto de la mencionada disposición administrativa, debe confirmarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y tocante del artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en lo tocante a la categoría de contribuyentes en comento, revocar la sentencia recurrida y decretar también el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

DECIMO. A continuación, es procedente examinar los agravios aducidos en el recurso de revisión interpuesto en nombre del Presidente de la República, que se advierten relacionados, exclusivamente, con la concesión del amparo



decretada por el Juez de Distrito en el considerando cuarto de la sentencia recurrida.

Al respecto, el juzgador de garantías estimó fundados los conceptos de violación relativos a que el artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque, sostuvo, no contempla la posibilidad de desvirtuar "la presunción de ganancia mínima presunta objeto del tributo", haciendo recaer entonces la carga impositiva en quienes no tienen utilidades, los que no tienen la oportunidad de realizar el acreditamiento de que trata el precepto legal; consideración que le condujo a sostener la inconstitucionalidad del sistema del impuesto al activo, invocando como aplicables las tesis del Tribunal Pleno de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, identificadas con los números XLVI/95 y XLVII/95, cuyos respectivos rubros dicen: "ACTIVO. EL ARTICULO 9º DE LA LEY QUE REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989)." y "ACTIVO. ESTE IMPUESTO QUEBRANTA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL NO PREVER LA POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA PRESUNCION DE GANANCIA MINIMA OBJETO DEL GRAVAMEN."

En contra de tales consideraciones, la autoridad recurrente argumenta, en esencia, que el artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo no contraviene precepto constitucional

alguno, toda vez que no grava la ganancia mínima presunta del contribuyente, sino que su objeto es la tenencia de activos como signo de riqueza, lo que no constituye una presunción sino un hecho real, además de que pretende evitar un doble pago de impuestos sobre los beneficios económicos de un contribuyente, por lo que el acreditamiento no implica inequidad, pues éste puede realizarse por cualquier contribuyente.

Para apoyar las consideraciones de la concesión del amparo, la quejosa aduce en la revisión adhesiva, por una parte, que como lo reconoce la autoridad recurrente, el legislador "diseñó el impuesto al activo a partir de la utilidad que generan los activos productivos de una empresa", por lo que el objeto del tributo lo constituye la utilidad ficta e hipotética originada por la tenencia de activos destinados a actividades objeto del impuesto sobre la renta, siendo aplicable la jurisprudencia número 11/96 del Tribunal Pleno, cuyo rubro es "ACTIVO. IMPUESTO AL. EL ANALISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY QUE LO REGULA EXIGE CONSIDERAR QUE SU OBJETO RADICA EN LOS ACTIVOS, CONCURRENTES A LA OBTENCION DE UTILIDADES, COMO SIGNO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, ASI COMO QUE ELLO SE ENCUENTRA VINCULADO A SUS FINES FISCALES (CONTRIBUTIVO Y DE CONTROL) Y A LOS EXTRAFISCALES DE EFICIENCIA EMPRESARIAL."; y, por otra, concluye, "... al quedar acreditado que el verdadero objeto de la Ley del Impuesto al Activo es la ganancia mínima presunta que supuestamente deben obtener las empresas por



la tenencia de activos, y en virtud de que la ley de la materia no da oportunidad al contribuyente de desvirtuar esa presunción, lo conducente es que se concluya que la sentencia recurrida contiene un razonamiento correcto en lo que a este punto se refiere..."; agrega, que el criterio emitido por el Juez de Distrito encuentra apoyo en las tesis del Tribunal Pleno que invocó, identificadas con los números XLVI/95 y XLVII/95.

Son fundados los agravios aducidos por la autoridad recurrente y, en cambio, carentes de sustento los esgrimidos en la revisión adhesiva.

Con el propósito de corroborar tales asertos, inicialmente es pertinente destacar que el criterio en que el Juez de Distrito sustentó la inconstitucionalidad del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo, orientado por las tesis que estimó todavía aplicables, parte de un concepto del objeto del impuesto al activo diferente del que actualmente es reconocido.

En efecto, el criterio orientador de las mencionadas tesis fue adoptado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia (por mayoría de seis votos), al resolver el juicio de amparo en revisión número 107/92, promovido por Consultores en Servicios Jurídicos Fiscales, sociedad anónima de capital variable, el seis de abril de mil novecientos noventa y seis, en cuya respectiva ejecutoria se consideró que el objeto del impuesto al activo consiste en la ganancia o rendimiento mínimo presunto originado por la tenencia de activos; sin embargo, ese criterio ya fue superado por este Tribunal Pleno, al resolver el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y

seis, entre otros, los juicios de amparo en revisión números 749/91, 1558/90, 4736/90, 5815/90 y 16/92; en los que se sostuvo, por mayoría de ocho votos, que el objeto del impuesto radica en la tenencia de activos concurrentes a la obtención de utilidades como signo de capacidad contributiva.

En la ejecutoria dictada en el primero de esos juicios de amparos en revisión, es decir, el número 749/91, promovido por Compañía Harinera de La Laguna, sociedad anónima de capital variable, se consideró respecto del objeto del impuesto al activo, lo siguiente:

***"...De todo lo expuesto este Alto Tribunal
"establece que al examinar integralmente el
"sistema legal del impuesto al activo de las
"empresas, se aparta de los criterios implícitos o
"explícitos que había adoptado anteriormente al
"examinar el objeto del impuesto al activo de las
"empresas. Por un lado, considera que el
"adoptado originariamente de que se
"circunscribía al activo respondía a una
"aplicación literal de un precepto desvinculado
"del sistema legal en el que se encuentra; por
"otro, estimar como se decidió en la sentencia
"mayoritaria pronunciada el 6 de abril de 1995, al
"resolver el amparo en revisión 107/92,
"Consultores en Servicios Jurídicos Fiscales,
"S.A. de C.V., que dicho objeto recaía en la
"utilidad mínima presunta, contrariaba el
"principio de legalidad tributaria interpretado por***



"la jurisprudencia, puesto que tal conclusión era
 "resultado de inferencias apartadas no sólo de la
 "literalidad de la ley sino de su interpretación
 "sistemática. Según se ha concluido en esta
 "nueva apreciación más rigurosa, el objeto del
 "tributo radica en los activos pero comprendidos
 "con la vinculación estrecha con los elementos
 "precisados, como son su susceptibilidad de
 "concurrir en la obtención de utilidades, como
 "signo de capacidad contributiva y los fines
 "fiscales y extrafiscales que se establecen de
 "modo explícito e implícito en la ley que rige esta
 "contribución.

CORTE DE
 LA NACIÓN
 DE ACUERDO

"Por otra parte, el examen de la exposición de
 "motivos transcrita frente al texto aprobado por
 "el legislativo, particularmente el relativo a sus
 "artículos 1º y 9º ya reproducidos, permite
 "distinguir los fines fiscales del impuesto y los
 "extrafiscales.

"Si de acuerdo con el segundo de los preceptos
 "citados, los contribuyentes pueden acreditar
 "una cantidad equivalente al importe pagado por
 "concepto del impuesto al activo de las empresas
 "contra las cantidades a que estén obligados en
 "el impuesto sobre la renta, resulta claro que el
 "tributo tiene fines recaudatorios, al menos
 "provisionales, por cuanto se traducirá en un
 "ingreso inmediato, y a veces definitivo, al Erario
 "Público de las cantidades que enteren los
 "contribuyentes. En la forma en que está

*"diseñado el impuesto, si bien el ingreso deja de
"serlo respecto de quienes lleguen a tener
"derecho a acreditarlo, por ser superior el monto
"que deba pagarse en impuesto sobre la renta,
"será definitivo, total o parcialmente, para
"aquellos que sólo puedan acreditarlo en parte o
"no lo puedan hacer. Además, la contribución
"tiene fines extrafiscales, pues no toda su
"imposición se traduce en recaudación definitiva,
"considerando el volumen de contribuyentes
"beneficiados por el mecanismo de
"acreditamiento..."*

Con base en el criterio sustentado en la parte transcrita de la ejecutoria y mediante la reunión de los cinco precedentes idóneos por su votación se integró la jurisprudencia número 11/96 que, por cierto, la quejosa invoca en su revisión adhesiva, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, correspondiente a marzo de 1996, página 5, que dice:

**"ACTIVO, IMPUESTO AL. EL ANALISIS DE LA
"CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS
"DE LA LEY QUE LO REGULA EXIGE
"CONSIDERAR QUE SU OBJETO RADICA EN
"LOS ACTIVOS, CONCURRENTES A LA
"OBTENCION DE UTILIDADES, COMO SIGNO DE
"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, ASI COMO QUE
"ELLO SE ENCUENTRA VINCULADO A SUS
"FINES FISCALES (CONTRIBUTIVO Y DE**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTE DE
LA NACION.
VAL DE ACUERDO

"CONTROL) Y A LOS EXTRAFISCALES DE
"EFICIENCIA EMPRESARIAL. Del contenido de
"los artículos 25, 28 y 31, fracción IV, de la
"Constitución y, específicamente, de los artículos
"1º, 6º, 9º, y 10, de la Ley del Impuesto al Activo
"de las Empresas (Diario Oficial de la Federación
"del 31 de diciembre de 1988) y de la exposición
"de motivos de la iniciativa correspondiente
"resulta que para examinar la constitucionalidad
"de los preceptos de este cuerpo legal es
"imprescindible considerar que, si bien de la
"literalidad de su artículo 1º, el objeto de la
"contribución radica en el "activo" de las
"empresas, de los demás preceptos que integran
"el sistema del tributo, se infiere que dicho objeto
"se encuentra íntimamente vinculado a que
"dichos activos sean susceptibles de concurrir a
"la obtención de utilidades, signo de capacidad
"contributiva que el legislador necesariamente
"debe tomar en cuenta como presupuesto
"esencial de toda contribución y que, además,
"del fin estrictamente fiscal de recaudar recursos
"para los servicios públicos que exige la fracción
"IV del artículo 31 de la Constitución, persigue la
"finalidad fiscal de contar con un medio eficaz de
"control en el pago que por impuesto sobre la
"renta corresponda a los sujetos pasivos, así
"como la finalidad extrafiscal de estimular la
"eficiencia de los mismos en el desarrollo de sus
"actividades económicas."

El criterio plasmado en la jurisprudencia transcrita, que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales del país, a excepción de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, vuelve inaplicables aquellas tesis relativas a la inconstitucionalidad del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo, por las razones que enseguida se exponen.

Bajo la concepción de que el objeto del impuesto al activo radicaba en la ganancia mínima presunta originada en la tenencia de activos destinados a actividades empresariales, encontró cabida la postura acerca de la inconstitucionalidad del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo, ya que entendida "la ganancia mínima presunta" como el producto de una operación aritmética derivada del rendimiento hipotético de los activos menos los pasivos, es decir, de un fruto neto de lo que en términos económicos deberían de rendir los activos menos los pasivos, el hecho imponible del tributo, como signo de capacidad contributiva, radicaba en una ganancia imaginaria.

Al tenor de esa premisa se arribó a la conclusión de que el artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo da un trato desproporcional e inequitativo, al autorizar el acreditamiento del impuesto al activo contra el impuesto sobre la renta, sin permitir desvirtuar la presunción de ganancia mínima, ya que, se dijo, tal acreditamiento no es posible respecto de contribuyentes que no obtengan utilidades, mismas que el objeto del tributo presume las obtienen, lo que altera la base del impuesto,



siendo menos para los que en realidad obtienen ganancias y que, por esto, se grava a quienes no tienen capacidad contributiva.

Esta postura pierde sustento con la reciente concepción del objeto del impuesto, en virtud de que siendo el hecho imponible la simple tenencia de activos concurrentes a la obtención de utilidades, como signo de capacidad contributiva, la percepción presunta o real de ganancia no tiene relevancia, ni importa que la ley no otorgue la posibilidad de desvirtuar tal ganancia presunta y, por consecuencia, no existe razón para hablar de un trato desigual y desproporcionado para los contribuyentes, ya que para determinar la base del tributo todos cuentan con las mismas reglas que son susceptibles de arrojar un resultado fiscal idéntico, las que parten de la tenencia de activos concurrentes a la obtención de utilidades.

Ahora bien, el texto del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en mil novecientos noventa y cuatro, a la letra establece:

**"Artículo 9º. Los contribuyentes podrán acreditar
"contra el impuesto del ejercicio una cantidad
"equivalente al impuesto sobre la renta que les
"correspondió en el mismo, en los términos de
"los títulos II ó II-A, o del capítulo VI del título IV
"de la Ley de la materia.-- El impuesto que
"resulte después del acreditamiento será el
"impuesto a pagar conforme a esta ley.-- Cuando
"en el ejercicio se determine impuesto sobre la**

"renta por acreditar en una cantidad que exceda
 "al impuesto al activo del ejercicio, los
 "contribuyentes podrán solicitar la devolución de
 "las cantidades actualizadas que hubieran
 "pagado en el impuesto al activo, en los diez
 "ejercicios inmediatos anteriores, siempre que
 "dichas cantidades no se hubieran devuelto con
 "anterioridad. La devolución a que se refiere este
 "párrafo en ningún caso podrá ser mayor a la
 "diferencia entre ambos impuestos.--- El
 "impuesto sobre la renta por acreditar a que se
 "refiere esta ley será el efectivamente pagado.---
 "El impuesto al activo efectivamente pagado en
 "los diez ejercicios inmediatos anteriores a que
 "se refiere el segundo párrafo de este artículo, se
 "actualizará por el periodo comprendido desde el
 "sexto mes del ejercicio en que se pagó, hasta el
 "sexto mes del ejercicio en el cual el impuesto
 "sobre la renta exceda al impuesto al activo.---
 "Los contribuyentes de esta ley no podrán
 "solicitar la devolución del impuesto sobre la
 "renta pagado en exceso en los siguientes casos:
 "--- I. Cuando en el mismo ejercicio, el impuesto
 "establecido en esta ley sea igual o superior a
 "dicho impuesto. En este caso el impuesto sobre
 "la renta pagado por el que se podría solicitar la
 "devolución por resultar en exceso, se
 "considerará como pago del impuesto al activo
 "del mismo ejercicio.--- II. Cuando su
 "acreditamiento dé lugar a la devolución del



Suprema
 Justicia D
 Secretaría Gen



CORTE DE
LA NACION.
AL DE ACUERDO

"impuesto establecido en esta ley, en los
"términos del segundo párrafo de este artículo.
"En este caso, el impuesto sobre la renta pagado
"en exceso cuya devolución no proceda en los
"términos de esta fracción se considerará como
"impuesto al activo para efecto de lo dispuesto
"en el segundo párrafo de este artículo.---
"Cuando el contribuyente no efectúe el
"acreditamiento en un ejercicio, pudiendo
"haberlo hecho conforme a este artículo, perderá
"el derecho a hacerlo.--- Los contribuyentes
"podrán también acreditar contra los pagos
"provisionales que tengan que efectuar en el
"impuesto al activo, los pagos provisionales del
"impuesto sobre la renta. Cuando en la
"declaración de pago provisional el
"contribuyente no pueda acreditar la totalidad del
"impuesto sobre la renta efectivamente pagado,
"el remanente lo podrá acreditar contra los
"siguientes pagos provisionales o contra la
"cantidad que tuviera que pagar en la declaración
"del ejercicio.--- Las personas morales que
"tengan en su activo acciones emitidas por
"sociedades residentes en el extranjero podrán
"acreditar contra el impuesto al activo, el
"impuesto sobre la renta pagado en el extranjero
"por dichas sociedades, hasta por el monto que
"resulte conforme a lo previsto en el segundo
"párrafo del artículo 6o. de la ley del impuesto
"mencionado.--- Los derechos al acreditamiento

**"y a la devolución previstos en este artículo son
"personales del contribuyente y no podrán ser
"transmitidos a otra persona ni como
"consecuencia de fusión. En el caso de escisión,
"estos derechos se podrán dividir entre las
"sociedades escidente y las escindidas, en la
"proporción en que se divida el valor del activo
"de la escidente en el ejercicio en que se
"efectúa la escisión, determinado éste después
"de haber efectuado la disminución de las
"deudas deducibles en los términos del artículo
"5o. de esta ley."**

Del contenido del precepto legal impugnado se aprecia que el acreditamiento del impuesto al activo en relación con el impuesto sobre la renta, guarda la siguiente mecánica:

a) Se posibilita al contribuyente a acreditar, contra el impuesto al activo, la cantidad que por concepto del impuesto sobre la renta le haya correspondido enterar en el ejercicio de que se trate.

b) Si el impuesto sobre la renta es menor al monto del impuesto al activo, la diferencia resultante será la cantidad a pagar por concepto de este último tributo en el ejercicio fiscal respectivo, considerándose al impuesto sobre la renta que se hubiera enterado, como pago del impuesto al activo del mismo ejercicio.



c) Si el impuesto sobre la renta es mayor al impuesto al activo del ejercicio, el contribuyente puede solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubiera enterado por concepto de este último tributo, en los diez ejercicios inmediatos anteriores y hasta por la diferencia del impuesto sobre la renta efectivamente pagado.

d) La mecánica de acreditamiento descrita es aplicable también a los pagos provisionales de ambos impuestos, estando en aptitud el contribuyente de aplicar los remanentes del impuesto sobre la renta que no se hubiesen acreditado al impuesto al activo a los siguientes pagos provisionales, o contra la cantidad a pagar en la declaración anual del ejercicio.



CORTE DE LA NACION
SALA DE ACUERDOS

También cabe destacar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción VI, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en mil novecientos noventa y cuatro, los contribuyentes no estarán obligados al pago de la contribución reclamada durante el periodo preoperativo, los dos primeros ejercicios fiscales de la empresa y el lapso de liquidación, por un plazo hasta de dos años. Dicho precepto a la letra dice:

**"...No se pagará el impuesto por el periodo
"preoperativo, ni por los ejercicios de inicio de
"actividades, el siguiente y el de liquidación,
"salvo cuando este último dure más de dos años.
"Lo dispuesto en esta párrafo no es aplicable a
"los ejercicios posteriores a fusión,
"transformación de sociedades o traspaso de**

**"negociaciones, ni a los contribuyentes que
"inicien actividades con motivo de la escisión de
"sociedades."**

Por ser conducente al presente estudio, se hace hincapié en el hecho de que el artículo transcrito fue reformado para mil novecientos noventa y cinco, habiéndose ampliado el plazo de no sujeción al tributo hasta por los primeros tres años a partir del inicio de actividades de la empresa, quedando en los siguientes términos, los que, en lo aplicable al caso, no han sido modificados posteriormente:

**"...No se pagará el impuesto por el período
"preoperativo, ni por los ejercicios de inicio de
"actividades, los dos siguientes y el de
"liquidación, salvo cuando este último dure más
"de dos años. Lo dispuesto en esta párrafo no es
"aplicable a los ejercicios posteriores a fusión,
"transformación de sociedades o traspaso de
"negociaciones, ni a los contribuyentes que
"inicien actividades con motivo de la escisión de
"sociedades."**

Conforme a las precisiones anteriores, los contribuyentes del impuesto al activo cuentan hasta con diez años a partir de que son sujetos obligados al pago del tributo (trece, contados desde su inicio de operaciones, excluyendo el periodo preoperativo, en la actualidad), para acreditar el impuesto sobre la renta que hubiesen generado, en los términos antes descritos.



Tal esquema de acreditamiento tampoco revela un trato inequitativo o desproporcional, porque los contribuyentes parten del mismo parámetro para su cálculo, basado en la especial forma de operación o utilización de sus activos, concurrentes a la obtención de utilidades. Por tanto, si determinado contribuyente ha realizado una mejor inversión y empleo de sus activos, es evidente que obtendrá una utilidad superior a quien no lo hizo, estando entonces en aptitud de realizar el acreditamiento correspondiente.

nos acreditamos
CORTES DE
LA FICION.
DEL EL ACUERDO

Sirve de apoyo a la anterior conclusión el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente a julio de 1996, página 133, que dice:

**"RENTA, IMPUESTO SOBRE LA. EL PRINCIPIO
"DE EQUIDAD TRIBUTARIA NO PUEDE
"ESTIMARSE INFRINGIDO POR LA ESPECIAL
"OPERACION DE LAS ACTIVIDADES
"MERCANTILES DE UN CONTRIBUYENTE. La
"circunstancia de que un contribuyente opte por
"realizar determinadas operaciones mercantiles,
"tales como la concertación de ventas a plazo
"que le reporten ingresos en crédito, mientras
"que al respecto, otro contribuyente sólo opere
"de contado y por ello pueda disponer de
"inmediato del ingreso respectivo, no conduce a
"la conclusión de que la Ley del Impuesto sobre
"la Renta, que grava en forma general unos y**

"otros ingresos, vulnera el principio de equidad tributaria, porque no es ésta la que impone al particular las modalidades a que debe sujetar la actividad que le reporta el ingreso, sino que es el propio contribuyente el que, de acuerdo con las características del mercado, usos, costumbres mercantiles y condiciones económicas o a su conveniencia personal, decide diferir los pagos de sus compradores lo que, por consecuencia, le fija la carga de financiar a sus deudores."

En esos términos, el acreditamiento que permite el artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo, resulta acorde con la consecución de los propósitos que le dieron origen, ya que en la medida que una empresa reporte cantidad a pagar respecto del impuesto sobre la renta, tendrá la oportunidad de realizar el acreditamiento del impuesto al activo, lo que, en principio, revela que de ser superior la cantidad a pagar por el impuesto sobre la renta, el tributo al activo no afectará la esfera económica del contribuyente, situación que incentiva que se declare en forma cabal en cuanto al impuesto sobre la renta y, paralelamente, que se persiga la eficiencia empresarial en busca de utilidades y del desarrollo económico del país, dado que la empresa que no se ubica en el supuesto de pagar impuesto sobre la renta o de obtener resultado favorable, pone de manifiesto ya sea que no es productiva o, que practica la evasión o la elusión del tributo, en ambos casos en detrimento de la economía del país.



LOS ANGELES
CORTE DE
LA NACION
del 2 de agosto de 1997

Ahora bien, si de acuerdo con la finalidad del tributo consistente en una adecuada eficiencia empresarial, las sociedades deben contar con los activos que sean susceptibles de concurrir en la obtención de utilidades, su tenencia para el desarrollo de la actividad de que se trate presupone que la empresa cuenta todavía con expectativas de éxito económico, aunque las utilidades no se produzcan de manera inmediata, sino que debe entenderse que el empresario se encuentra en espera de que se generen dentro del lapso que previsiblemente haya estimado dentro de su planeación de mercado, en el entendido de que es insostenible, jurídica y prácticamente, que continúen en la práctica de su objeto social a pesar de siempre tener pérdidas económicas, una vez que haya transcurrido en exceso el plazo que como expectativa se hubiese fijado para que la sociedad tuviese éxito económico.

El aspecto descrito se encuentra contemplado dentro del plazo que la ley establece para que los contribuyentes se encuentren obligados al pago del impuesto reclamado, al eximir de él a las empresas durante su periodo preoperativo y los dos primeros ejercicios fiscales (tres en la actualidad), lapso durante el cual se presupone que la empresa todavía no ha adquirido el auge comercial necesario, dentro de la actividad que desarrolla, que le permita obtener utilidades, sino que tal hipótesis deberá actualizarse dentro de los diez ejercicios fiscales siguientes y, una vez que ello acontezca, el contribuyente estará en aptitud de acreditar contra el impuesto al activo que pagó, el impuesto sobre la renta generado por las utilidades que hubiese obtenido. Asimismo, la ley presupone

que durante el periodo de liquidación de la sociedad, cuando éste no exceda de dos años, sus activos ya no se encuentran afectos a la obtención de ganancias, sino que su destino primordial radica en su aplicación a los pasivos y capital social, una vez acordada la liquidación, de conformidad con lo que para tal efecto dispongan los estatutos de la empresa, con lo cual se corrobora una vez más el nuevo enfoque del objeto del tributo, puesto que al no ser susceptibles de concurrir a la obtención de utilidades, no resulta lógico que los activos sean gravados por el impuesto de marras durante el lapso de liquidación de la empresa.

Consecuentemente, procede concluir que la mecánica prevista en el artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo respeta la garantía de proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, porque permite que los pagos provisionales o definitivos, que por concepto del impuesto al activo realicen las personas morales, queden acreditados contra el impuesto sobre la renta generado por la propia empresa dentro del extenso plazo que la ley reputa como suficiente para que pueda generar utilidades y continúe realizando sus actividades económicas, sin que la circunstancia de que, eventualmente, durante el lapso anteriormente precisado, tales utilidades no se hubiesen producido, porque, de llegar a generarse, el contribuyente estará en aptitud de acreditar el impuesto sobre la renta relativo contra el tributo reclamado pagado hasta con diez años de anterioridad; y, de no producirse nunca tales utilidades, esto evidenciará que la empresa de que se trate, cuando menos, percibió los rendimientos que garantizaron su funcionamiento y la tenencia



de los activos correspondientes, situación que revela capacidad contributiva, en razón de que dichos activos, en su momento, se encontraron afectos a la expectativa de obtener utilidades, cumpliendo con ello el objeto del tributo, de conformidad con los razonamientos expuestos a lo largo de este considerando.

Huelga señalar que no es acertada la consideración del A quo en cuanto a que el artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo viola el artículo 31, fracción IV, constitucional porque, dice, hace recaer el pago del impuesto en quienes no tienen capacidad contributiva o la tienen en menor medida, ya que, según se ha visto, el dato tomado por el legislador como signo de capacidad contributiva no es la ganancia mínima presunta derivada de la actividad empresarial, ni la utilidad misma que es el objeto del impuesto sobre la renta, sino la simple tenencia de activos concurrentes a la obtención de utilidades, por lo que el valor de éstos es el parámetro para medir la capacidad contributiva del sujeto del tributo.

CORTE DE
LA NACION
AL DE ACUERDO

Es corolario de lo anterior, que el Juez de Distrito debió declarar infundados los conceptos de violación aducidos en relación con que el artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo, en virtud de que no resulta violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, lo que conduce a revocar la respectiva concesión del amparo.

DECIMO PRIMERO. Determinado que el artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo no resulta inconstitucional, de conformidad con el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo,

este Tribunal Pleno debe hacerse cargo de examinar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez de Distrito, vinculados con los actos respecto de los que el amparo resulta procedente.

Inicialmente habrán de estudiarse los argumentos en que se cuestiona la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo, en lo relativo a la tasa para el cálculo del monto del pago del impuesto al activo.

De la demanda de garantías se desprende que, coincidentemente, en el apartado identificado con el inciso c), del primero y tercero de los conceptos de violación, la quejosa aduce que la tasa fija del 1.8% que se aplica a la base del impuesto, en términos del artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo, es desproporcional e inequitativa, ya que no atiende a la capacidad contributiva de cada contribuyente, siendo lo adecuado para respetar esta capacidad el establecimiento de una tasa progresiva.

Tales planteamientos son infundados, ya que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, impone la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, pero sea cual fuere el criterio interpretativo que se adopte, en la expresión "de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes" tiene perfecta cabida no sólo la tasa progresiva, sino también la fija, pues el precepto constitucional en cita no prohíbe la instauración de las tasas fijas, y menos aún consigna que sólo mediante el



establecimiento de tasas progresivas se satisfagan los principios tributarios contenidos en el mismo. Ello es así, en razón de que el pago de tributos en proporción a la riqueza gravada, se puede conseguir mediante la utilización de tasas progresivas, pero también con tasas fijas que atiendan a la capacidad contributiva de los sujetos en función del objeto gravado.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTES DE LA SUPLENTE
FEDERAL DE JEFES DE GOBIERNO

Tratándose del impuesto al activo, en el considerado precedente ya se expuso que, al establecerlo, el legislador no tomó en cuenta el patrimonio global de los contribuyentes (ni su renta global como sucede en el impuesto sobre la renta), sino sólo una manifestación aislada de su riqueza, como es la tenencia de activos idóneos para producir una utilidad indeterminada, por lo que el establecimiento de una tasa fija o única no viola los principios de proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que todos los sujetos deben de tributar en proporción directa a su propia capacidad, es decir, a la particular entidad de la tenencia de sus activos concurrentes a la obtención de utilidades.

Sirven de ilustración a las anteriores consideraciones, las jurisprudencias sustentadas por este Tribunal Pleno, identificadas con los números 20/90 y 31/97, visibles en el Semanario Judicial de la Federación, respectivamente en la Octava y Novena Epocas, Tomos VI, Primera Parte y Tomo V, correspondiente a mayo de 1997, páginas 43 y 59, que dicen:

La jurisprudencia número 20/90:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL
 "ARTICULO 2º DE LA LEY QUE ESTABLECE LA
 "TASA FIJA DEL 2% NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
 "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El artículo
 "2º de la ley que establece dicho tributo
 "publicada en el Diario Oficial de la Federación
 "del treinta y uno de diciembre de mil
 "novecientos ochenta y ocho, y que determina la
 "tasa fija del dos por ciento para el cálculo del
 "monto del impuesto al activo de las empresas,
 "cumple con el requisito de proporcionalidad
 "tributaria, toda vez que la capacidad contributiva
 "de los causantes está en relación directa con
 "sus activos. Al establecer este tributo, el
 "legislador no tomó en cuenta la capacidad
 "contributiva total, como acontece en el impuesto
 "sobre la renta, sino el limitado objeto
 "consistente en los activos del contribuyente, en
 "mérito de lo cual, la fijación de una tasa única
 "no viola el principio de proporcionalidad, ya que
 "cada sujeto tributará en proporción directa a su
 "propia capacidad."

SUPREMA
 JUSTICIA DE
 SECRETARIA DE

La jurisprudencia número 31/97:

"RENTA. LA TASA FIJA DEL 35% QUE
 "ESTABLECE EL ARTICULO 10 DE LA LEY DEL
 "IMPUESTO RELATIVO, NO ES VIOLATORIA
 "DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD



CORTE DE
LA NACION
DEL DE ACUERDO

"TRIBUTARIA. La fracción IV del artículo 31
"constitucional impone la obligación de
"contribuir al sostenimiento de los gastos
"públicos de la manera proporcional y equitativa
"que dispongan las leyes, pero sea cual fuere el
"criterio interpretativo que se adopte, en la
"expresión de la manera proporcional y
"equitativa "que dispongan las leyes" tiene
"perfecta cabida no sólo la tasa progresiva, sino
"también la proporcional, ya que el precepto
"constitucional en cita no prohíbe la instauración
"de las tasas proporcionales, y menos aún
"consigna que sólo mediante el establecimiento
"de tasas progresivas se satisfagan los
"principios tributarios contenidos en el mismo.
"Ello es así, en razón de que el pago de tributos
"en proporción a la riqueza gravada, se puede
"conseguir mediante la utilización de tasas
"progresivas, pero también con tasas
"proporcionales, como sucede en el caso del
"impuesto sobre la renta a cargo de las
"sociedades mercantiles, pues en la composición
"legal de la base gravable se tiene en cuenta,
"como ocurre en el impuesto de que se trata, la
"distinta aptitud contributiva de la riqueza
"delimitada por medio de los componentes que
"determinan el contenido económico del hecho
"imponible. En tales condiciones, en el impuesto
"sobre la renta de las sociedades, el respeto a la
"garantía de proporcionalidad exigida por el

*"artículo 31, fracción IV, constitucional, se
"consigue en una primera fase, con la
"determinación de la base gravable del impuesto,
"a lo cual no conciernen los gastos
"indispensables de la negociación; y después,
"con la aplicación de la cuota del 35% sobre esa
"base gravable que, independientemente de su
"monto, tendrá siempre la característica de ser
"producto del capital y no del trabajo."*

Las consideraciones que anteceden ponen de relieve lo infundado de los argumentos de mérito.

DECIMO SEGUNDO. En el apartado identificado con el inciso b) del segundo concepto de violación de la demanda de amparo, la quejosa aduce que la Ley del Impuesto al Activo viola el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque en ella existe indefinición en cuanto al objeto gravado, por lo siguiente: no se precisa lo que debe considerarse como activo, ni esto puede inferirse de lo dispuesto en las fracciones II y III de su artículo 2º; el artículo 4º señala que se considerarán activos financieros "entre otros", aquéllos que señala, lo que resulta impreciso y provoca incertidumbre; y, que tratándose de los activos consistentes en terrenos, esa fracción III, determina que para el cálculo de la base gravable, se considerará el monto original de la inversión, pero en términos de lo establecido en los artículos 41, 42 y 44, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los terrenos no se incluyen en el concepto de inversiones, por lo que sobre ellos no es dable calcular el monto original de la inversión.



Son infundados esos argumentos, para corroborarlo es pertinente transcribir lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, de la Ley del Impuesto al Activo:

"ARTICULO 1º. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto, únicamente por esos bienes. También están obligados al pago de este impuesto, los residentes en el extranjero por los inventarios que mantengan en el territorio nacional para ser transformados por algún contribuyente de este impuesto. Las empresas que componen el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera."



1. CONTRATO DE
DE LA NACION
GENERAL DE ACUERDOS

**"ARTICULO 2º. El contribuyente determinará el
"impuesto por ejercicios fiscales aplicando al
"valor de su activo en el ejercicio, la tasa del
"1.8%.**

**"El valor del activo en el ejercicio se calculará
"sumando los promedios de los activos previstos
"en este artículo, conforme al siguiente
"procedimiento:**

**"I. Se sumarán los promedios mensuales de los
"activos financieros, correspondientes a los
"meses del ejercicio y el resultado se dividirá
"entre el mismo número de meses. Tratándose de
"acciones, el promedio se calculará
"considerando el costo comprobado de
"adquisición de las mismas, actualizado en los
"términos del artículo 3º de esta ley.**

**"El promedio mensual de los activos será el que
"resulte de dividir entre dos la suma del activo al
"inicio y al final del mes, excepto los
"correspondientes a operaciones contratadas
"con el sistema financiero o con su
"intermediación, el que se calculará en los
"mismos términos que prevé el segundo párrafo
"de la fracción III del artículo 7º-B de la Ley del
"Impuesto sobre la Renta.**

**"II. Tratándose de los activos fijos, gastos y
"cargos diferidos, se calculará el promedio de
"cada bien, actualizando en los términos del
"artículo 3º de esta ley, su saldo pendiente de
"deducir en el impuesto sobre la renta al inicio**



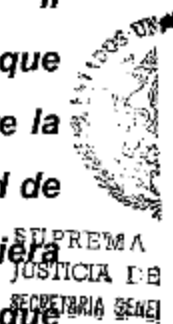
DOS MESES
CORRE DE
LA NACION.
AL DE ACUERDOS.

"del ejercicio o el monto original de la inversión
"en el caso de bienes adquiridos en el mismo y
"de aquéllos no deducibles para los efectos de
"dicho impuesto, aun cuando para estos efectos
"no se consideren activos fijos. El saldo
"actualizado se disminuirá con la mitad de la
"deducción anual de las inversiones en el
"ejercicio, determinada conforme a los artículos
"41 y 47 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
"En el caso del primer y último ejercicio en el que
"se utilice el bien, el valor promedio del mismo se
"determinará dividiendo el resultado antes
"mencionado entre doce y el cociente se
"multiplicará por el número de meses en los que
"el bien se haya utilizado en dichos ejercicios.
"En el caso de activos fijos por los que se
"hubiera optado por efectuar la deducción
"inmediata a que se refiere el artículo 51 de la
"Ley del Impuesto sobre la Renta, se considerará
"como saldo por deducir, el que hubiera
"correspondido de no haber optado por dicha
"deducción, en cuyo caso se aplicarán los
"porcientos máximos de deducción autorizados
"en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley del
"Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con el tipo
"de bien de que se trate.
"III. El monto original de la inversión de cada
"terreno, actualizado en los términos del artículo
"3º de esta ley, se dividirá entre doce y el
"cociente se multiplicará por el número de meses

"en que el terreno haya sido propiedad del
"contribuyente en el ejercicio por el cual se
"determina el impuesto.

"Los residentes en el extranjero a que se refiere
"el párrafo segundo del artículo 1º, que
"mantengan en territorio nacional activos de los
"comprendidos en las fracciones II y IV de este
"artículo por un periodo menor a un año,
"calcularán el impuesto correspondiente a los
"bienes comprendidos en la fracción II
"considerando el resultado de dividir el valor que
"se consigne en el pedimento a que se refiere la
"legislación aduanera disminuido con la mitad de
"la deducción por inversiones que le hubiera
"correspondido por el periodo que
"permanecieron en territorio nacional, de haber
"sido contribuyentes del impuesto sobre la renta,
"entre 365 multiplicado por el número de días
"que permanecieron en el territorio nacional.

"Para calcular el valor de los activos señalados
"en la fracción IV de este artículo, los
"contribuyentes a que se refiere el párrafo
"anterior considerarán el valor consignado a la
"entrada al país de dichos activos, adicionado del
"valor consignado cuando se retornen al
"extranjero y dividiendo el resultado entre dos.
"Este último resultado se dividirá entre 365 y el
"cociente se multiplicará por el número de días
"que permanecieron en territorio nacional. Los
"valores a que se refiere este párrafo serán los





"consignados en los pedimentos a que se refiere
"la legislación aduanera.

"IV. Los inventarios de materias primas,
"productos semiterminados o terminados que el
"contribuyente utilice en la actividad empresarial
"y tenga al inicio y al cierre del ejercicio,
"valuados conforme al método que tenga
"implantado, se sumarán y el resultado se
"dividirá entre dos.

"En el caso de que el contribuyente cambie su
"método de valuación, deberá cumplir con las
"reglas que al efecto establezca la Secretaría de
"Hacienda y Crédito Público."



COPIA DE
LA NACIÓN
DEL DE ACUERDO

"ARTICULO 3°. El costo comprobado de
"adquisición de las acciones que formen parte de
"los activos financieros se actualizará desde el
"mes de adquisición hasta el último mes de la
"primera mitad del ejercicio por el que se
"determina el impuesto.

"Se actualizará el saldo por deducir o el monto
"original de la inversión a que se refiere la
"fracción II del artículo 2° de esta ley, desde el
"mes en que se adquirió cada uno de los bienes,
"hasta el último mes de la primera mitad del
"ejercicio por el que se determina el impuesto.
"No se llevará a cabo la actualización por los que
"se adquieran con posterioridad al último mes de
"la primera mitad del ejercicio por el que se
"determina el impuesto.

**"El monto original de la inversión en los terrenos
"se actualizará desde el mes en que se adquirió o
"se valuó catastralmente en el caso de fincas
"rústicas, hasta el último mes de la primera mitad
"del ejercicio por el que se determina el
"impuesto.**

**"Cuando los inventarios no se actualicen
"conforme a los principios de contabilidad
"generalmente aceptados, éstos se deberán
"actualizar conforme a alguna de las siguientes
"opciones:**

**"I. Valuando el inventario final conforme al
"precio de la última compra efectuada en el
"ejercicio por el que se determine el impuesto, o**

**"II. Valuando el inventario final conforme al valor
"de reposición. El valor de reposición será el
"precio en que incurriría el contribuyente al
"adquirir o producir artículos iguales a los que
"integran su inventario, en la fecha de
"terminación del ejercicio de que se trate.**

**"El valor del inventario al inicio del ejercicio será
"el que correspondió al inventario final del
"ejercicio inmediato anterior."**

**"ARTICULO 4º. Se consideran activos
"financieros, entre otros, los siguientes:**

"I.- (Se deroga).

**"II. Las inversiones en títulos de crédito, a
"excepción de las acciones emitidas por
"personas morales residentes en México. Las**



"acciones emitidas por sociedades de inversión
"de renta fija se considerarán activos financieros.

"III. Las cuentas y documentos por cobrar. No se
"consideran cuentas por cobrar las que sean a
"cargo de socios o accionistas residentes en el
"extranjero, ya sean personas físicas o
"sociedades.

"No son cuentas por cobrar los pagos
"provisionales, los saldos a favor de
"contribuciones, ni los estímulos fiscales por
"aplicar.

"IV. Los intereses devengados a favor, no
"cobrados.

"Los activos financieros denominados en
"moneda extranjera, se valuarán al tipo de
"cambio del primer día de cada mes. Para este
"efecto, cuando no sea aplicable el tipo
"controlado de cambio, se estará al tipo de
"cambio promedio para enajenación con el cual
"inicien operaciones en el mercado las
"instituciones de crédito de la Ciudad de
"México."



De la anterior transcripción se desprende, en principio, que es inexacto que en la Ley del Impuesto al Activo exista indefinición en cuanto a lo que debe entenderse como activo, ya que, por una parte, su artículo 1º señala, que el objeto del tributo son los activos que se utilicen por los causantes o por terceros, en su caso, en actividades empresariales; y, por otra, que serán considerados como activos, los siguientes:

1. Los activos fijos, gastos y cargos diferidos, de acuerdo con el artículo 2º, fracción II, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo.

2. Los terrenos, según lo establecido por el artículo 2º, fracción III, de la ley en consulta.

3. Los inventarios de materias primas, productos semiterminados o terminados, de conformidad con el artículo 2º, fracción IV.

4. Los activos financieros, en términos de lo previsto por el transcrito artículo 4º, de la Ley del Impuesto al Activo.

Las precisiones realizadas ponen de manifiesto que la Ley del Impuesto al Activo no deja a inducciones o referencias lo que debe entenderse por activos, sino que lo define en forma clara, por lo que cumple cabalmente con el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

En lo conducente, sirven de apoyo a la consideración vertida, la jurisprudencia número 14/91 y la tesis X/92, sustentadas por el Tribunal Pleno de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, visibles en el Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, en los Tomos VII-Marzo y IX-Enero, páginas 38 y 12, cuya sinopsis son las siguientes:



LA JURISPRUDENCIA NUMERO 14/91:

"ACTIVO DE LAS EMPRESAS. LA LEY RELATIVA
"NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
"PREVISTO EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV,
"DE LA CARTA MAGNA, POR LA
"CIRCUNSTANCIA DE QUE NO COINCIDA CON
"LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN
"EL SEÑALAMIENTO DE LO QUE CADA UNO DE
"ESOS ORDENAMIENTOS CONCIBE COMO
"ACTIVOS Y PASIVOS. El principio de legalidad
"establecido en la fracción IV del artículo 31
"constitucional debe entenderse en el sentido de
"que la ley que crea un tributo contenga los
"elementos que configuren éste, como son el
"sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de
"pago, a fin de evitar que la autoridad
"arbitrariamente establezca tanto la cuantía del
"tributo como los mencionados elementos, dicha
"exigencia constitucional en materia tributaria se
"ve plenamente colmada por la Ley del Impuesto
"al Activo de las Empresas, toda vez que
"claramente señala, por una parte, que su objeto
"serán los activos que se utilicen por los
"causantes o un tercero, en su caso, en
"actividades empresariales; y, por otra parte, que
"serán considerados como tales: 1. Los activos
"fijos, gastos y cargos diferidos (artículo 2º,
"fracción II, párrafo 1º). 2. Los terrenos (artículo
"2º, fracción III). 3. Los inventarios de materias

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTE DE
LA NACION
JURISPRUDENCIA
FEDERAL DE ACUERDOS

"primas, productos semiterminados o terminados
 "(artículo 2º, fracción IV). 4. Los activos
 "financieros (artículo 4º). Como se ve, en los
 "términos de la Ley del Impuesto al Activo de las
 "Empresas no hay indefinición en cuanto a lo que
 "debe entenderse por activos, pues claramente
 "los señala en el texto de los artículos invocados,
 "situación que es suficiente para considerar que
 "la misma cumple cabalmente con la exigencia
 "de legalidad tributaria constitucional. Ahora
 "bien, independientemente de que pueda o no
 "haber complementariedad entre la Ley del
 "Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al
 "Activo de las Empresas, el hecho de que no
 "coincidan en el señalamiento de los conceptos
 "que cada una de ellas concibe como activos, no
 "provoca la inconstitucionalidad de la ley
 "reclamada, toda vez que, por un lado, si ésta,
 "como ya se dijo, establece cuáles son los
 "activos que grava, con ello cumple con el
 "requisito de legalidad; y, por otro lado, se trata
 "de dos ordenamientos secundarios autónomos
 "con objeto de tributación diferente, lo que por
 "lógica consecuencia amerita que sus
 "respectivos sistemas se integren con elementos
 "distintos. En tales condiciones, no se requiere
 "de coincidencia plena entre sus disposiciones
 "que consideran a determinados bienes como
 "activos o pasivos, a fin de que se estime que la
 "Ley del Impuesto al Activo de las Empresas se



SUPREMA
 JUSTICIA DE
 SECRETARIA DE



**"ajusta al principio de legalidad tributaria
"consagrado por la fracción IV del artículo 31
"constitucional."**

LA TESIS NUMERO X/92:

**"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. SI
"DEFINE EL OBJETO DEL TRIBUTOS,
"INDEPENDIENTEMENTE DE LA RELACION
"JURIDICA QUE LOS SUJETOS GUARDEN CON
"LOS ACTIVOS GRAVADOS. Del texto del
"artículo 1º de la Ley del Impuesto al Activo de
"las Empresas, en los diversos supuestos de
"causación que prevé, se desprende que las
"sociedades mercantiles y personas físicas que
"realicen actividades empresariales que residan
"en México, las residentes en el extranjero que
"tengan un establecimiento permanente en el
"país, las distintas a las anteriores que otorguen
"el uso o goce temporal de bienes que se utilicen
"en la actividad empresarial de otro causante, así
"como las asociaciones o sociedades civiles que
"lleven a cabo actividades mercantiles, causarán
"el impuesto por su activo, por el activo
"atribuible a los establecimientos que tengan en
"el país quienes residan en el extranjero, o por
"los bienes dados en arrendamiento. Además de
"lo anterior, de la ley también se desprende que
"se gravan los bienes que constituyan activos y
"que se utilicen en la realización de actividades**





*"empresariales, tales como los activos fijos,
"gastos y cargos diferidos (artículo 2º, fracción II,
"párrafo primero); los terrenos (artículo 2º,
"fracción III); los inventarios de materias primas y
"productos semiterminados o terminados
"(artículo 2º, fracción IV); y los activos
"financieros (artículo 4º). Por tanto, en los
"términos de la Ley del Impuesto al Activo de las
"Empresas no hay indefinición en cuanto a lo que
"debe entenderse por activos, pues claramente
"los señala en el texto de los artículos invocados,
"situación que es suficiente para considerar que
"la misma cumple cabalmente con la exigencia
"de legalidad tributaria constitucional, sin que
"sea obstáculo para así considerarlo la
"circunstancia de que quien lleve a cabo las
"actividades mercantiles sea propietario o
"únicamente poseedor de los activos utilizados,
"dado que esa situación sólo servirá de
"referencia para determinar el sujeto causante
"del tributo, pero sin que ello signifique que no
"se encuentre debidamente precisado el objeto
"del impuesto reclamado."*



Asimismo, es verdad que en el transcrito artículo 4º de la Ley del Impuesto al Activo, se emplea la frase "entre otros" en relación con los activos financieros, pero esto no entraña violación al principio de legalidad impositiva, pues es patente que tal expresión sólo busca ejemplificar el concepto de que se trata, mas no que con su inclusión en el texto normativo se



faculte a la autoridad aplicadora a fijar el objeto imponible; por lo contrario, la voluntad del legislador ya quedó impresa por lo que a ese aspecto se refiere, sin que ello entrañe libertad de la exactora para definir uno de los elementos esenciales del tributo.

Lo anterior se confirma de la lectura de la jurisprudencia número 22/90, consultable en las páginas 37 y 38 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 35, que prescribe:



**"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL
"ARTICULO 4º DE LA LEY NO VIOLA EL
"PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA
"PORQUE DEFINE EL OBJETO DEL IMPUESTO.
"El artículo 4º de la Ley del Impuesto al Activo de
"las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la
"Federación del treinta y uno de diciembre de mil
"novecientos ochenta y ocho, al establecer que
"se consideran activos financieros, entre otros, el
"efectivo en caja, las inversiones en títulos de
"crédito a excepción de las acciones, las cuentas
"y documentos por cobrar y los intereses
"devengados a favor, no cobrados, no viola la
"garantía de legalidad tributaria consagrada en el
"artículo 31, fracción IV, de la Constitución
"Política de los Estados Unidos Mexicanos,
"porque el concepto de activos financieros tiene
"una connotación precisa en el lenguaje técnico
"contable, no desconocido en el sistema**

***"tributario mexicano, pues ya ha sido empleado
"en otras disposiciones legales, como ocurría
"con el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre
"la Renta, vigente a partir de mil novecientos
"ochenta; y el empleo de la locución "entre
"otros" sólo revela la intención del legislador de
"anunciar de manera ejemplificativa para orientar
"a los destinatarios de la ley, algunas especies
"de activos financieros."***

Tocante a que no es posible calcular el monto original de la inversión respecto de los terrenos, porque la Ley del Impuesto sobre la Renta no incluye a éstos como inversiones, planteamiento que se advierte reiterado en el apartado identificado con el inciso d) del segundo concepto de violación de la demanda de garantías, debe precisarse lo siguiente:

De lo dispuesto por el artículo 2º, fracción III, de la Ley del Impuesto al Activo, se desprende que efectivamente hace mención al concepto "monto original de la inversión" al referirse a la determinación del valor sobre el que debe aplicarse la tasa del 1.8%, tratándose de los activos consistentes en terrenos, pero la circunstancia de que ni ese precepto ni ningún otro de esa legislación ni de su reglamento definan lo que debe entenderse por el aludido concepto, no entraña una violación al principio de legalidad tributaria, toda vez que al respecto es aplicable la definición contenida en el artículo 41, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.



Es así, pues el mencionado párrafo segundo del artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala: "El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por concepto de derechos, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras y honorarios a agentes aduanales."



CORTE SUPLENTE
DE LA NACION
AL DE ACUERDO

Esta definición además de ilustrativa resulta aplicable, puesto que para determinar el alcance de los términos empleados en determinada disposición legal, en defecto de una acepción propia o particular, no es sólo permisible sino aconsejable acudir a otra disposición que aporte elementos sobre el particular, incluso perteneciente a otro cuerpo normativo de la materia jurídica general, proceder que autoriza la hermenéutica jurídica en pos de clarificar plenamente la aplicación del derecho.

Además, en las condiciones relacionadas, la ausencia de definición del concepto "monto original de la inversión" en la Ley del Impuesto al Activo, no revela transgresión alguna al principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, pues siendo el propósito de esta exigencia fundamental, salvaguardar la seguridad jurídica, permitiendo, por un lado, que el contribuyente conozca el alcance de su obligación tributaria y evitando, por otro, que arbitrariamente la autoridad establezca los elementos esenciales de un tributo, como son el

sujeto, el objeto, la base y la tasa o tarifa, es inconcuso que se colma con la evidencia de que tales elementos se encuentran establecidos expresamente en ley, aunque sean varias las leyes que participen al respecto, es decir, el principio se cumple aunque los citados elementos no se encuentren previstos en un solo ordenamiento legal, o a pesar de que para arribar a su determinación o acertada acepción se tenga que acudir a diversas legislaciones, pues a través de esto, el legislador cumple con su aludido cometido constitucional y en muchos de los casos simplifica, bajo la técnica legislativa adecuada, la expresión material de las leyes, evitando la definición repetitiva de un mismo concepto en diversos ordenamientos legales.

Las reflexiones expuestas en el párrafo precedente resultan congruentes con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, plasmado en la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, en cuanto a que no existe ningún impedimento constitucional para que el legislador determine algunos elementos del tributo que establezca, remitiendo a los ya instituidos en otras leyes, porque, al hacerlo así, adopta o integra esos elementos, sin que por ello demerite su certeza y seguridad jurídica, que es lo perseguido por el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

La aludida jurisprudencia es la identificada con el número 21/90, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VI-Primera Parte, página 69, que dice:



**"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL.
"LOS ARTICULOS 2º, FRACCIONES II Y III, 3º Y 7º
"FRACCION II, DE LA LEY, NO VIOLAN EL
"PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA POR
"EFECTUAR REMISIONES A OTRAS LEYES. Esta
"Suprema Corte de Justicia ha sustentado el
"criterio de que no existe ningún impedimento
"constitucional para que el legislador determine
"algunos elementos del tributo que establezca,
"remitiendo a los ya instituidos en otras leyes,
"porque, al hacerlo así, adopta o integra esos
"elementos, sin que por ello demerite la certeza y
"seguridad jurídica de los mismos, que es fin
"perseguido por el principio de legalidad
"tributaria. Por tanto, la particularidad de que los
"artículos 2º, fracciones II y III, 3º y 7º, fracción II,
"de la Ley del Impuesto al Activo de las
"Empresas remitan a disposiciones de otras
"leyes para integrar la base del tributo de mérito,
"no transgrede el principio de legalidad
"impositiva que establece el artículo 31, fracción
"IV, de la Constitución."**



CORTE DE
LA NACION.
15 DE AGOSTO DE 1995

Asimismo, de ilustración a las consideraciones vertidas, es pertinente invocar la tesis número XXII/95 del Tribunal Pleno de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, página 37, cuya sinopsis dice:

**"DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL
 "PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA BASTA
 "CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE
 "CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN UNA LEY,
 "AUN CUANDO ESTA SEA LA DE INGRESOS. Si
 "el principio de legalidad tributaria consiste en
 "que los elementos esenciales de un tributo se
 "consignen expresamente en una ley, se respeta
 "tal principio cuando los elementos esenciales de
 "algún derecho se consignan en la Ley de
 "Ingresos respectiva, pues el principio de
 "legalidad no exige que tales elementos se
 "consignen en una determinada ley, sino sólo
 "que se establezcan en ley."**

SUPREMA
 JUSTICIA E
 SECRETARÍA DE

No es obstáculo para estimar satisfecho el principio de legalidad tributaria, que la Ley del Impuesto sobre la Renta, ordenamiento legal al que es necesario hacer remisión para precisar, tratándose de los activos consistentes en terrenos, el concepto de "monto original de la inversión", no incluya a los terrenos en la definición de activos fijos que establece en su artículo 42, ya que esto se explica en función a que el objeto de ese precepto legal es el de regular bienes que se caracterizan por ser susceptibles de depreciación, lo que no acontece con los terrenos cuando constituyen activos fijos, para efectos del impuesto al activo, porque tienden a incrementar su valor conforme transcurre el tiempo.

Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia que adelante se transcribe, identificada con el número 10/91,



sustentada por el Tribunal Pleno de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII-Marzo, página 24, la que se invoca con la salvedad consistente en que de las disposiciones legales a que hace mención, sólo el artículo 10 de la Ley del Impuesto al Activo ha sido reformado, lo que carece de relevancia por las razones antes expuestas, que revelan la actualidad del criterio.



CORTE DE
E LA NACION
ERAL DE ACUERDOS

**"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA
"LEY RELATIVA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
"LEGALIDAD TRIBUTARIA POR INDEFINICION
"DEL CONCEPTO "MONTO ORIGINAL DE LA
"INVERSION" POR LO QUE SE REFIERE A
"TERRENOS, PUES AL RESPECTO ES
"APLICABLE LA DEFINICION CONTENIDA EN EL
"ARTICULO 41 DE LA LEY DEL IMPUESTO
"SOBRE LA RENTA. El principio de legalidad
"tributaria, contenida en la fracción IV del artículo
"31 constitucional, exige que todo impuesto se
"establezca en una ley en la que se consignent de
"modo expreso sus elementos esenciales, a fin
"de evitar que su señalamiento quede al arbitrio
"de la autoridad exactora. El artículo 10, de la
"Ley del Impuesto al Activo de las Empresas
"hace remisión expresa a la Ley del Impuesto
"sobre la Renta a efecto de establecer la
"definición, entre otros, del concepto "monto
"original de la inversión", que de conformidad
"con la fracción III del artículo 2º de la primera ley**

"mencionada, le es aplicable a los terrenos para
 "la determinación del valor sobre el que deberá
 "pagarse el impuesto del 2% que este último
 "dispositivo prevé. Ahora bien, el párrafo
 "segundo del artículo 41 de la Ley del Impuesto
 "sobre la Renta define el contenido del concepto
 "de referencia, por lo que por el solo hecho de
 "hacer suya esa definición la Ley del Impuesto al
 "Activo de las Empresas por virtud de la remisión
 "contenida en su artículo 10, tiene precisada la
 "base del gravamen en cuanto a ese tipo de
 "bienes se refiere, cumpliendo en ese aspecto
 "con el principio de legalidad tributaria
 "consagrado por la fracción IV del artículo 31
 "constitucional. No es óbice para así estimarlo
 "que el diverso artículo 42 de la Ley del Impuesto
 "sobre la Renta no se refiera expresamente en su
 "definición de activos fijos a los terrenos, toda
 "vez que ello obedece a que el objeto del
 "precepto es el de regular bienes que se
 "caracterizan por ser susceptibles de
 "depreciación, lo que no sucede con los terrenos
 "cuando constituyen activos fijos, porque tienden
 "a incrementar su valor conforme transcurre el
 "tiempo."



DECIMO TERCERO. En el apartado identificado con el inciso d) del segundo concepto de violación de la demanda de amparo, la quejosa aduce que se viola la garantía de legalidad tributaria, ya que el procedimiento para el cálculo del impuesto



Instaurado por los artículos 2º y 3º, de la Ley del Impuesto al Activo, requiere de la aplicación de elementos técnicos con que no cuentan los contribuyentes, como son los factores de actualización proporcionados por el Banco de México, además de que, tratándose de inventarios, estos tienen que valuarse conforme a los "principios de contabilidad generalmente aceptados", que no son proporcionados por el Poder Legislativo.



CORTES DE LA NACION
SALA DE JUICIOS

También son infundados tales planteamientos, pues si bien de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2º y 3º, de la Ley del Impuesto al Activo, para determinar el monto del tributo, debe aplicarse al valor del activo en el ejercicio la tasa del 1.8% y respecto del valor de algunos bienes que conforman el activo debe tomarse en cuenta el factor de actualización a que se refiere la fracción II del artículo 7º de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se determina con base en el índice nacional de precios al consumidor, esto no da lugar a considerar que ese procedimiento es confuso o incierto respecto de la base del impuesto y que viola el principio de legalidad.



Tal postura encuentra sustento en que la obtención del índice nacional de precios al consumidor constituye un indicador que refleja las variaciones en el valor de la moneda y su determinación se encomienda a un órgano descentralizado, como es el Banco de México, que realiza una función técnica con el propósito de contar con un mecanismo que permita conocer la magnitud de los cambios económicos derivados del proceso inflacionario.

Además, el índice nacional de precios al consumidor, es un elemento que se determina con base en normas técnicas y no con el fin de fijar el monto de uno o varios impuestos, sin que el Banco de México realice con ello una función legislativa, ni que quede en sus manos el establecimiento de uno de los elementos esenciales del tributo, ya que este órgano se limita a calcular un elemento que el legislador estimó necesario utilizar para determinar el monto del impuesto, con base en una apreciación real del valor de los bienes y operaciones que se toman como referencia, para conocer la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, además de que se evita la posibilidad de hacer constantes reformas a la ley, para el sólo efecto de hacer los ajustes que imponen las variaciones del poder adquisitivo de la moneda.

En las condiciones relatadas, al remitir la ley al índice citado para determinar el factor de actualización, no se da lugar a la incertidumbre respecto del monto de la base del impuesto al activo, puesto que no se deja en manos de la autoridad exactora su cálculo, ni su establecimiento tiene como única finalidad la de fijar el monto de los impuestos.

Cabe agregar que la exigencia de que se consignent en la ley los elementos necesarios para conocer la medida en que debe contribuirse para los gastos públicos, no se incumple por el hecho de que alguno de ellos sea variable y que, para su determinación, el propio legislador ordene que se atienda a un dato que debe calcularse en forma periódica por un organismo descentralizado especializado.



Es inexacto que el comentado factor de actualización, se encuentre fuera del alcance de los contribuyentes, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, el índice nacional de precios al consumidor debe ser calculado mensualmente por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que permite su conocimiento por el contribuyente y su consecuente aplicación.



PORTO
LA NA
4 DE

Tampoco provoca incertidumbre alguna para la determinación de la base del tributo que el párrafo cuarto del artículo 3º de la Ley del Impuesto al Activo, establezca la posibilidad de que los inventarios se actualicen conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Se expone tal aserto, pues se advierte que el mencionado artículo 3º de la Ley del Impuesto al Activo hace referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados, no como reglas o normas de conducta obligatoria, sino como bases consuetudinarias de una técnica como es la contabilidad que resulta auxiliar en el manejo mismo de las empresas, es decir, como un método de valuación propio de las empresas que aporta resultados uniformes y que permite exámenes de comprobación, de seguimiento aconsejable más no obligatorio, tan es así que el artículo en estudio no prevé una sanción por la falta de actualización de los inventarios conforme a los citados principios, sino otorga otras opciones para efectuar esa actualización, de ahí que no resulta indispensable que esos principios se encuentren precisados en ley, máxime que no es

la función de ésta el determinar el contenido y alcance de las técnicas contables, sino el de tomar en cuenta sus resultados para poder determinar la situación fiscal del contribuyente; a lo que debe agregarse que, de cualquier manera, es inconcuso que el conocimiento de esos principios es del dominio público. Por consiguiente, sobre el particular no se actualiza incertidumbre alguna en relación con la determinación de la base del tributo.

DECIMO CUARTO. En el cuarto concepto de violación, la quejosa expone diversos planteamientos encaminados a poner de manifiesto que la Ley del Impuesto al Activo viola el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General de la República, ya que, dice, el Congreso de la Unión, mediante la creación del impuesto al activo, grava la propiedad inmobiliaria y, por tanto, hizo uso de una facultad impositiva que le corresponde al Poder Legislativo de las entidades federativas.

Los argumentos relativos son infundados, pues el tema de que tratan ya fue examinado por el Pleno de este Alto Tribunal, quien en sesión celebraba el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa, aprobó el texto de la jurisprudencia 25/90 consultable en las páginas 46 y 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 35, que es del tenor literal siguiente:

**"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA
"LEY RELATIVA, AL DETERMINAR SU OBJETO,
"NO VIOLA EL ARTICULO 115, FRACCION IV,
"CONSTITUCIONAL. Es cierto que, de**



**"conformidad con las Reformas Constitucionales
"del tres de febrero de mil novecientos ochenta y
"tres al artículo 115, fracción IV, se estableció
"que los ingresos provenientes de
"contribuciones que las legislaturas estatales
"impusieran sobre la propiedad inmobiliaria
"serían para los Municipios; pero tal reforma no
"debe ser llevada al extremo de considerar que
"corresponde al Municipio el cobro y
"administración de las contribuciones que toman
"en cuenta algún aspecto de la propiedad
"inmobiliaria para integrar la base sobre la cual
"deben pagarse (como acontece en el impuesto
"al activo de las empresas) y que,
"consecuentemente, su creación sea facultad
"exclusiva de las legislaturas estatales."**



No está por demás destacar que definido el objeto del impuesto al activo como la tenencia de activos concurrentes a la obtención de utilidades, es patente que no grava la propiedad inmobiliaria en términos de lo dispuesto por el artículo 115 fracción IV, de la Constitución General de la República, puesto que la materia de imposición no es la propiedad inmobiliaria, sino un elemento de la actividad empresarial, como lo son las propiedades afectas a tal fin.

De acuerdo con lo expuesto en los considerados décimo a décimo cuarto de esta ejecutoria, no se actualiza la violación de garantías aducida por la quejosa, lo que conduce a negarle la protección de la Justicia Federal respecto de los actos de las

autoridades cuya procedencia del juicio constitucional se estimó acreditada.

DECIMO QUINTO. Las consideraciones vertidas a lo largo de esta ejecutoria conducen a modificar la sentencia recurrida, por consiguiente, se deja subsistente el sobreseimiento decretado respecto de los actos precisados en el considerando segundo del fallo impugnado, respecto del artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo y tocante de la regla 262-A de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 1996" y su primera modificación; se decreta el sobreseimiento respecto del artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en términos del considerando noveno de este fallo; y respecto de los demás reclamados, se niega la protección de la Justicia Federal, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos décimo a décimo cuarto de esta ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, por una parte, en relación con los actos precisados en el considerando segundo; y, por otra, respecto de los vinculados con la regla 262-A de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 1996", y su primera modificación, así como del artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en lo relativo a la categoría de contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de bienes, en términos del considerando noveno, así como por los actos vinculados con el artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo.



TERCERO. Con la salvedad anterior, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Broker Distribución, S.A. de C.V.

NOTIFIQUESE; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin discusión, por unanimidad de once votos se aprobaron los resolutivos primero y tercero; y por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero y Silva Meza se aprobó el resolutivo segundo; los señores Ministros Aguirre Anguiano, Góngora Pimentel y Presidente Aguinaco Alemán votaron en contra y manifestaron que formularán voto de minoría. Fue ponente el señor Ministro Juan Díaz Romero.

Firman el Presidente, el Ponente y el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

MINISTRO JOSE VICENTE AGUINACO ALEMAN.

PONENTE:

MINISTRO JUAN DIAZ ROMERO.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. J. JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ.

Esta hoja forma parte del amparo en revisión número 1248/97, promovido por Broker Distribución, S.A. de C.V. Fallado el día treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en el sentido siguiente: **PRIMERO.** Se modifica la sentencia recurrida. **SEGUNDO.** Se sobresee en el juicio de amparo, por una parte, en relación con los actos precisados en el considerando segundo; y por otra, respecto de los vinculados con la regla 262-A de la "Resolución Miscelánea Fiscal para 1996", y su primera modificación, así como del artículo 1º, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Activo, en lo relativo a la categoría de contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de bienes, en términos del considerando noveno, así como por los actos vinculados con el artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo. **TERCERO.** Con la salvedad anterior, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Broker Distribución, S.A. de C.V. **Conste.**

RECIBIDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
PARA NOTIFICACION EL **13 ENE. 1999**

14 ENE. 1999

Se notificó la resolución anterior a los interesados. Conste por lista de la misma fecha, etc.

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA, Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION, POR MEDIO DE LISTA, DOY FE